INFORME DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, sobre administración de fondos de terceros y carteras individuales, y deroga los cuerpos legales que indica.

BOLETÍN Nº 7.966-05

_____

HONORABLE SENADO:

Vuestra Comisión de Hacienda tiene el honor de emitir su informe acerca del proyecto de ley de la referencia, iniciado en Mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, con urgencia calificada de “suma”.

A una o más de las sesiones en que la Comisión se ocupó de este asunto asistieron, además de sus integrantes, las siguientes personas:

Del Ministerio de Hacienda, el Ministro, señor Felipe Larraín; el Subsecretario, señor Julio Dittborn; la Coordinadora de Mercado de Capitales, señora Rosario Celedón; los asesores de Mercado de Capitales, señores Jorge Tapia y Gonzalo Carreño; el Coordinador Tributario, señor Miguel Zamora; el Coordinador Legislativo, señor Francisco Moreno; y la asesora, señorita, Gracia Ortúzar.

De la Superintendencia de Valores y Seguros, el Superintendente, señor Fernando Coloma; y el Intendente de Valores, señor Hernán López.

De la Asociación de Administradoras de Fondos de Inversión (ACAFI), el Presidente, señor Fernando Tisné; y el asesor legal, señor Luis Alberto Letelier.

Del Instituto Libertad y Desarrollo, la Directora del Programa Legislativo, señorita Natalia González.

El Decano de la Facultad de Administración de la Universidad Santo Tomás, señor Patricio Arrau.

De la Asociación de Administradoras de Fondos Mutuos de Chile A.G., la Gerente General, señora Mónica Cavallini; los directores, señora María Paz Hidalgo y señor Juan Pablo Lira; y la abogada, señora Evelyn Aubele.

De la Corporación de Estudios para Latinoamérica (CIEPLAN), la Secretaria Ejecutiva del Programa Legislativo, señorita Macarena Lobos.

Del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, la asesora, señorita Carol Parada.

La asesora del Honorable Senador señor Novoa, señorita Bernardita del Río.

- - -

Cabe señalar que la iniciativa fue discutida sólo en general, en virtud de lo dispuesto en el artículo 36 del Reglamento del Senado.

- - -

OBJETIVOS DEL PROYECTO

Los principales objetivos del proyecto de ley son los siguientes:

- Sistematizar el marco regulatorio de la industria de fondos, otorgando una normativa común a todas aquellas materias que así lo requieren.

- Simplificar el marco regulatorio general de la industria, combinando liquidez, gobierno corporativo y perfil de los inversionistas, velando porque los distintos vehículos de inversión sean objeto de una regulación diferente sólo en la medida que se justifique.

- Profesionalizar la actividad de gestión y comercialización de fondos (estándares de idoneidad y conocimiento), que deben ser exigibles de las administradores de fondos y de los agentes colocadores de cuotas.

- Promover la competitividad e internacionalización de la industria.

- Perfeccionar el marco regulatorio de los Fondos de Inversión Privados.

- Generar de un marco regulatorio para la gestión individual de carteras.

- Atraer nuevos actores extranjeros y generar mayor competencia y diversidad de demanda en el mercado de renta fija local.

- Eliminar la obligación de contratar los servicios de una administradora de fondos para la vivienda y de tener que conformar un fondo especial para la inversión de tales recursos, con el objeto de disminuir los costos ligados a la gestión de ahorros para la vivienda y permitir una mejor diversificación de los recursos originados en ese ahorro.

- - -

NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL

De aprobarse, los artículos 6°, 11, 22 letras e), g), h), e i), 23, 42, 43, 57, 58, 59, 85, 91 del artículo primero; letras b), c) y d) del artículo cuarto, y literales (i) y (ii) del inciso sexto del numeral 1 del artículo primero transitorio de la ley N° 20.190, sustituido en el artículo quinto del proyecto de ley, deben serlo por la mayoría absoluta de los Senadores en ejercicio, en virtud de lo dispuesto en el artículo 19, N° 23, de la Constitución Política de la República, en relación con el inciso tercero del artículo 66 de la misma Carta Fundamental.

- - -

ANTECEDENTES

Para una adecuada comprensión de la iniciativa en informe deben tenerse presente los siguientes antecedentes:

I.- ANTECEDENTES JURÍDICOS

- Ley N° 18.046, sobre sociedades anónimas.

- Ley N° 18.045, sobre mercado de valores.

- Ley N° 19.728, que establece un seguro de desempleo.

- Ley N° 19.281, que establece normas sobre arrendamiento de viviendas con promesa de compraventa.

- Ley N° 19.882, que regula nueva política de personal a los funcionarios públicos que indica.

- Ley N° 20.190, que introduce adecuaciones tributarias e institucionales para el fomento de la industria de capital de riesgo y continua el proceso de modernización del mercado de capitales.

- Ley N° 18.591, contiene normas complementarias de administración financiera, de incidencia presupuestaria y de personal.

- Ley N° 18.657, que autoriza creación de fondo de inversión de capital extranjero.

- Ley N° 18.815, regula fondos de inversión; modifica decretos con fuerza de ley números 251 y 252, ambos del Ministerio de Hacienda, de 1931 y 1960, respectivamente, y la ley N° 18.045.

- Ley N° 18.840, orgánica constitucional del Banco Central de Chile.

- Decreto ley N° 600, de 1974, que establece el estatuto de la inversión extranjera.

- Ley N° 18.876, que establece el marco legal para la constitución y operación de entidades privadas de depósito y custodia de valores.

- Decreto ley N° 825, de 1974, que establece la ley sobre impuestos a las ventas y servicios.

- Código Tributario.

- Decreto ley N°824, de 1974, que establece la ley sobre impuesto a la renta.

- Decreto ley N° 1.328, que fija normas para la administración de fondos mutuos.

- Decreto ley N° 3.500, que establece un nuevo sistema de pensiones.

- Decreto ley N° 3.538, de 1980, que crea la Superintendencia de Valores y Seguros.

B.- ANTECEDENTES DE HECHO

El Mensaje en que se origina el proyecto de ley da cuenta, en primer lugar, de sus fundamentos. Señala, al efecto, que hoy más que nunca Chile se encuentra en una posición privilegiada para hacer de su Mercado de Capitales una plataforma de infraestructura moderna y eficiente, que aporte al desarrollo y crecimiento del país, que tras sortear apropiadamente la crisis financiera internacional, demostró que el orden de las finanzas públicas, junto a un marco jurídico ordenado y respetado por todos y a una industria eficiente y responsable, le han permitido erigirse como un lugar atractivo para agentes e inversionistas de todas partes del mundo.

El Ejecutivo, agrega, cuenta con la convicción de que las condiciones imperantes permitirán a Chile transformarse en un país exportador de servicios financieros, tal como ha ocurrido exitosamente en otros sectores, como la agroindustria, la viticultura, la pesca y la minería, siempre en la medida que el marco jurídico vigente sea el adecuado para el cumplimiento de dicho objetivo. Nuestro país, siendo un mercado relativamente pequeño pero abierto comercialmente al resto del mundo, cuenta con el potencial para ampliar sus exportaciones, más allá de las materias primas, hacia sectores de mayor valor agregado, habida cuenta de sus ventajas comparativas, conocimiento y experiencia. Este es el caso particular de la industria de administración de activos de terceros y de asesorías financieras para inversionistas y emisores, tanto chilenos como extranjeros.

Desde el surgimiento del nuevo sistema de administración de fondos previsionales, Chile ha ido desarrollando un conocimiento cada vez más sofisticado en lo que a la administración de recursos se refiere, tanto a nivel académico como empresarial. Este vasto conocimiento permite hoy aspirar a que los nuevos servicios y productos financieros ligados a la administración de recursos, sean exportables en el corto y mediano plazo. Para ello es preciso, a juicio del Ejecutivo, una reforma profunda como la que propone el presente proyecto de ley, basada en dos pilares fundamentales: un conjunto de reformas a la industria de fondos, de índole institucional, y otro conjunto de reformas de naturaleza tributaria.

Reseña a continuación el Mensaje la situación actual de la industria, en la que coexisten diversos cuerpos legales que, a pesar de regular servicios financieros similares, establecen un marco jurídico para su prestación que en determinadas materias no aborda simétricamente problemáticas equivalentes, lo que genera incentivos a arbitrar entre regulaciones, optando por aquellas menos restrictivas. Tal es el caso de las diversas leyes que rigen la administración de fondos mutuos, la administración de fondos de inversión, la administración de fondos para la vivienda y la administración de fondos de capital extranjero.

Tal marco jurídico, al normar de manera diferenciada esos servicios financieros, introduce costos que distorsionan y encarecen innecesariamente el servicio de administración de recursos, lo que, sumado a otros de naturaleza tributaria, ha reducido la competitividad de los prestadores locales frente a sus pares a nivel internacional. Estos mayores costos podrían ser evitados si los referidos servicios pudieran ser ofrecidos por un prestador sometido a una sola legislación.

En atención al contexto reseñado, se explaya enseguida el Mensaje en los objetivos del proyecto de ley. El principal de ellos, proponer los cambios institucionales y tributarios que se requieren para cumplir con la meta de permitir que Chile se transforme en un país exportador de productos y servicios financieros ligados a la administración de carteras, y ampliar la gama de productos financieros con que cuentan los inversionistas nacionales y extranjeros que invierten en Chile. Todo ello, por cierto, manteniendo la seguridad y el prestigio de nuestro mercado.

Con esa finalidad, se pretende generar un único cuerpo legal aplicable a la prestación de los servicios de administración de fondos y carteras individuales, generando un tratamiento común para problemáticas equivalentes y manteniendo aquella diferenciación necesaria para mantener la adecuada protección de los inversionistas y para el eficiente funcionamiento de las actividades que por su naturaleza así lo requieran. Las medidas conducentes a ello serían:

a) Consolidar y simplificar los cuerpos legales que regulan la administración de fondos.

b) Incorporar regulación sobre administración de portafolios individuales, para establecer un marco mínimo de información

y prestación del servicio que aborde el tratamiento de algunos potenciales conflictos de interés y otras materias en las que pueda estar comprometido el interés público, tanto para administradoras como para otro tipo de entidades que ofrezcan este servicio.

c) Incorporar, para el ejercicio de funciones de asesoría financiera y gestión y comercialización de fondos, un nivel mínimo de idoneidad técnica o conocimientos que deben tener quienes participen de esas actividades.

d) Incorporar a fondos menos rescatables aquellas mejoras contempladas en el proyecto MKIII, tanto las que fueron incluidas para fondos mutuos como las originalmente contempladas para fondos de inversión.

e) Entregar mayor flexibilidad que la actualmente contemplada, como por ejemplo la inversión de fondos en valores emitidos o fondos gestionados por la misma administradora.

En síntesis, el nuevo proyecto persigue la creación de un nuevo marco legal, simplificado y simétrico, que será aplicado a los fondos a que el mismo proyecto se refiere y que tendrá como fines principales:

– Estandarizar el marco regulatorio.

– Definir un tratamiento razonable y equitativo para la industria de fondos.

– Especificar restricciones y requerimientos de los fondos considerando el tipo y número de inversionistas y la liquidez subyacente de los activos y de la cuota.

– Promover la inversión extranjera en Chile.

– Subir los estándares de la industria.

– Hacer la operación y administración de fondos más simple y a un menor costo.

– Mejorar el acceso al financiamiento para la industria de capital de riesgo y las pequeñas y medianas empresas.

– Ofrecer a los inversionistas nuevos productos financieros y mayores alternativas de inversión.

De conformidad con lo expuesto, describe posteriormente el Mensaje la estructura y contenidos del proyecto de ley sometido a la aprobación del Congreso Nacional. Consta aquél de dos títulos: el primero de ellos, relativo a la Gestión de Fondos, consolida en un solo cuerpo legal las disposiciones aplicables a la administración de fondos mutuos, de fondos de inversión, de fondos de capital extranjero y de fondos

para la vivienda, contenidas en las leyes Nº18.045, Nº18.815, Nº18.657 y N°19.281, y en el decreto ley N°1.328. El segundo título, en tanto, aborda la Gestión Individual de Recursos, estableciendo el marco jurídico aplicable a la administración de recursos de terceros mediante portafolios individuales.

Además de estos títulos, el proyecto contempla otras enmiendas legales, a saber: dos artículos que modifican la ley N°19.281 y la ley sobre impuesto a la renta, con miras a compatibilizar esos cuerpos legales con las disposiciones contenidas en el proyecto; un artículo adicional que sustituye el artículo primero transitorio de la ley Nº20.190, para simplificar y perfeccionar los incentivos a la inversión en capital de riesgo a través de fondos; y un conjunto de artículos transitorios cuyo objeto es permitir la adecuada entrada en vigencia del marco jurídico introducido por la presente iniciativa.

1. Gestión de Fondos.

Desarrolla el Mensaje este Título del proyecto de ley, cuyo primer capítulo, a su turno, contiene la definición de algunos de los términos que se emplean en el articulado de la iniciativa, con el objeto de acotar el alcance de sus disposiciones.

El segundo capítulo, en tanto, establece el marco general aplicable a las administradoras de fondos y a los responsables de su dirección, tales como requisitos de constitución, patrimonio y garantías exigidas para el ejercicio de la actividad, prohibiciones y responsabilidades, y procedimiento de liquidación de la entidad y sus fondos, entre otras materias. Las disposiciones aquí contenidas, si bien similares a las vigentes, son objeto de adecuación en su redacción para facilitar su comprensión y precisar las facultades de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS). Se establecen, además, responsabilidades adicionales para elevar los estándares para el ejercicio de la actividad, habida cuenta de la mayor libertad que el nuevo articulado entrega a estas entidades.

Por su parte, el tercer capítulo fija las reglas que deben cumplirse en la administración de los recursos del fondo, en la definición del nombre y comercialización de aquellos, en la relación entre el fondo y sus aportantes, y las normas de gobierno corporativo que deben seguirse en el funcionamiento de cada fondo. El nuevo articulado moderniza las actuales disposiciones, estableciendo que la diferenciación entre fondos de inversión y fondos mutuos radica en la rescatabilidad de la cuota, siendo las restricciones a la inversión y las normas de gobierno corporativo consecuencia de esa rescatabilidad. Es así como los fondos que no permitan el rescate total y permanente de los recursos invertidos, o que permitiéndolo no paguen el valor de las cuotas rescatadas en un período igual o inferior a 10 días, se denominarán fondos de inversión, a los que serán aplicables las normas de gobiernos corporativos correspondientes. Por otro lado, aquellos fondos que sí permitan el rescate total y permanente de los recursos invertidos y que paguen dichas cuotas en un plazo inferior o igual a 10 días, se denominarán fondos mutuos, siéndoles aplicables las respectivas restricciones a la inversión.

Reconociendo los beneficios que introdujeron las reformas contenidas en la ley Nº20.448 a la industria de administración de fondos mutuos, y teniendo en consideración que gran parte de dichas reformas son aplicables a la administración de fondos de inversión, este capítulo tercero las extiende a estos últimos. Entre ellas, destacan el esquema de depósito de reglamentos internos como requisito para la creación y comercialización de ambos tipos de fondos, y las modificaciones efectuadas por dicha ley para permitir la introducción de los Exchange Traded Funds (ETF) en Chile. Al mismo tiempo, este capítulo opta por mantener la regulación más eficiente de entre aquellas que abordaban de manera distinta las problemáticas comunes a ambos tipos de fondos. Por ejemplo, la posibilidad de que existan series de cuotas, que en el proyecto de ley se establece para ambos fondos y no sólo para los fondos mutuos, como ocurre en la actualidad.

Se configura, de esta forma, un marco jurídico flexible y moderno que compatibiliza la necesidad de las industrias de contar con mayores herramientas y espacios para poder ofrecer un mejor servicio financiero y una mayor gama de productos financieros, con la debida protección de los inversionistas y mantención de los principios de equidad, transparencia, orden y competencia que debe tener el mercado nacional. Esto, al dar más libertad a las administradoras en la gestión de los recursos de los fondos y otorgar a la SVS las facultades de regulación y fiscalización necesarias para actuar cuando así lo requiera la protección de los inversionistas, cuestión que implica la asignación de recursos adicionales a dicha entidad. En esta línea, este capítulo permite el aporte y rescate en valores en ambos tipos de fondos, la oferta de fondos más sofisticados y riesgosos, en la medida que sean ofrecidos a inversionistas calificados, y flexibiliza la inversión de los fondos, permitiéndoles, por ejemplo, invertir en otros fondos administrados por la entidad, recomprar cuotas del mismo fondo y transar fuera de bolsa; todo ello, en la medida que se cumplan las condiciones que al efecto define el mismo capítulo.

Del mismo modo, el capítulo tercero libera de ciertas normas de gobierno corporativo a aquellos fondos de inversión que permitan a los aportantes rescatar sus cuotas en un plazo inferior a 180 días, en el entendido que esa rescatabilidad da opción a los aportantes de retirarse del fondo en caso que no estén de acuerdo con las medidas adoptadas por la administradora o por los demás partícipes. Las normas de gobierno corporativo contenidas en este capítulo, cabe señalar, son similares a las actualmente exigidas a los fondos de inversión, esto es, la existencia de un Comité de Vigilancia y el deber de someter a la Asamblea de Aportantes ciertas materias.

En lo que concierne al capítulo cuarto, se establece la modalidad de repartos de beneficios y de tributación de los fondos y sus cuotas. Respecto de lo último, el proyecto no modifica en lo sustancial el tratamiento tributario de los fondos -no contribuyentes-, así como el de sus cuotas y su enajenación o rescate en el caso de inversionistas nacionales -mismo tratamiento tributario que las acciones de sociedades anónimas abiertas-.

En el caso de inversionistas extranjeros, con el fin de permitir que Chile se transforme en un país exportador de productos y servicios financieros ligados a la administración de carteras, el proyecto exime de impuestos tanto el mayor valor obtenido en la enajenación o rescate de cuotas, como las cantidades repartidas que correspondan a fondos que invierten al menos un 80% de su activo en el extranjero. Dicha exención de impuestos se justifica en el entendido que, de cumplirse esta condición, se trata de una exportación de servicios en la que tanto la fuente como el destino de las rentas es extranjero. Cuando el fondo no sea de aquellos que cumplan la condición anterior, el proyecto establece que el impuesto adicional será de 10%, tratamiento que resulta equivalente al que hoy se establece para los fondos de inversión de capital extranjero y los fondos de inversión de capital extranjero de riesgo, de forma que exista un tratamiento tributario similar y coherente. Independientemente de la distribución de las inversiones del fondo entre activos locales y extranjeros, el proyecto libera del pago de IVA a las remuneraciones que reciban las administradoras, en aquella parte que corresponda a cuotas de propiedad de inversionistas extranjeros, impulsando así la prestación de esta clase de servicios por parte de la industria chilena.

Finalmente, el capítulo quinto define el marco de acción de los fondos de inversión privados en términos similares al de las disposiciones actualmente vigentes, tanto en lo institucional como en lo tributario, manteniendo aquellos, entre otros aspectos, su condición de no contribuyentes. Al efecto, se realizan ciertas precisiones en materia de obligaciones de entrega de información y prohibiciones relacionadas con la oferta pública de estos fondos. Adicionalmente, se extiende la obligación legal de distribuir como dividendos al menos un 30% de los beneficios netos percibidos durante el ejercicio. Además, se establecen límites a la participación de la administradora y sus personas relacionadas en fondos privados bajo su administración, así como requisitos mínimos en cuanto al número e importancia de los aportantes no relacionados.

2. Gestión Individual de Recursos.

En relación con el Título 2 del proyecto de ley, destaca el Mensaje que se contempla el marco jurídico mínimo necesario para que exista una consistencia entre las regulaciones aplicables a la administración de recursos en la forma de fondos y de carteras individuales, entendiendo que las problemáticas que surgen de la prestación de ese servicio son similares. Es decir, los conflictos de interés inherentes al servicio de administración, los riesgos de las inversiones efectuadas por cuenta de terceros y el riesgo sistémico o impacto en la reputación del mercado que puede producir la prestación negligente o fraudulenta del servicio de gestión de recursos, ya sea por la magnitud de los recursos o por el número de afectados, son equivalentes en ambos tipos de administración.

En atención a su existencia es que se incorporan normas generales de tratamiento de conflictos de interés, tales como prohibición y definición de obligaciones y restricciones y condiciones para el ejercicio de la actividad cuando ésta pueda comprometer la fe pública. En este último caso, se requiere de la inscripción en el registro especial que al

efecto llevará la SVS. Quien ofrezca ese servicio, además, quedará sometido a la fiscalización de dicho organismo.

Hace referencia el Mensaje, en fin, a los Fondos de Inversión de Capital Extranjero y a los Fondos para la Vivienda.

3. Fondos de Inversión de Capital Extranjero.

El proyecto de ley simplifica los actuales requisitos establecidos para la inversión extranjera a través de fondos locales, al sustituir el conjunto de disposiciones que requerían de la conformación de un fondo especial para esos efectos, por la sola modalidad de tributación de los aportantes extranjeros de un fondo mutuo o de inversión nacional. De esta manera, se reducen los costos asociados a la gestión de recursos de inversionistas extranjeros, permitiendo la oferta directa de fondos nacionales. Con ese fin se propone la derogación de la ley N°18.657, y se incorpora específicamente en el articulado del proyecto el tratamiento tributario de esos inversionistas extranjeros.

4. Fondos para la Vivienda.

Con el objeto de disminuir los costos asociados a la gestión de ahorros para la vivienda y permitir una mejor diversificación de los recursos originados en ese ahorro, la iniciativa legal elimina la obligación de contratar los servicios de una administradora de fondos para la vivienda y de tener que conformar un fondo especial para la inversión de tales recursos, permitiendo a las instituciones recaudadoras invertirlos directamente en fondos nacionales que cumplan las condiciones que para eso se establecen. Es en esos términos que se prevé modificar la ley N°19.281.

- - -

DISCUSIÓN GENERAL

El **Subsecretario de Hacienda, señor Julio Dittborn**, expresó que la finalidad esencial del proyecto de ley es el fortalecimiento de la industria de administración de fondos de terceros en sus diferentes modalidades, como fondos mutuos, de inversión u otros, no sólo para ahorrantes chilenos, sino también, y muy especialmente, para los extranjeros.

Chile, destacó, es reconocido internacionalmente por el potente crecimiento y desarrollo logrado en los últimos años, con indicadores del primer mundo en materia de estabilidad macroeconómica, Estado de Derecho y calidad de la regulación. De ahí la importancia de unificar, en un solo cuerpo legal, las diferentes normativas vigentes que regulan la industria de administración de fondos de terceros.

El primer anuncio de esta reforma, añadió, se realizó el año 2010 en el Chile Day, instancia de encuentro entre

inversionistas extranjeros y autoridades y actores del mercado de capitales, celebrado en la ciudad de Nueva York. Posteriormente se reiteró en el nuevo Chile Day que tuvo lugar en Londres y hoy, ad portas del tercer evento de esa naturaleza, que se llevará a cabo el presente año, ya se hace necesario avanzar en su concreción.

Sin perjuicio de las diversas materias que aborda la iniciativa legal que se está proponiendo, prosiguió, que serán desde luego tratadas en su oportunidad, existen dos aspectos que merecen una mirada más detallada en la discusión parlamentaria, a saber: sus alcances tributarios y los Fondos de Inversión Privados (FIP).

En el ámbito tributario, explicó primeramente, el proyecto no modifica en lo sustancial el tratamiento tributario de los fondos –que actualmente son considerados no contribuyentes–, ni el de sus cuotas y su enajenación o rescate en el caso de inversionistas nacionales. Se mantiene, en consecuencia, el tratamiento que tienen los fondos mutuos y los fondos de inversión, pero se realiza un avance relevante en materia de certeza jurídica al incorporar, en la propia ley, una regulación detallada sobre el régimen tributario aplicable a la administradora, al fondo y a los inversionistas nacionales y extranjeros en forma separada, sistematizando la regulación que estaba dispersa en interpretaciones y jurisprudencia administrativa del Servicio de Impuestos Internos (SII).

En el caso de inversionistas extranjeros sin domicilio ni residencia en Chile, en cambio, se establece que estarán exentos de impuestos, tanto por el mayor valor obtenido en la enajenación o rescate de cuotas, como por las cantidades repartidas que correspondan a fondos que inviertan al menos un 80% de su activo en el extranjero. Lo anterior, indicó, debido a que se trata de una exportación de servicios, en la que tanto la fuente como el destino de las rentas son extranjeros. Con ello se corrige un aspecto que debería ser un estímulo importante para que administradoras locales de fondos actúen como plataforma financiera, administrando desde Chile activos en el extranjero. Para el caso que no se cumpla el señalado requisito de inversión, en tanto, el impuesto para los inversionistas extranjeros será de un 10% como impuesto único (adicional al 20% que paga la respectiva por concepto de impuesto de primera categoría), manteniéndose así el régimen tributario que hoy existe para los fondos FICE/FICER.

Además, agregó, el proyecto de ley libera del pago de IVA a las remuneraciones que reciban las administradoras, en aquella parte que corresponda a cuotas de propiedad de inversionistas extranjeros. El fundamento, expuso, es que al igual que todas las exportaciones, los servicios financieros que se exporten no estén afectos al IVA.

En relación con los FIP, en segundo lugar, resaltó que se consagra de modo expreso que, atendida su naturaleza y bajo número de aportantes, no quedarán sujetos a la fiscalización de la SVS y se regirán exclusivamente por sus reglamentos internos. Dado esto, hizo ver, se mantiene la restricción de que los FIP no pueden hacer oferta pública de sus

cuotas, y se agrega la obligación para las administradoras de FIP de remitir información a la SVS, en forma adicional a la que ya deben enviar al SII.

Se precisa, del mismo modo, que también se aplica a los FIP la obligación legal de distribuir como dividendos, al menos, el 30% de los beneficios netos percibidos durante el ejercicio, y se establecen límites a la participación de la administradora y sus personas relacionadas, así como requisitos mínimos en cuanto al número y la importancia de los aportantes no relacionados. A través de indicaciones incorporadas en la Cámara de Diputados en primer trámite constitucional, además, se incorporaron nuevas reglas que buscan reforzar a los FIP como vehículos de inversión pasivos, a cargo de una administración profesional e independiente de los aportantes, y se incluyeron nuevas obligaciones de información al SII y de llevar contabilidad y registro de FUT, a la vez que se explicitó la facultad de tasación del SII, cuestión que facilitará su labor de fiscalización. De esta manera, destacó, se introducen ajustes orientados a garantizar que estos instrumentos se utilicen para los fines para los cuales fueron creados. Por ello, para el caso de incumplimiento de estas normas, se prevé como sanción la pérdida del beneficio tributario, por lo que pasarían a tributar, como sociedades anónimas, el impuesto de primera categoría.

A continuación, hizo uso de la palabra la **Coordinadora de Mercado de Capitales del Ministerio de Hacienda, señorita Rosario Celedón**, quien desarrolló la siguiente exposición:

Motivación y Antecedentes

Mercado de Fondos

- Fuerte desarrollo de industria de administración de fondos de terceros durante los últimos años. Activos bajo administración por USD $50.000 millones, aproximadamente (18% del PIB), a diciembre de 2012.

- Sucesivos cambios regulatorios orientados a potenciar el desarrollo y dinamismo de la industria, fomentando su capacidad de proveer alternativas de inversión y crear valor para inversionistas.

- Aún quedan **desafíos pendientes** para que nuestro país pueda aprovechar al máximo su potencial para transformarse en **exportador de servicios financieros** y de administración de fondos.

- Para que ello sea posible, resulta necesario **eliminar ciertas asimetrías y rigideces** que la regulación actual contempla, y realizar ciertos **ajustes al tratamiento tributario** que rige para los **inversionistas extranjeros**.

Regulación Actual

- En la actualidad, coexisten en la industria **diversos vehículos de inversión regulados por distintos cuerpos legales**.

Vehículo de Inversión	Regulación (Cuerpos Legales)	Activos Administrados (USD millones / Dic' 12)
Fondos Mutuos	Ley 1.328 / Reglamento	37.948
Fondos de Inversión	Ley 18.815 / Reglamento	11.330
FICE / FICER	Ley 18.657	396
Fondos para la Vivienda	Ley 19.281 / Reglamento	310

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros

A lo anterior se suma la ley de mercado de valores, que regula a las administradoras de fondos fiscalizados por la SVS.

- Si bien estos vehículos persiguen objetivos similares, existen **asimetrías regulatorias** en diversos aspectos (series de cuotas, formas de aporte y rescate, aprobación de reglamentos, posibilidad de administrar FIP y FICE, entre otras) que**, sin responder a una justificación técnica clara**, pueden generar confusión entre los inversionistas, motivar arbitrajes regulatorios e incluso provocar desafíos de supervisión.

Proyecto de Ley Única de Fondos

Objetivos del Proyecto

- Sistematización del marco regulatorio para la industria de fondos, otorgando una normativa común a todas aquellas materias que así lo requieran. Por ejemplo, requisitos de capital, definiciones de aportante, garantías, etc.

- Simplificación del marco regulatorio general, que combine liquidez, gobiernos corporativos y el perfil del inversionista. Al respecto, se persigue que los distintos vehículos de inversión sean objeto de una regulación diferente en la medida que se justifique. Dicha justificación, a su vez, estará dada por la liquidez de la cuota. Asociado a ello estarán los requisitos de gobierno corporativo que correspondan y el perfil de los inversionistas.

- Profesionalización de actividad de gestión y comercialización de fondos (estándares de idoneidad y conocimiento), exigible de las administradores de fondos y los agentes colocadores de cuotas.

- Promoción de competitividad e internacionalización de la industria.

- Perfeccionamiento del marco regulatorio de FIP.

- Generación de un marco regulatorio para la gestión individual de carteras.

- Atracción de nuevos actores (extranjeros) y generación de mayor competencia y diversidad de demanda en el mercado de renta fija local.

Ordenar y equiparar marco jurídico vigente aplicable a la administración de fondos

Consolidar los cuerpos legales aplicables a la administración de fondos: ley sobre Administración de Fondos Mutuos, ley sobre Administración de Fondos de Inversión, ley que autoriza creación de Fondos de Inversión de Capitales Extranjeros, ley que establece Normas sobre Arrendamiento de Viviendas con Promesa de Compraventa (Título VI), y ley de Mercado de Valores (Títulos XX y XXVII).

Flexibilizar el Marco Jurídico Vigente (nuevas oportunidades)

Se amplía gama de productos financieros que pueden ofrecer las administradoras.

- Se introduce un fondo que combina rescatabilidad de los fondos mutuos y mayores flexibilidades para la inversión de fondos de inversión. De esta forma, las exigencias de gobierno corporativo (asambleas de aportantes, comité de vigilancia) se acotan solamente a aquellos fondos de inversión no rescatables o de rescatabilidad restringida.

- Se revisan restricciones a la inversión de fondos dirigidos a inversionistas calificados.

- Se extiende modalidad de aporte y rescate en valores a los fondos de inversión (ETF).

- Se simplifican restricciones a la inversión de los fondos

Flexibilizar el Marco Jurídico Vigente (reducción de costos)

Se reducen costos en la prestación de servicios de administración.

- Se extiende modalidad de depósito de reglamentos internos a los fondos de inversión.

- Se acota obligación de celebrar asambleas de aportantes sólo a fondos no rescatables.

- Se permite la inversión directa en fondos mutuos y de inversión, por parte de inversionistas extranjeros y del ahorro para la vivienda, eliminando la existencia de AFICE y AFV.

Elevar estándares de administración y comercialización de fondos

Se fortalecen cimientos para la aplicación del enfoque de supervisión basada en la gestión de riesgos.

- Para iniciar operaciones las administradoras deben contar con políticas, procedimientos y controles que requiera la SVS.

- Se permite a la SVS incrementar las exigencias de garantías en función de la calidad de la gestión de riegos realizada por la administradora.

Se introduce un modelo de acreditación de conocimientos e idoneidad, aplicable a directores, gerentes y ejecutivos de las administradoras, por un lado, y agentes colocadores, del otro.

Promover competitividad e internacionalización

- Se libera del pago de IVA a las remuneraciones que reciban las administradoras, en aquella parte que corresponda a cuotas de propiedad de inversionistas extranjeros. Se homologa, así, el marco regulatorio con el que existe en otros polos financieros.

- Se simplifica tributación de rentas de extranjeros por la nueva inversión efectuada en fondos nacionales que invierten en el extranjero (extendiendo régimen de impuesto único de FICE y FICER)

Promover competitividad e internacionalización: atracción de inversionistas extranjeros al mercado de Renta Fija Chileno

Se efectúan ajustes operativos a tratamiento tributario de ganancias de capital para aumentar liquidez del mercado de renta fija y atraer inversionistas extranjeros

Objetivo:

- Mejorar y hacer más competitivo el financiamiento para las empresas chilenas y el sector público chileno. Actualmente, ciertos requisitos, como la obligación de transar los bonos en bolsa o que la retención de impuestos corresponde al emisor, tornan restrictivo el desarrollo de estas operaciones, lo que se trasunta en que sólo se estén acogiendo al beneficio tributario bonos de tesorería.

- ¿Cómo? Atrayendo inversionistas extranjeros al mercado de renta fija chileno, hoy casi totalmente ausentes. **¿Por qué?** Por la existencia de falencias operativas en el tratamiento tributario.

Las modificaciones propuestas NO constituyen una ampliación de exenciones tributarias a las ganancias de capital en renta fija; sólo son modificaciones operativas en el marco de la ley vigente.

Fondos de Inversión Privados

- Se ratifica la naturaleza de vehículo de inversión pasivo de los fondos de inversión privados, que requieren de una administradora profesional e independiente y aportantes no relacionados con intereses contrapuestos.

- Se precisa que los FIP no pueden desarrollar actividades distintas que la de invertir y que generen rentas gravadas con primera categoría. Se eliminan incentivos a desarrollar estas actividades a través de fondos (postergando o evitando el pago de impuestos).

- Se incorporan límites a la participación de la administradora y sus personas relacionadas en fondos privados bajo su administración. Al cabo de un año, la administradora debe haber sido capaz de colocar nuevas cuotas.

- Se incorporan requisitos mínimos en cuanto al número y la importancia de los aportantes no relacionados.

- Se refuerzan las facultades de SII de requerir información y efectuar tasaciones, que permitan una adecuada fiscalización.

- Incumplimiento de estos requisitos hace aplicable la tributación de las sociedades anónimas.

- Adicionalmente, se complementan obligaciones de entrega de información a la SVS y prohibiciones relacionadas con oferta pública.

Generar marco jurídico especial para servicio de administración de carteras individuales.

- Se establece el marco general que regulará el servicio.

- Se delimita el servicio que será regulado y fiscalizado por la SVS: en función del número de carteras administradas, el monto administrado o el vínculo existente entre los clientes cuyas carteras son administradas. Se crea un registro al efecto, y se determinan reglas de conflicto de interés básicas y de segregación de activos.

- Se permite a la SVS a incrementar exigencias de garantías en función de la calidad de la gestión de riesgos realizada por la administradora.

Beneficios Esperados

Nuevo marco legal simplificado y simétrico para la industria de fondos, con los siguientes objetivos principales:

- Estandarizar el marco regulatorio para la industria de fondos.

- Especificar requerimientos de los fondos, considerando el tipo y número de inversionistas y la liquidez subyacente de los activos y de la cuota.

- Permitir la adaptabilidad regulatoria necesaria ante mercados financieros fluctuantes y en permanente proceso de innovación.

- Hacer la operación y administración de fondos más simple y menos costosa.

- Ofrecer a los inversionistas nuevos productos financieros y mayores alternativas de inversión.

- Establecer estándares de comercialización y administración de fondos acorde a recomendaciones internacionales.

- Promover la inversión extranjera en Chile, convirtiéndolo en centro financiero regional.

Posteriormente, el **Presidente de la Asociación Chilena de Administradoras de Fondos de Pensión (ACAFI), señor Fernando Tisné**, efectuó una presentación que inició resaltando la sentida y prolongada aspiración de su institución por lograr que Chile se transforme en un centro financiero de administración de activos. El prestigio de nuestro país, sostuvo, construido a lo largo de más de veinte años de certeras políticas económicas, sumadas a un adecuado marco legal, han permitido contar con un mercado de capitales muy sofisticado, configurando hoy en día un escenario propicio para que la industria adquiera un carácter relevante.

Enseguida, pasó a abordar los siguientes puntos:

Mercado de Capitales Bicentenario

Chile centro financiero, un anhelo de país, un largo camino

- Entre 1995 y 1998, el comité Chile Centro Financiero, con apoyo del Presidente de la República señor Eduardo Frei, el Ministro de Hacienda señor Eduardo Aninat y el Alcalde de Santiago señor Jaime Ravinet, dieron los primeros pasos para transformar a Chile en un centro financiero regional.

- El año 2001, el Presidente de la República señor Ricardo Lagos, junto al Ministro de Hacienda señor Nicolás Eyzaguirre, dieron inicio a la Bolsa Offshore, primer paso para hacer de Chile un centro financiero de administración de activos. En esa oportunidad se crearon los denominados Fondos 90/10 (básicamente, una exención para que inversionistas extranjeros pudieran invertir en fondos constituidos en Chile, sin tener que tributar en nuestro país).

- El año 2010, la Presidenta señora Michelle Bachelet y el Ministro de Hacienda señor Andrés Velasco, impulsaron el denominado proyecto MKIII, con el objetivo de *"posicionar a **Chile como una plaza financiera a nivel regional**, de forma tal de sacar provecho de las ventajas comparativas que nuestro país posee en materia de estabilidad social, política y económica, experiencia en administración de activos financieros, infraestructura y telecomunicaciones, entre otras".*

Para graficar el impacto que podría tener el posicionarse como plataforma regional de administración de activos financieros, y la oportunidad que allí se encuentra, el **señor Tisné** puso como ejemplo el caso de Luxemburgo, que siendo un país pequeño ha tenido recientemente un desarrollo notable en este mercado.

Caso Luxemburgo

	1987	2013
Activos bajo administración	€ 25 mil mm	€ 2,5 billones



Crecimiento: 100x

La industria de administración de activos hoy genera:

- 8% del PGB
- 10% de la recaudación tributaria → U$ 2,500 millones
- 13.000 trabajos

Hizo referencia, asimismo, a los países MILA, que en forma natural debieran ser los primeros clientes a los que el mercado chileno debiera ofrecer sus servicios. En ellos existen activos por US$ 400.000 millones.

Fondos de Pensiones MILA (Perú, Colombia, México y Chile).

	Hoy	En 10 años
Activos	U$ 400 mil mm	U$ 1 billón

Hoy: U$ 110 bn están invertidos en el extranjero (principalmente en Luxemburgo). Es decir, son susceptibles de que la industria chilena ofrezca sus servicios.

Mercado accionario

Cuando las reformas al mercado de capitales son fáciles de implementar, expresó, son exitosas.

Así ocurrió con la exención de ganancias de capital (artículo 18 ter). Hasta el año 2000, las compañías chilenas que deseaban levantar gran capital, iban a colocar ADR (*American Depositary Receipt)* a Estados Unidos. Doce años más tarde, la cantidad de quienes lo hacen ha disminuido, y la mitad del volumen transado de esas compañías se hace en Chile.

	2000	2012	
Compañías con ADR	24	12	
	33% Chile	50% Chile	➡ Crecimiento 7,5x
Volúmenes Transados	67% USA	50% USA	➡ Crecimiento 4,0x

Últimos 10 años	Monto recaudado
28 Nuevas empresas transando en bolsa	U$ 4.000 MM
35 Aumentos de Capital	U$ 14.000 MM

De modo, destacó, que ha sido el mercado bursátil el que ha provisto a las empresas en Chile del capital necesario para el crecimiento experimentado en la última década.

Mercado de Bonos

Un ejemplo en sentido inverso, sostuvo, se presenta en el mercado de renta fija, a partir de la ley MKI, que creó el incentivo del artículo 18 bis para la inversión extranjera. Allí, los mecanismos

de certificación de los inversionistas fueron tan exigentes y engorrosos, que no funcionó.

Posteriormente, el año 2009 se implementó una enmienda al artículo 104, estableciendo que los bonos de las empresas sean los exentos de las ganancias de capital. Empero, la situación al día de hoy es la siguiente:

- Bonos empresas: no hay acogidos a la fecha.

- Bonos Tesorería y Banco Central: del orden de 30 bonos acogidos.

Tenencia de extranjeros de bonos emitidos en los mercados locales:

País	**%**
México	58%
Perú	56%
Chile	**1%**
Brasil	26%

El impacto de esta realidad, concluyó, es que el costo de capital para las compañías aumenta.

A continuación, el **señor Tisné** se explayó sobre diversas consideraciones relativas al proyecto de ley sometido a conocimiento de la Comisión.

Principales objetivos Ley Única de Fondos.

Transformar a Chile en plataforma regional para la administración de activos financieros. A marzo del año en curso, indicó, la industria maneja fondos de inversión por, aproximadamente, US$ 12.000 millones. De ellos, cerca del 70% corresponde a fondos de pensiones, pero prácticamente sin la presencia de inversionistas extranjeros.

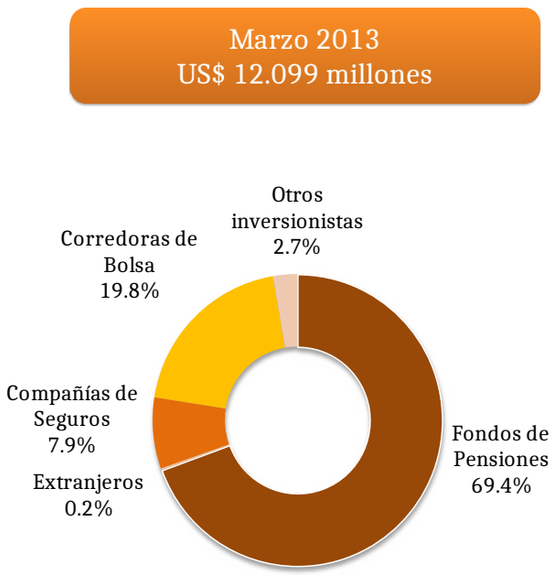
La expectativa, entonces, es poder atraer unos US$ 10.000 millones desde el extranjero para que inviertan en fondos chilenos y desde aquí se administren sus inversiones al resto de Latinoamérica.

Desarrollar el mercado de capitales local

Entregar al mercado nuevas alternativas e instrumentos de ahorro, ampliando sus oportunidades de inversión y mejorando liquidez de fondos de inversión.

Hoy NO hay extranjeros invirtiendo en fondos en Chile.

En 10 años, el plan es llegar a **US$ 10.000 millones**





Plataforma Regional de Administración de Activos Financieros

En los últimos años se ha construido una base sólida para hacer de Chile una plataforma para exportar servicios financieros para la región.



Cifras a marzo 2013.
Cifras en % como total de los activos de la industria.

Hoy, en consecuencia, la industria chilena tiene en stock, listos para ser exportados, más de US$ 4.000 millones, que representan casi un tercio de los recursos de toda la industria.

La pregunta que surge, hizo ver, es si habrá interés en comprar ese producto. Y la respuesta es que hoy ya existen clientes que lo hacen. El punto es que no lo están haciendo en Chile, pues, producto de las limitaciones regulatorias, las administradoras chilenas se han visto forzadas a constituirse fuera del país, en lugares como Luxemburgo, Canadá o Perú.

De manera que la industria está exportando administradores y sus fondos, pero no servicios financieros.



Cifras a marzo 2013.

Chile es parte importante de Latinoamérica. Es por esto que son necesarios los fondos de la regla 80/20 (y ya no el 90/10). Los inversionistas extranjeros, explicó, buscan adquirir fondos que sean administrados en Latinoamérica, para lo que Chile representa un mercado muy atractivo. Sin embargo, la regla del 90/10 obligaba a vender fondos que invirtieran en Latinoamérica, pero excluyendo a Chile, cuestión que no resultaba interesante para inversionistas asiáticos, europeos o norteamericanos.

Evolución de Chile en los Mercados de Renta Fija y Acciones LatAm

PARTICIPACIÓN CHILE ÍNDICES LATAM	2010	2011	2012
RENTA FIJA LATAM	4,5%	5,5%	5,2%
ACCIONES CÍAS PEQUEÑAS LATAM	17,4%	14,7%	16,6%

Cifras a diciembre 2012. Índices utilizados: Cembi Broad LatAm y MSCI EM LatAm Small Caps.

¿Por qué es bueno este proyecto para el país?

Impuestos pagados por inversionistas extranjeros en la industria de fondos en Chile.

	2010	2022
IMPUESTOS PAGADOS	USD 1 mm (*)	USD 25 mm (**)

(*) Costo de eliminar los impuestos a inversionistas extranjeros.
(**) Impuestos generados indirectamente por la llegada de inversionistas extranjeros a Chile.

Actualmente, hizo hincapié, las escasas inversiones que por estos conceptos se verifican en Chile significan cerca de US$ 1 millón en impuestos. Si, por el contrario, fuera posible atraer US$ 10.000 millones de inversión en diez años, sería posible recaudar, por la actividad generada, unos US$ 25 millones en impuestos.

Finalmente, el **señor Tisné** dio a conocer aquellos aspectos relacionados con el proyecto de ley que, en opinión de ACAFI, debieran ser incluidos o perfeccionados:

- Exención IVA a Fondos de Pensiones y series de cuotas acogidas al APV.

En la actualidad, expuso, respecto de fondos constituidos en cualquier país y que invierten en Latinoamérica, el administrador chileno compite deslealmente con el extranjero. Esto, por cuanto las comisiones de los fondos de pensiones para el primero pagan IVA, no así las de un inversionista extranjero. El administrador nacional, en consecuencia, entra a competir al mercado con un precio 20% más caro.

- Modificar el requerimiento establecido para que extranjeros no tengan como socios o beneficiarios a chilenos.

Este requisito, sostuvo, no se aviene con la práctica de una industria como esta. Por ejemplo, exigir a una compañía de seguros peruana cuyo dueño es un holding financiero que transa sus acciones en Perú y Estados Unidos, que certifique que en su propiedad no hay más de 5% de socios chilenos, es muy dificultoso, pues seguramente ni siquiera ellos saben quiénes son sus accionistas, porque las acciones se mantienen en custodia en corredores de bolsas.

- Agregar a los corredores de bolsa como agentes retenedores de impuestos en el caso de operaciones por bolsa.

- Ampliar las formas de pago de las cuotas establecidas en la ley, incluyendo transferencia electrónica de fondos u otros mecanismos equivalentes.

- Permitir que el valor de rescate de las cuotas se defina en el reglamento interno de cada fondo y no necesariamente sea el valor cuota.

- Aclarar algunos temas administrativos relativos a los requisitos de las administradoras y fondos, la fecha de constitución de la garantía a favor de los partícipes y la obligación de incluir en el nombre de los fondos la expresión “no rescatable”.

Finalizando su exposición, el **señor Tisné** enfatizó la necesidad de preservar la simpleza con que ha sido concebida la iniciativa legal en estudio, y de aprovechar la oportunidad histórica que se presenta para que Chile pueda transformarse en centro de exportación de servicios de administración de recursos de terceros.

El **Honorable Senador señor Kuschel** consultó si, aun con las limitaciones que se han reseñado, existen casos de administradoras constituidas en Chile.

El **señor Tisné** señaló que ni a la industria de fondos de inversión ni a la de fondos mutuos llegan inversionistas extranjeros. Vale decir, no se están exportando servicios para la atracción de capitales. De ahí que, como ya expresara, lo que ha ocurrido es que las administradoras han debido constituirse en otros países para ofrecer sus productos. Por lo mismo, si no se llevan a cabo las enmiendas pertinentes, no será posible revertir la tendencia, y en un plazo de entre cinco y diez años, seguramente todas las administradoras estarán instaladas en el exterior.

El **Honorable Senador señor Kuschel** preguntó si, a partir de lo expuesto, los otros países MILA (Perú, Colombia y México) han logrado captar el mercado de constitución de fondos.

El **señor Tisné** sostuvo que si bien no se puede hablar hoy de que aquellos países hayan capturado ese mercado, tal es,

precisamente, el riesgo a que se expone Chile si no adopta medidas para hacerse del liderazgo en la región.

En la siguiente sesión celebrada por la Comisión, el **Superintendente de Valores y Seguros, señor Fernando Coloma**, desarrolló la siguiente exposición sobre el contenido del proyecto de ley:

Objetivo del Proyecto

- Modernización Marco Jurídico sobre Administración de Fondos.

- Generación de Marco Jurídico Especial para Administración de Carteras.

<u>Administración de Fondos</u>

Ordena y homologa marco jurídico vigente aplicable a la administración de fondos.

- Consolidación de cuerpos legales aplicables a la administración de fondos: ley sobre Administración de Fondos Mutuos, ley sobre Administración de Fondos de Inversión, ley que autoriza la creación de Fondos de Inversión de Capitales Extranjeros, ley que establece Normas sobre Arrendamiento de Viviendas con Promesa de Compraventa (Título VI), y ley de Mercado de Valores (Títulos XX y XXVII).

Flexibiliza Marco Jurídico Vigente

- Se amplia gama de productos financieros que pueden ofrecer las administradoras.

- Actualmente, indicó, existen fondos rescatables y no rescatables. Ahora se propone introducir una categoría intermedia (entre 10 y 180 días) que combina la rescatabilidad de los fondos mutuos y las posibilidades de inversión de los fondos de inversión.

- Se reducen restricciones a la inversión de fondos dirigidos a inversionistas calificados (esto es, aquellos inversionistas que tienen la capacidad de interactuar directamente con las administradoras en las instancias de decisión).

- Se extiende modalidad de aporte y rescate en valores a los fondos de inversión (ETF).

- Se simplifican restricciones a la inversión de los fondos, con lo que será posible constituir fondos de fondos, realizar inversión en ciertos instrumentos emitidos por relacionados (en condiciones que deberán ser establecidas en los reglamentos internos). Además, se efectúa un cambio de lista positiva a cumplimiento de requisitos de información, regulación y supervisión que establezca la SVS.

- Se reducen costos en la prestación de servicios de administración.

- Se extiende modalidad de depósito de reglamentos internos, que ya existe para fondos mutuos, a los fondos de inversión, con la sujeción a supervisión y fiscalización que eso implica.

- Se acota obligación de celebrar asambleas de aportantes sólo a fondos no rescatables. Esto pues, cuando se trata de fondos rescatables, la interacción con los clientes se verifica cuando éstos toman la decisión de retirarse del fondo.

- Se permite la inversión directa en fondos mutuos y de inversión, por parte de inversionistas extranjeros y del ahorro para la vivienda, eliminando la existencia de AFICE y AFV.

Eleva estándares de administración y comercialización de fondos.

- Se fortalece la aplicación del enfoque de supervisión basada en la gestión de riesgos. De este modo, para iniciar operaciones las administradoras deben contar con políticas, procedimientos y controles que requiera la SVS, a la que se permite, además, incrementar las exigencias de garantías en función de la calidad de la gestión de riegos realizada por la administradora.

- Se introduce modelo de acreditación, estableciendo una serie de requisitos de conocimientos básicos para directores, gerentes y ejecutivos de las administradoras. Un proceso similar, destacó, se ha estado llevando a cabo desde el año pasado con las corredoras, lo que evidentemente repercute en el estándar de servicio que prestan a sus clientes.

Promueve competitividad e internalización de los servicios de administración

- Para extranjeros, se equipara tratamiento del IVA por administración de fondos de inversión, a la de los Fondos de Inversión de Capital Extranjero (FICE).

- Se simplifica tributación de rentas de extranjeros, por la inversión en fondos nacionales que invierten más del 80% en el extranjero.

Precisa materias que marco jurídico actual no aborda de manera clara

- Se prohíbe la oferta pública de los FIP (tanto la oferta pública de la cuota como la promoción pública del servicio de administración). Además, se establece el tipo de información que debe ser entregada a quien participe en un FIP.

- Se regula proceder ante cumplimiento de condiciones que hacen fiscalizado al FIP, fijando un plazo para la adecuación y solicitud de aprobación ante la SVS. Hoy, una administradora de fondos que tiene un FIP debe entregar determinada información (partícipes, montos, etc.) acerca de él a la SVS, no obstante no ser objeto en sí mismo de fiscalización.

- Se faculta a la SVS para pedir información que le permita determinar si un fondo que no es fiscalizado debe pasar a serlo.

Carteras Individuales

Generar marco jurídico especial para el servicio de administración de carteras individuales

En la actualidad, expresó, existen muchas administradoras que sin estar registradas en la SVS ni, consecuencialmente, ser objeto de fiscalización, administran fondos. En situaciones así, es razonable pensar que, dependiendo de la cuantía o cantidad de personas involucradas, podría verse eventualmente afectada la confianza pública. Por eso:

- Se establece el marco general que regulará el servicio, dando cumplimiento a las recomendaciones IOSCO (Organización Internacional de Comisiones de Valores).

- Se delimita aquel servicio que será regulado y fiscalizado por la SVS, en función del número de carteras administradas, monto administrado y vínculo existente entre los clientes cuyas carteras son administradas.

- Se permite a la SVS incrementar exigencias de garantías en función de la calidad de la gestión de riesgos realizada por la administradora.

El **señor Superintendente de Valores y Seguros** dio término a su intervención reiterando la importancia de la iniciativa legal en análisis para ordenar, adecuar, desarrollar y precisar muchas materias de una industria que requiere avances concretos que le permitan erigirse, en un mundo tan competitivo, como un mercado financiero más robusto y seguro para los inversionistas.

El **Honorable Senador señor Kuschel** solicitó saber en qué medida el nuevo marco regulatorio que se está planteando es comparable con el de los países que integran el MILA, o si se trata de una normativa que se ha pensado y elaborado en conjunto con ellos.

Del mismo modo, preguntó si se ha previsto que, producto del tratamiento más ventajoso que en materia tributaria se va a otorgar a los FICE, probablemente se esté ofreciendo un estímulo para que

los fondos chilenos se constituyan en el exterior y desde allá vengan a invertir en nuestro país.

Finalmente, pidió conocer cuáles han sido las principales dificultades, o potenciales conflictos, que han llevado a concluir que es necesaria una enmienda legislativa como la que se ha presentado en el proyecto de ley.

El **Honorable Senador señor Novoa** consultó si el concepto de inversionistas calificados incluye también a los extranjeros que invierten en Chile y lo utilizan como plataforma para invertir en otros países. Esto, pensando no sólo en el caso de chilenos que puedan constituirse en el exterior para luego invertir en Chile, sino también en el control de blanqueo de capital y lavado de dinero.

En relación con la administración de carteras individuales, por otra parte, observó que se está en presencia de personas plenamente capaces para contratar. De ahí que no resulte comprensible, razonó, que se trate de una actividad que deba ser regulada, pues no queda claro cuál es el interés público que se ve comprometido. A menos, claro, que se piense que en realidad la actividad de administración de bienes merece ser regulada, caso en el cual debieran también serlo la administración agrícola o la de propiedades, por ejemplo.

Cada vez que se regula una actividad, prosiguió, se entregan responsabilidades al Estado para que lleve a cabo sus facultades regulatorias. En este caso, sin embargo, tratándose de inversionistas capaces para contratar que pueden administrar bien o mal carteras individuales, no se advierte por qué el Estado debiera asumirlas.

El **Superintendente de Valores y Seguros, señor Coloma**, señaló, en primer lugar, que el mercado de los países MILA se circunscribe exclusivamente a transacciones accionarias y secundarias, y no es escenario de ofertas primarias. No obstante, para el futuro sí debiera haber un desarrollo que permitiera estas últimas y las transacciones de bonos y cuotas de fondos.

En segundo término, admitió la dificultad de trazar la línea divisoria de hasta dónde es conveniente regular o dejar de hacerlo, más allá que en algún punto, que siempre puede ser discutido, debe fijarse. Como fuere, lo que al regulador importa es intervenir cuando existe un componente de masividad o cuando se genera en la población la confusión de estar invirtiendo en entidades que se asume están siendo supervisadas y, en realidad, no lo están.

Con todo, puso de relieve que la supervisión de la SVS en materia de administración de carteras individuales es menos estricta, pues sólo se trata de recabar la información necesaria para llevar un control básico de entidades que están manejando números significativos de fondos.

En relación con los inversionistas calificados, explicó que se trata de fondos de inversión privados que se mantienen al margen de la regulación en la medida que cumplen con las condiciones que

la ley establece. Y no es respecto de ellos que la autoridad regulatoria desempeña un rol de representación, sino respecto de grupos masivos en los que los costos de transacción individuales son muy elevados y es más dificultoso acceder a la información sobre las condiciones de contratación. En estos casos, sintetizó, sí resulta justificada la presencia de la autoridad.

Por otra parte, puso énfasis en que no es resorte de la SVS hacer cogestión, indicándole a un emisor de valores cómo mejorar su negocio cuando ha tenido malos resultados. No es, en absoluto, un asunto de su interés, como tampoco lo es la rentabilidad de la industria de administración de fondos. Lo único que a la Superintendencia compete es velar por que la información, por la que los inversionistas conocen los riesgos que asumen y la ciudadanía sabe a qué atenerse, se explicite y fluya. Así, por ejemplo, deberá comunicarse de manera expresa cuáles son los máximos a cobrar por concepto de comisiones o si habrá o no inversión con relacionados. Para ello, por cierto, deberán las administradoras acreditarse ante la SVS.

En relación con el tratamiento que en materia de IVA se dispensará a los inversionistas, el **Intendente de Valores, señor Hernán López**, expuso que la situación actual se caracteriza por la existencia de FICE que reciben inversiones desde el extranjero, son administrados por sociedades chilenas y se encuentran liberados del pago de IVA**.** La figura utilizada con este fin es hacer desaparecer el FICE por la vía de fusionarlo con un fondo de inversión chileno. Es decir, hoy en día una compañía podría estar administrando un FICE, que no paga IVA, y un fondo de inversión regulado, que sí lo paga, teniendo ambos vehículos el mismo objeto de inversión. Lo que el proyecto de ley hace, explicó, es fusionarlos en un solo vehículo.

Adicionalmente, con el objeto de atraer inversión extranjera, en la actualidad las administradoras chilenas se dirigen al extranjero a constituir fondos, que se encuentran exentos de IVA. Aquí, el proyecto de ley nivela la cancha, de manera que al igual como esos fondos pueden ser administrados en el exterior, el vehículo de inversión pueda también instalarse en Chile, manteniendo las mismas condiciones de exención al inversionista extranjero.

Finalmente, manifestó que sin perjuicio de facilitar la oferta pública de valores extranjeros en Chile -en los casos de Perú y Colombia-, lo primordial del MILA es reconocerlo como una posibilidad de inversión no sólo para locales, sino también para extranjeros. Así, ejemplificó, en las condiciones vigentes un inversionista extranjero constituiría un fondo en Luxemburgo que invierta en una cartera MILA que tenga instrumentos no sólo chilenos, sino también colombianos y peruanos. Al efecto, lo que el proyecto plantea es que ese fondo se pueda desarrollar en Chile, bajo las mismas condiciones de competitividad que tendría en el exterior.

El **Honorable Senador señor Kuschel** solicitó información sobre la evolución en el tiempo de los fondos de administración,

cuánto han crecido y cuál es el tamaño de los agentes que intervienen en el mercado.

El **señor Superintendente de Valores y Seguros** señaló que, en términos generales, la industria de fondos mutuos tiene un tamaño cercano a los US$ 38.000 millones; y la de fondos de inversión, a los US$ 10.000 millones.

El **Honorable Senador señor Zaldívar** observó que justamente en pos del objetivo de hacer de Chile una plataforma internacional de servicios financieros, es del todo necesario contar con una regulación lo suficientemente profunda como para evitar experiencias, ocurridas en otras latitudes, que han resultado perjudiciales para la industria. Aún tratándose de fondos privados, profundizó, no es razonable poner en riesgo la fe pública. Por ello, coincidiendo con lo expresado por el señor Superintendente, no corresponde a la SVS, tratándose de fondos relevantes de terceros que hacen fe en el sistema, instruir a las compañías sobre cómo administrarlos, pero sí exigirles el cumplimiento del marco regulatorio.

Seguidamente, intervino ante la Comisión el **Decano de la Facultad de Administración de la Universidad Santo Tomás, señor Patricio Arrau**, quien en primer término recordó su calidad de administrador de fondos de capital de riesgo de CORFO, a través de una empresa de su propiedad, y de miembro del directorio de la Asociación de Administradoras de Fondos de Inversión (ACAFI).

En segundo lugar, refirió la posibilidad que ha tenido de participar del desarrollo de la industria de administración de fondos de terceros desde el año 1989, fundamentalmente mediante instrumentos que permiten a las AFP invertir en empresas menos supervigiladas. Desde entonces, Chile ha logrado consolidar una ventaja competitiva en la administración de carteras, contexto en el cual el presente proyecto de ley viene a proponer la unificación, en un solo cuerpo, de todas las modalidades de administración de fondos de terceros. El costo de no hacerlo, advirtió, es precisamente la pérdida de dicha ventaja competitiva, por lo que se hace necesaria la adopción de diferentes medidas que permitan que la administración de fondos sea realizada por administradoras constituidas en el país y no en el exterior, ofreciendo plataformas de inversión a los capitales extranjeros y chilenos que, en un mundo globalizado como el actual, deseen invertir.

En tercer orden, se extendió sobre los alcances de la industria de fondos privados de capital de riesgo (FIP), que fue introducida en la ley N° 18.015 durante el gobierno del ex Presidente señor Lagos. Desde entonces, señaló, el objetivo de esos fondos ha sido servir de vehículo para que administradores profesionales, independientes y con aportantes privados puedan contribuir al financiamiento de emprendedores y de innovación, sobre todo a partir del año 2005, cuando CORFO potenció fuertemente el apoyo a esta industria.

No obstante que los resultados de esta industria no han sido del todo buenos, añadió, el proyecto de ley en discusión

profundiza el precitado objetivo al procurar que los FIP se transformen en vehículos de propósito específico para que los administradores puedan apoyar el emprendimiento y la innovación. Esto, teniendo en cuenta además que en la inversión de esta clase de fondos se han apreciado conductas ya no elusivas, sino evasivas, encaminadas ilegítimamente a evitar en forma indefinida el pago de impuestos, lo que ha causado alarma en la ciudadanía y entre los intervinientes en el mercado. En este sentido, celebró, constituye un acierto que el proyecto proponga consagrar en la ley requisitos que el SII viene exigiendo desde hace algunos años a los fondos privados, y que han contribuido a que se les dé un mejor uso, como la exigencia de RUT especial de registro y de declaraciones juradas para informar detalladamente sobre cuotas colocadas, aportantes, transacciones, dividendos distribuidos, valores de las transacciones de cuotas, etc. De esta forma, sostuvo, es posible asegurar que la finalidad de los FIP siga siendo la creación de valor en forma transitoria para proyectos que generen utilidades que, posteriormente, paguen los impuestos correspondientes. Para esto, tal como se prevé en esta iniciativa legal, es indispensable que el impuesto a la ganancia de capital no se grave como si se tratara de sociedades anónimas.

Finalmente, hizo hincapié en dos materias adicionales que ACAFI ha estado promoviendo para blindar aún más a los FIP y terminar de despejar dudas sobre su uso para fines ilegítimos.

La primera de ellas es que el proyecto de ley permite constituir un FIP con sólo dos aportantes, en circunstancias que para administrar fondos de capital de riesgo de CORFO, esta institución obliga a que los fondos se constituyan con al menos cuatro aportantes independientes entre sí, y que ninguno de ellos tenga menos de un 10% de la cuotas del fondo. Propuso, al efecto, consagrar en la ley esta última modalidad.

La segunda, en tanto, guarda relación con que CORFO también obliga a que los administradores, no obstante tratarse de fondos privados, se constituyan y registren como entidades informantes de ella. Tal medida, sugirió, debiera ser también establecida en la ley, adoptando en parte la institucionalidad que sobre el particular ha venido operando en Estados Unidos. En la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, recordó, se propuso incluso la obligación de hacer entrega de los reglamentos de las administradoras al SII, lo que implicaría una mayor similitud con la regulación estadounidense.

Posteriormente, la Comisión tomó conocimiento de los siguientes planteamientos que, en representación del **Instituto Libertad y Desarrollo,** realizó la **Directora del Programa Legislativo, señora Natalia González**:

Ley Única de Fondos

Destacó que se trata de una iniciativa positiva, que persigue:

- Hacer del **mercado de capitales uno más eficiente, al proponer un marco jurídico único, común y ordenado para la industria de administración de activos de terceros.**

- Incorporar un nivel mínimo de idoneidad técnica y conocimientos para quienes participen de las actividades de funciones de asesoría financiera y gestión de fondos.

- Introducir mayores grados de flexibilidad. En materia de inversión, en vez de indicar un catálogo taxativo de inversiones permitidas, se opta por abrir la inversión con algunas restricciones para dar debida protección a los inversionistas (artículos 59 y 61), resguardando principios como la equidad, transparencia, orden y competencia.

El mayor grado de flexibilidad, no obstante, trae consigo el otorgamiento de mayores facultades de regulación y fiscalización a la SVS, cuestión que en algunos aspectos es discutible.

- Modificar el tratamiento tributario actualmente aplicable a los inversionistas extranjeros en fondos, con el objeto de atraer inversión extranjera y que Chile se transforme en una plataforma de servicios financieros hacia el exterior.

Para esto, el proyecto mantiene el régimen tributario que hoy se establece para los FICE / FICER (impuesto de 10%), pero introduce la posibilidad de que los extranjeros puedan invertir en los mismos fondos que los locales.

A ello se suma que hoy la ley sobre impuesto a la renta exime de impuestos a los extranjeros que invierten en fondos que destinan un 90% o más de sus recursos a la inversión en el extranjero. El proyecto incorpora esta disposición para los Fondos Mutuos (FFMM) y Fondos de Inversión, pero rebaja el límite a 80%.

De acuerdo con la información que proveen diversos rankings internacionales, señaló, nuestro país se encuentra bien posicionado en los mercados financieros. Sin embargo, la participación de inversionistas extranjeros en fondos de inversión se ha ido estancando en el transcurso del tiempo, por lo que se requiere un nuevo impulso.

- Evitar la exportación de IVA en la provisión del servicio de administración de fondos a extranjeros.

- Mejorar el acceso al financiamiento para la industria de capital de riesgo y para las pequeñas y medianas empresas.

En relación con los **Fondos de Inversión Privados (FIP)**, resaltó cuáles son los fines buscados**:**

- Enfatizar su carácter de vehículo de inversión al precisar que los FIP no pueden desarrollar actividades “productivas” (hace aplicable norma del artículo 57 del proyecto).

- Exigir un mínimo de aportantes no relacionados transcurrido un año desde la creación del fondo (2 + administradora), y regular independencia entre los dueños de los recursos y las administradoras (máximo 25% del patrimonio).

Sobre el particular, hizo ver la conveniencia de saber a qué se debe la diferencia que se establece con los fondos de inversión públicos (donde dicho porcentaje es de 35%).

- Hacer aplicable a los FIP las obligaciones de obtener RUT y las facultades del SII de requerir entrega de información periódica, y establecer que en caso de incumplirse los requisitos establecidos en la ley los FIP deberán tributar como una sociedad anónima.

- Incorporar, por primera vez en nuestra legislación, una regulación básica (sin perjuicio del mandato) sobre gestión individual de recursos. Serán fiscalizados por la SVS sólo aquellos que administren cartera con más de 500 mandantes o cuyo monto sea superior a 10.000 unidades de fomento, y existirá un registro llevado por la SVS para fines fiscalizadores.

Sobre el particular sostuvo que, en general, la regulación contenida en el proyecto es bastante básica, similar a la del mandato comercial, por lo que no representa un riesgo de sobre regulación. Sin perjuicio de ello, llamó la atención sobre que el artículo 102 del proyecto de ley confiere a la Superintendencia la facultad de aprobar los contenidos mínimos del mandato que permite la gestión de los recursos, cuestión que sí parece un tanto excesiva en comparación con lo que acontece con los fondos de inversión públicos, cuyos reglamentos internos solamente se depositan en el supervisor.

Principales contenidos del proyecto de ley

- Regulación uniforme a las administradoras de fondos de inversión, fondos mutuos, fondos para la vivienda y fondos de capital extranjero, en cuanto a su orgánica y funcionamiento.

- Regulación del funcionamiento de los distintos fondos (inversión y mutuos según la rescatabilidad de las cuotas).

- Regulación de los dividendos, beneficios y de la tributación

- Fondos de inversión privados.
- Gestión individual de recursos.

- Algunas modificaciones a la ley sobre impuesto a la renta.

Regulación uniforme a las Administradoras

Aspectos a destacar

Se establecen responsabilidades adicionales a administradoras y sus directivos	→	**Se elevan estándares para el ejercicio de la actividad**
Se obliga a administradoras a indemnizar al fondo o partícipes por los daños y perjuicios que ella o sus dependientes les causaren (garantía de solidaridad pasiva)	→	**Responsabilidad personal directa**
Administradoras deben informar en forma veraz, suficiente y oportunamente a los partícipes de los fondos y al público en general	→	**Mayor transparencia e información al mercado para la toma de decisiones**
Actuaciones prohibidas para las administradoras	→	**Favorece la seguridad de las inversiones de partícipes, fiscalizable por la SVS**

Aspectos a mejorar

- Los parámetros y estándares de idoneidad para directores, gerentes, etcétera, de la administradora, serán fijados por norma de carácter general de la SVS. Para que la fiscalización de un aspecto cualitativo como este no sea discrecional, debieran fijarse ciertos criterios mínimos y objetivos en la ley, no discriminatorios. A su vez, se contempla que la resolución que determine que no se cumple con la idoneidad es reservada. ¿Por qué?

- Legitimado activo para impetrar acciones por daños al fondo es solamente la Administradora. La titularidad de la acción debiera hacerse extensiva, también, a los partícipes.

- Revocación de existencia a las administradoras por infracción grave. Se sugiere agregar ejemplos de lo que se considera grave. Por ejemplo, ¿la falta de idoneidad es grave?

Regulación funcionamiento distintos Fondos

Aspectos a destacar

Positivo reconocimiento autorregulación (regulada) vía reglamento interno, sin perjuicio de la normativa vigente y el rol fiscalizador de la SVS		**Mayores flexibilidades, monitoreadas por la SVS (deposito reglamento)**
Se establecen series de cuotas para FI y FFMM, así como normas de resguardo de las inversiones de los partícipes y de los bienes adquiridos. Registro y contabilidad separada de operaciones realizadas por administradora con sus recursos propios y de operaciones de otros fondos que administre		**Protección a los partícipes; mayor posibilidad y libertad de los partícipes de elegir al contemplarse series de cuotas para FI y no solo para FFMM, permitiendo mayor diversificación de aportantes (aumenta atractivo país)**
Diversificación de inversiones (límites máximos a los fondos mutuos dependiendo del tipo de inversión, así como limitaciones respecto de la posibilidad de invertir en cuotas de fondos administrados por la misma administradora o personas relacionadas). Asambleas de Aportantes y Comité de Vigilancia para proteger a aportantes fondos no rescatables.		**Favorece la seguridad de las inversiones de partícipes, fiscalizable por la SVS**

Aspectos perfectibles

- Artículo 57 establece las inversiones y actividades prohibidas. Es correcto enfatizar el carácter de inversión (rentas pasivas) de los fondos y no rentas activas. Sin embargo, la redacción quedó muy amplia, en el sentido que señala, entre otras, que "**no podrán desarrollar actividades comerciales**" distintas a la inversión. ¿Qué es actividad comercial (Actos de Comercio)? ¿Y qué sucede si se quiere celebrar contratos relacionados con la inversión, como derivados por ejemplo?

Eso, sostuvo, debiera estar permitido, por lo que sugirió agregar lo siguiente: "*sin perjuicio de aquellas actividades comerciales directamente relacionadas o complementarias a la de inversión*".

- Suspensión rescate cuotas (artículo 40): se contempla esta posibilidad para casos graves y para ", otras circunstancias que determine (la SVS) en el mejor interés y protección de los partícipes". Se sugiere agregar que tales otras circunstancias han de ser, igualmente, para casos graves.

Regulación dividendos, beneficios y tributación

Mantiene la calidad de no contribuyentes de los fondos		**Son patrimonios de afectación**
Beneficio tributario a inversionistas extranjeros, tanto el ***mayor valor obtenido en la enajenación o rescate de cuotas, como las cantidades repartidas***, que correspondan a fondos que invierten al menos un 80% de su activo en el extranjero. Cuando el fondo no cumpla la condición anterior, el impuesto para los inversionistas extranjeros será de un 10%, manteniéndose así el régimen tributario que hoy se establece para los FICE/ FICER		**Objetivo: Al poner fin al impuesto adicional de 35%, se busca atraer inversionistas extranjeros, internacionalizar MK chileno, dar más diversidad a los actores en un país que está preparado para recibirlos, cuenta con buen capital humano y solidez financiera. Tampoco se aplica impuesto único a rentas 104, 105 y 106 LIR**
Se eximen del pago de IVA a las remuneraciones que reciban las administradoras, en aquella parte que corresponda a cuotas de propiedad de inversionistas extranjeros		**Potenciar la exportación de servicios financieros**

Tributación

Aspectos Perfectibles

Proyecto no cambia, en lo general, reglas de tributación actual de los distintos fondos. No obstante, surgen dudas sobre el alcance de dos aspectos:

- Se contempla facultad tasación del SII en ciertos eventos para fondos de inversión (FINV) y fondos mutuos (FFMM). Sin embargo, se establece que para los FINV no procederá la tasación en caso de fusión y división de fondos. Estas operaciones también están disponibles para FFMM. ¿Por qué estos últimos sí son objeto de tasación en tales hipótesis?

- Exención del impuesto único a los contribuyentes sin domicilio o residencia en Chile proveniente de un FI o FFMM (aportantes extranjeros e inversión del fondo 80% en activos extranjeros). Más allá de la forma en que los privados organicen libremente sus propios negocios, ¿qué facultades y obligaciones tiene el SII respecto de la fiscalización e información sobre el origen de los recursos (paraísos tributarios)? Si bien no hay perjuicio para el Fisco chileno, cabe preguntarse por las obligaciones que a Chile cabrían sobre la materia, teniendo en cuenta que, en virtud de las convenciones de intercambio de información fiscal y de los compromisos

OCDE, podría verse expuesto a algún incumplimiento (ejemplo distinto es el articulo 41 D de la ley sobre impuesto a la renta).

Regulación FIP

Aspectos a destacar

Son fondos privados, por lo que aplica con preferencia su reglamento interno, sin perjuicio del capítulo V del proyecto de ley, más las normas relativas a los dividendos (30%) y beneficios, y sobre inversiones y actividades prohibidas (artículo 57). Pueden ser administrados por sociedades anónimas cerradas.

Deben ser utilizados para financiar proyectos de inversión productivos.

Destacable:

- Máximo de cuotas en manos de la administradora. Ni la administradora ni sus personas relacionadas podrán poseer, en conjunto, cuotas que representen más de un 25% del patrimonio del fondo privado por ella administrado.

- Mínimo de aportantes. Al menos dos aportantes no relacionados entre sí, no pudiendo ninguno de ellos tener menos de un 10% de las cuotas suscritas del fondo privado. Esta última restricción no aplicará en caso que el fondo privado tenga 5 o más aportantes no relacionados entre sí.

Tratamiento Tributario FIP

Deben entregar información al SII (fondos administrados, aportantes y distribuciones de dividendos) y la SVS (para cuantificar este tipo de fondos y constatar si cumplen los requerimientos de un FIP).

Se aplican normas para fondos de inversión (salvo exención e impuesto único para inversión de extranjeros – pagan adicional con crédito). Surge la duda, apuntó, de si les es o no aplicable la exención del IVA.

La administradora debe solicitar la incorporación en el RUT a cada fondo que administre, acompañando el reglamento interno de cada uno de ellos (se lleva a ley varias normas de circulares).

Ante incumplimiento de requisitos legales, se hace aplicable la tributación de las sociedades anónimas.

FICE y FICER

Aspectos a destacar

Fondos de Inversión de Capital Extranjero

- Hoy: existencia de fondos distintos para inversionistas locales y extranjeros.

- Proyecto de ley permite que los extranjeros puedan invertir en los mismos fondos que los locales, reemplazado el esquema actual (menores costos y más liquidez de cuota).

- Se mantiene el tratamiento tributario actual para el inversionista.

Fondos de Inversión de Capital de Riesgo

- Se busca potenciar la industria (que hoy ha sido objeto de alrededor de US$ 600 millones de inversión).

- Se eliminan requisitos que la ley exige a las sociedades en las que estos fondos deben invertir sus recursos, que no dicen relación con su carácter de capital de riesgo (por ejemplo, que las actividades se desarrollen mayoritariamente en Chile).

La **señora González** culminó su exposición remarcando que el proyecto de ley constituye un avance en el objetivo de transformar a Chile en plataforma de inversiones y exportador de servicios financieros, a lo que contribuirían las observaciones y precisiones sugeridas precedentemente.

El **Honorable Senador señor Kuschel** preguntó si el estancamiento de la inversión extranjera en nuestro país encuentra explicación sólo en la evolución propia de los mercados o, justamente, en la ausencia de una regulación como la que el proyecto de ley en estudio está proponiendo.

La **Directora del Programa Legislativo del Instituto Libertad y Desarrollo, señora González,** señaló que se ha podido apreciar que distintos países de la región, como Brasil, México y Colombia, han logrado avances en los rankings de atracción de inversión extranjera, precisamente porque han flexibilizado su normativa de fondos, haciéndola más atractiva a ojos de los inversionistas extranjeros. En tal sentido, ciertamente el presente proyecto de ley apunta en la dirección correcta, para que no siga ocurriendo que los fondos se constituyan en el exterior para luego devolver la inversión a Chile.

A continuación, hizo uso de la palabra la **Gerente General de la Asociación de Administradoras de Fondos Mutuos de Chile A.G., señora Mónica Cavallini**, quien desarrolló la siguiente presentación:

Características Fondos Mutuos

- Diversificación: no compite, integra diversos instrumentos (acciones, depósitos, bonos).

- Liquidez: pago máximo en 10 días.

- Flexibilidad: Más de 2.000 alternativas (fondos/series).

- Accesibilidad: Bajos montos de inversión: $5.000 (acceso universal).

- Administración: profesional decisiones óptimas de inversión.

- Fácil acceso a mercados y economías: que en forma individual no sería posible.

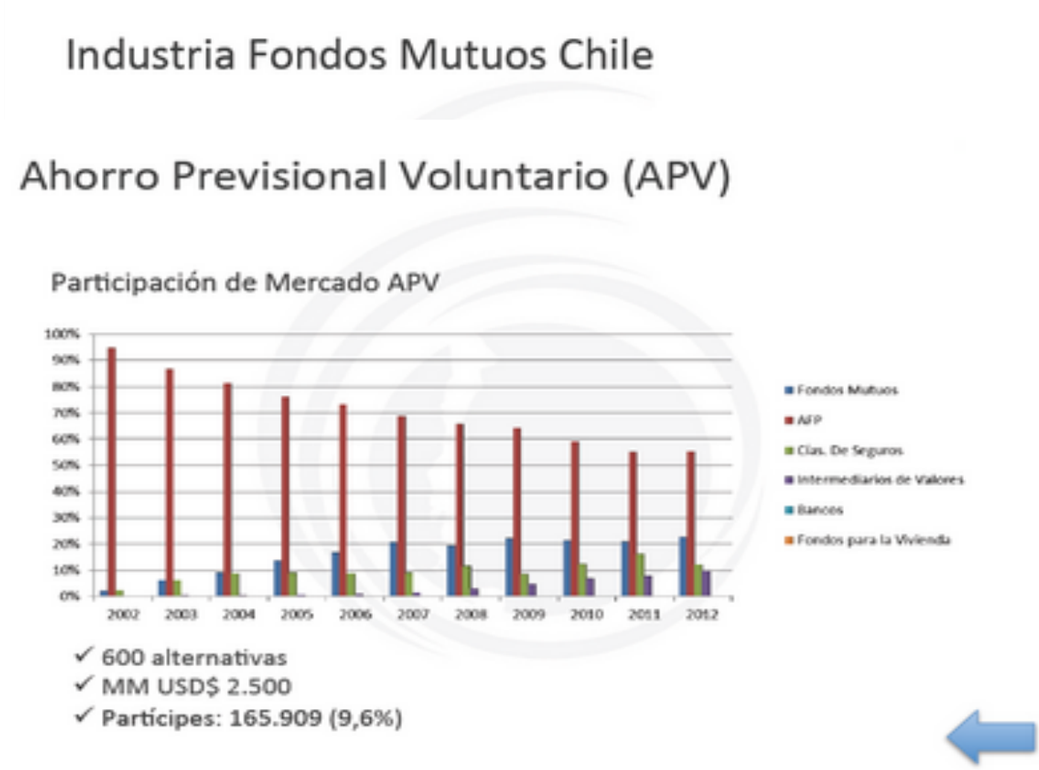
- Incentivos al ahorro: instrumento que fomenta al ahorro a corto, mediano y largo plazo de las personas.



En relación con el porcentaje del PIB que representa la industria en Chile (14% hoy), indicó que es similar al de

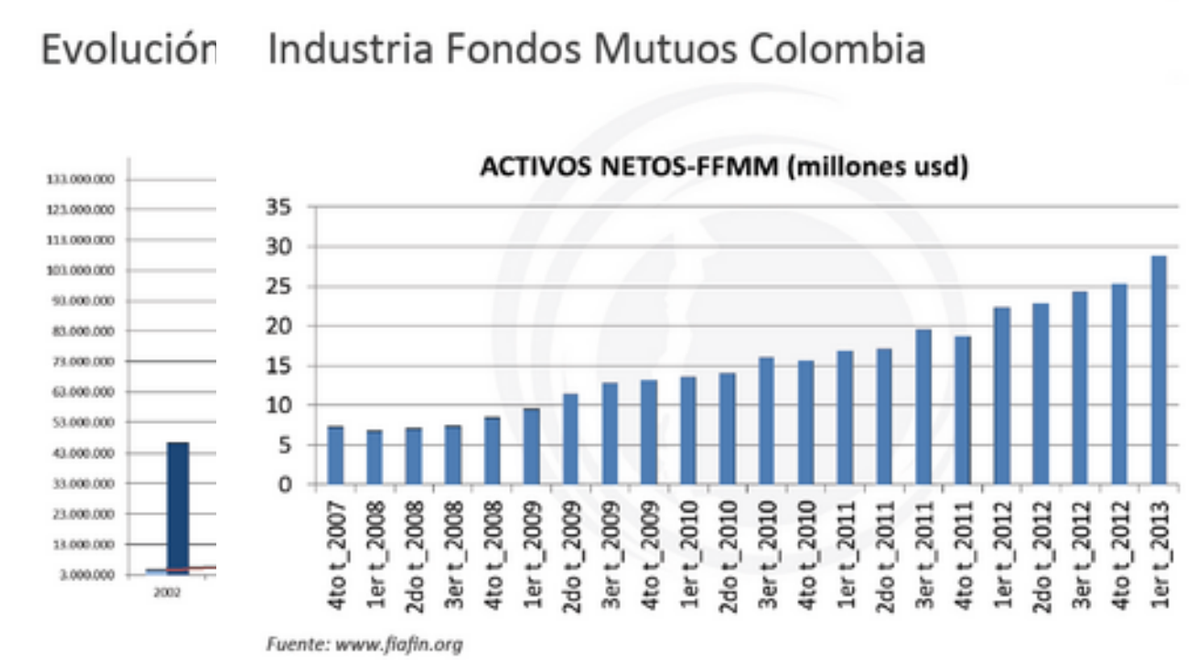
España, pero lejano al de países como Australia, Estados Unidos, Francia o Canadá. Llamó la atención sobre la situación de Colombia, donde el porcentaje hasta hace algunos años era sólo de 10% y hoy se empina al 25%, sobrepasando a nuestro país.

Resaltó, por otra parte, la desconcentración de la industria, marcada por la existencia de 19 administradoras oferentes de fondos mutuos, lo que genera un nivel de competencia importante.



Del mismo modo, puso de manifiesto que desde que se autorizó a la industria de fondos mutuos para participar en la oferta de APV, se han implementado más de 600 alternativas, lo que también ha contribuido a la competencia y desconcentración de este mercado.

Expuso, a continuación, sendas láminas que dan cuenta de la evolución de la industria de fondos mutuos chilena y su comparación con la realidad peruana y colombiana. Es evidente, subrayó, que estas últimas están aceleradamente masificando esta clase de ahorros:



Reseñó, posteriormente, que tras la denominada crisis sub prime que afectó al mundo los años 2008 y 2009 y la crisis de deuda en Europa, la industria chilena de fondos mutuos mantuvo su número de partícipes, cuestión que, indudablemente, guarda relación con la educación que se ha estado entregando para que las personas se instruyan sobre el manejo de estos instrumentos. Esto último, sostuvo, dice mucho sobre el nivel de experticia alcanzado por quienes componen dicha industria.

Identificó, además, los hitos que han aportado al crecimiento de la industria:

Industria Fondos Mutuos Chile

Crecimiento	Patrimonio ($)	Patrimonio (USD)	Partícipes
2008	-8,4%	-29,5%	1,2%



De estos hitos, destacó de manera especial el depósito de los reglamentos internos (RRII), que ha posibilitado a inversionistas y ahorrantes aprovechar a tiempo las diversas oportunidades que los fondos proveen, tanto en el mercado local como en los exteriores.

Respecto del proyecto de ley en estudio, propiamente tal, efectuó los siguientes comentarios:

- Fue consensuado entre sectores público y privado, ha sido transversal a los diferentes gobiernos, y se inserta en el proceso de mejoras a la regulación iniciado con MKI.

- Propone un único cuerpo legal para administración de fondos de terceros. Al mismo tiempo, es simétrico

(tratamiento similar en lo atingente) y diferencia a los productos (FFII y FFMM) en aquello que compete.

- Es flexible y dinámico: relega a normativa temas de actual regulación legal (permite adecuaciones expeditas al marco regulatorio conforme al dinamismo del mercado).

- Establece estándares en certificación de agentes, que actualmente son autorregulados (especialmente cuando los productos son cada vez más sofisticados).

- Corrige imperfecciones del ámbito tributario, particularmente en relación con el artículo 18 bis (MKI), que no cumplió sus objetivos, y con el artículo 104, permitiendo el beneficio a renta fija no sólo para portafolios intensivos en acciones.

- Amplía alcance del producto.

- Incentiva la inversión extranjera, con el objeto de poner a Chile en ojos del mundo. Lo hace sin afectar la recaudación fiscal (el marco actual desincentiva el ingreso de inversiones), y elimina el incentivo a fondos mutuos nacionales a domiciliarse en otros centros financieros (desde el 2000 instituciones financieras se están constituyendo tanto en Colombia como en Perú).

- Contribuye a transformar a Chile en centro financiero regional, pues sus efectos se extiende a diversas áreas:

País: impactos múltiples (aumento empleo, tributación derivada de mayores recursos, potencia actividades “derivadas de”: comercio, legales, contables, hotelera, etc.).

Industria: exportación servicios financieros (experticia, productos), competitividad, etc.

Partícipes/Personas: oferta de productos, sofistificación, acceso a beneficio tributarios renta fija a través de inversión en fondos mutuos.

Finalmente, puso a disposición de los integrantes de la Comisión una breve descripción de lo que en diversos lugares del mundo se está haciendo, en estos momentos, en materia de administración de fondos:

Perú: proyecto de ley de promoción del mercado de valores (2013). Objetivos: reducir concentración del mercado, incrementar liquidez, disminuir costos de transacción y aumentar oferta de intrumentos disponibles. Iniciativas conducentes a ampliar red de distribución de fondos mutuos.

Colombia: en enero 2013 se redujo desde 33% a 14% el impuesto a la renta que pagan las ganancias obtenidas por

inversiones de capital extranjero en portafolios de deuda pública, con el objetivo de atraer mayor flujo de capitales.

Brasil: en mayo 2013 la Comisión de Valores anunció un estudio de modificación a normas de fondos de inversión para incrementar transparencia e innovación financiera. En junio de 2013 se eliminó el impuesto del 6% sobre transacciones financieras de inversores extranjeros en fondos inmobiliarios, en una nueva medida orientada a alentar la inversión y a apoyar una recuperación de la economía.

Rusia: en abril 2013 el Gobierno dio a conocer su reporte de política tributaria para período 2014-2016. Medidas propuestas: impulsar sistema financiero, planteando redistribución de beneficios tributarios para depósitos, acciones y fondos mutuos.

Hong Kong: en el discurso del presupuesto año fiscal 2013-2014 se anunciaron iniciativas para expandir y fortalecer las cuatro industrias pilares para mantener competitividad, entre ellas la industria del sector financiero. Estrategia: atraer más fondos de valores privados, para lo cual han decidido ampliar la exención de impuestos sobre beneficios a fondos externos para incluir transacciones realizadas en las empresas privadas registradas fuera de Hong Kong.

Una vez culminadas las exposiciones de los diferentes invitados, el **Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor Zaldívar**, hizo ver la importancia de poder someter a votación general la presente iniciativa para poder proseguir con su tramitación legislativa. Para ello, eso sí, es necesario que previamente los asesores del Ejecutivo y de los senadores de oposición lleven a cabo conversaciones que permitan identificar aquellos aspectos en los que será posible introducir algunas enmiendas o en los que, por el contrario, las diferencias que puedan exisitr no sean salvables.

El **Honorable Senador señor Kuschel** puso de relieve que, conforme a lo expresado por los diversos expositores, el costo que representa para Chile seguir sin modernizar su legislación de administración de fondos es demasiado alto, por lo que agilizar el presente proyecto de ley es bastante urgente.

En la siguiente sesión celebrada por la Comisión, el **Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor Zaldívar,** indicó que habiéndose escuchado los planteamientos de los distintos actores con interés en los contenidos del proyecto de ley, corresponde que la Comisión se pronuncie acerca de la idea de legislar.

Dio a conocer, asimismo, que las negociaciones sostenidas entre los representantes del Ejecutivo y los de los senadores de oposición con miras a la determinación de eventuales enmiendas que se puedan introducir en la posterior discusión particular, han sido fructíferas, quedando tan solo algunos puntos en los que no ha habido acuerdo.

El **Ministro de Hacienda, señor Felipe Larraín,** ratificó lo expuesto por el señor Presidente de la Comisión, e hizo ver la trascendencia de poder dar una expedita tramitación al proyecto de ley en su discusión particular.

Puesto en votación general el proyecto de ley, resultó aprobado por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Escalona, Kuschel, Lagos y Zaldívar.

- - -

INFORME FINANCIERO

El informe financiero elaborado por la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, de 14 de septiembre de 2011, es del siguiente tenor:

I Antecedentes.

El proyecto establece el marco general aplicable a las administradoras de fondos y a los responsables de su dirección. Entre otros incluye requisitos de constitución, patrimonio y las garantías exigidas para el ejercicio de la actividad, prohibiciones y responsabilidades, y el procedimiento de liquidación de la entidad y sus fondos.

Se establecen las reglas de la administración de los recursos del fondo y las normas de gobierno corporativo que deben seguirse para el funcionamiento de cada fondo. Considerando la mayor flexibilidad que dichas reglas otorgan a las administradoras en la gestión de los recursos de los fondos, se asignan facultades de regulación y fiscalización a la Superintendencia de Valores y Seguros, que son necesarias para actuar cuando así lo requiera la debida protección de los inversionistas. En esa línea el proyecto establece disposiciones que permiten el aporte y rescate en valores de los fondos, la oferta de fondos más sofisticados y riesgosos, en la medida que tales se ofrezcan a inversionistas calificados, y se flexibiliza la inversión de ellos permitiendo su inversión, por ejemplo, en otros fondos administrados por la entidad, la recompra de cuotas del mismo fondo y la transacción fuera de la bolsa; en la medida que se cumplan las exigencias previstas para dicho fin.

De igual modo, el proyecto libera de ciertas normas de gobierno corporativo a aquellos fondos de inversión que permitan a los aportantes rescatar sus cuotas en un plazo de 180 días, en el entendido que esa rescatabilidad da la opción de retirarse del fondo en caso que no se esté de acuerdo con las medidas adoptadas por la administradora o por los demás partícipes.

Enseguida, el proyecto regula la modalidad de

repartos de beneficios y tributación de los fondos y sus cuotas. Respecto de esto último, cuando una inversión infrinja los límites de inversión en valores emitidos por un mismo emisor, o invierta en bienes que puedan producir rentas clasificadas en los números 1, 3 y 4 del artículo 20 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, se establece que ello sea considerado como una sociedad anónima para los efectos de ese cuerpo legal.

En el caso de inversionistas extranjeros la tributación de cuotas se exime del impuesto adicional a la ganancia de capital asociada al mayor valor obtenido en Ia enajenación o rescate de cuotas de fondos que inviertan, al menos, un 80% de su activo en valores extranjeros. Por otra parte, se libera del pago del impuesto al valor agregado a las remuneraciones que reciban las administradoras, en aquella parte que corresponda a cuotas de propiedad de inversionistas extranjeros.

Se establece también el marco jurídico mínimo necesario para que exista una consistencia entre las regulaciones aplicables a la administración de recursos en la forma de fondos y de carteras individuales, entendiendo que las problemáticas que surgen de la prestación de este servicio son similares. Por dicho motivo se incorporan normas generales para el tratamiento de conflictos de interés, tales como prohibición y definición de obligaciones, restricciones y condiciones para el ejercicio de la actividad cuando esta pueda comprometer la fe pública. En este último caso, se requerirá Ia inscripción en un registro especial que para esos efectos llevará la Superintendencia de Valores y Seguros y, además, quien ofrezca ese servicio, quedará sometido a la fiscalización de este organismo.

Se simplifican los actuales requisitos establecidos para la inversión extranjera en fondos locales, al sustituir el conjunto de disposiciones que requerían de la conformación de un fondo especial para estos efectos, por la sola modalidad de tributación de los aportantes extranjeros de un fondo mutuo o de inversión nacional. De esta manera, se reducen los costos asociados a la gestión de recursos de inversionistas extranjeros, permitiendo la oferta directa de fondos nacionales. Para lo anterior, el proyecto deroga la ley N° 18.657 e incorpora específicamente en su articulado el tratamiento tributario de esas inversiones extranjeras.

Finalmente, con el objeto de disminuir los costos ligados a la gestión de ahorros para la vivienda y permitir una mejor diversificación de los recursos originados en ese ahorro, el proyecto elimina la obligación de contratar los servicios de una administradora de fondos para la vivienda y de tener que conformar un fondo especial para la inversión de tales recursos, permitiendo a las instituciones recaudadoras invertir directamente los recursos en fondos nacionales que cumplan las condiciones que se establecen en el proyecto, modificándose en esos términos la ley N° 19.281.

II. Efecto del Proyecto sobre el Presupuesto Fiscal.

Dado lo anterior, el Proyecto de Ley obligará a fortalecer la Superintendencia de Valores y Seguros en labores adicionales

de fiscalización, normalización y gestión de la nueva ley, proyectándose un **mayor costo el primer año de $306.562 miles,** de los cuales $188.978 miles son de carácter permanente, asociados principalmente a remuneraciones, y $117.584 miles son gastos por una vez asociados a equipamiento y oficinas.

Respecto del personal, la situación estimada es:

Descripción	N°	Monto miles $	
		Mes	Año
Directivo G° 5	1	4.173	50.076
Profesional G° 7	3	2.912	104.832
Profesional G° 10	1	2.185	26.220
Totales	**5**	**9.270**	**181.128**

Respecto de lo anterior, estimaciones de la Superintendencia de Valores y Seguros hacen prever un aumento importante en entidades fiscalizadas relacionadas con la administración de recursos de terceros, como se indica en el cuadro siguiente:

	2010	2011	2012	2013
N° Adm. de Fondos	44	42	44	48
N° Adm. de Carteras	-	-	15	25
N° de Fondos	536	566	640	723
N° de Carteras	-	-	750	1250
Activos Administrados MMUS$	41.666	49.485	62.006	74.478

Cifras reales (hasta 2011) y estimadas al 1 de enero de cada año, sobre fondos mutuos, de inversión, de capital extranjero y para la vivienda, y administración de cartera.

Por otra parte, y en el caso de los inversionistas extranjeros, el proyecto exime de impuestos tanto el mayor valor obtenido en la enajenación o rescate de cuotas, como las cantidades repartidas que correspondan a fondos que inviertan al menos un 80% de su activo en el extranjero, en el entendido que, de cumplirse esta condición, se trata de una exportación de servicios. Cuando el fondo no cumpla la condición anterior, el proyecto establece que el impuesto será de un 10%, tratamiento que resulta equivalente al que hoy se establece para los fondos de inversión de capital extranjero y los fondos de inversión de capital extranjero de riesgo. Se estima que el costo fiscal de esta medida será de aproximadamente **$400 millones anuales.** Esta estimación fue efectuada en base a información proporcionada por el Servicio de Impuestos Internos (SII), relativa al impuesto adicional que fue retenido en los años 2009 y 2010 por las sociedades administradoras de fondos.

Finalmente, el proyecto de ley libera del pago de IVA a las remuneraciones que reciban las administradoras, en aquella parte que corresponda a cuotas de propiedad de inversionistas extranjeros. Se estima que esta exención tendrá un costo fiscal de aproximadamente **$1.700 millones anuales.** Esta estimación se obtuvo a partir de información proporcionada por el SII, respecto del débito de IVA declarado por las sociedades administradoras de fondo durante el año 2010, y de información

de la "Actualización del Estudio sobre la industria de la inversión colectiva en Iberoamérica", que permitió obtener una estimación del porcentaje del patrimonio de los fondos de inversión que ha sido aportado por personas no residentes.

Posteriormente, con fecha 5 de marzo de 2013 la Dirección de Presupuestos emitió un nuevo Informe Financiero, cuyo contenido es el que sigue, que acompañó a la presentación de una serie de indicaciones:

1. Antecedentes

Como se indicó por parte del Ejecutivo en el Mensaje que dio inicio a la tramitación del Proyecto de Ley sobre Administración de Fondos de Terceros y Carteras Individuales y que deroga los cuerpos legales que indica, los objetivos y contenidos del proyecto apuntan a "proponer los cambios institucionales y tributarios que se requieren para cumplir con la meta de permitir que Chile se transforme en un país exportador de productos y servicios financieros ligados a la administración de carteras, y ampliar la gama de productos financieros con que cuentan los inversionistas nacionales y extranjeros que invierten en Chile. Todo ello, manteniendo la seguridad y el prestigio de nuestro mercado".

En ese contexto, el Mensaje contiene Indicaciones al Artículo Primero, Tercero y Articulado Transitorio del proyecto de ley en trámite. En efecto, en las indicaciones al Artículo Primero, se precisa el tratamiento tributario de los Fondos, destacándose que:

- Se precisa el texto del artículo sobre inversiones y actividades prohibidas, que ratifica la naturaleza de vehículo de inversión pasivo de los fondos, precisando que éstos no pueden desarrollar actividades económicas gravadas con Impuesto de Primera Categoría, para así eliminar incentivos orientados a que dichas actividades sean desarrolladas por los Fondos en lugar de sociedades.

- Se incorpora la obligación para las administradoras de proporcionar información periódica al SII que facilite una adecuada supervisión y la obligación de llevar registros FUT (Fondo de Utilidades Tributables) y FUNT (Fondo de Utilidades No Tributables) por cada fondo de inversión que administren, incorporando criterios tributarios existentes emitidos por el Servicio de Impuestos Internos (SII).

- Se regula la aplicación de la tributación establecida en el Art. 21 de la Ley de Impuesto a la Renta (LIR), incorporando ajustes de la reciente Reforma Tributaria (Ley N° 20.630). Así, se regula el caso de préstamos a aportantes, uso o goce para uso personal por aportantes de los activos del fondo, entrega de bienes en garantía por el fondo para garantizar obligaciones de los aportantes y las diferencias de valor producto de tasaciones practicadas por el SII.

- Se explicita legalmente la facultad de tasación

del SII (por ej., para aportes realizados al fondo).

- Se mejora el régimen tributario para los aportantes sin residencia ni domicilio en Chile, en cualquier tipo de fondo, pues se indica qué tributación -con impuesto del 10%- opera tanto para dividendos como para ganancias de capital de dichos aportantes.

- Se incorpora una mejora en la aplicación de la exención de IVA establecida por el proyecto original en relación con las remuneraciones pagadas a administradora por aportantes extranjeros.

- En términos generales, se conserva la tributación actualmente aplicable a los inversionistas chilenos en Fondos Mutuos y del mismo modo, se establece que el tratamiento tributario de los fondos opera únicamente para nuevas inversiones, quedando sujeto el stock de inversiones al régimen tributario actualmente vigente.

Como resultado de lo anterior, las indicaciones formuladas al Artículo Primero del proyecto de ley hacen que este constituya un perfeccionamiento del marco regulatorio y de fiscalización de fondos de inversión (FIP), porque se incorporarían aspectos relevantes, tales como:

- Obligaciones de entrega de información al SII: Se hacen aplicables a los FIP las obligaciones de obtener Rol Único Tributario y las facultades del SII de requerir entrega de información periódica sobre los aportantes, monto de los aportes, número de cuotas y su enajenación, distribuciones practicadas y créditos tributarios asociados.

- Facultad de Tasación del SII: Se explicita la facultad de tasación del SII y la aplicación del Art. 21 de la Ley sobre Impuesto a la Renta al FIP.

- Tratamiento tributario para inversionistas extranjeros en FIP: Se explicita que los aportantes de FIP sin domicilio ni residencia en Chile, no tienen acceso al tratamiento del impuesto único del 10%, conservando el tratamiento tributario actualmente contenido en la Ley N° 18.815.

- En otros aspectos operativos, se regulan los préstamos otorgados por el FIP a empresas relacionadas (donde se establece el pago de un impuesto equivalente al Impuesto de 1ª Categoría, de cargo de la administradora, por los intereses originados en préstamos con partes relacionadas) y se regulan las consecuencias de no dar cumplimiento al requisito mínimo de aportantes no relacionados y participación máxima de la administradora, requisitos que buscan que los FIP, efectivamente, correspondan a vehículo de inversión.

A continuación, las indicaciones al Artículo Tercero del proyecto de ley, incluyen ajustes operativos al impuesto sobre ganancias de capital en mercado de renta fija, materia que genera modificaciones principalmente al artículo 104 y deroga el 106, ambos de la Ley sobre Impuesto a la Renta. Ella, en atención a que actualmente, menos del 1% del

stock de bonos locales está en manos de inversionistas extranjeros, destacándose que:

- Se elimina la restricción de transacción de instrumentos en bolsa. En cambio, se establece la obligación de informar los precios de transacción y que estos se ajusten a valores de mercado, dando las herramientas al SII para verificar esos precios.

- Se elimina el castigo financiero por emitir bajo la par. A cambio, se crea la figura de la Tasa Fiscal, que será igual al yield de colocación del bono, estándar con que el tema se trata en países desarrollados.

- Se establece que todas las nuevas emisiones de bonos corporativos se rijan por las normas y tratamiento tributario del artículo 104 de la LIR.

- Finalmente, se incorporan al tratamiento tributario los títulos emitidos en Chile por no residentes.

2. Impacto Fiscal

Para evaluar el impacto fiscal, lo primero es dar cuenta de los efectos esperados en el mercado como consecuencia de la nueva normativa sobre Fondos y de su tributación.

Al respecto, usando datos actualizados de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), se llega a que, de darse un incremento de las tendencias actuales de crecimiento anual del número de fondos (bajo supervisión) y capital administrado de un 4.4% y 4.1%, respectivamente, hasta un 9% y 9%, se observaría un incremento en el total de activos administrados desde $25,67 billones (Cuadro#1) hasta $28,31 billones (Cuadro#2), en ambos casos, al año 2015.

Cuadro #1: Mercado sin variación

	2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
N° Adm. de Fondos	43	44	42	45	39	41	41
N° de Fondos	516	536	566	591	614	641	669
Activos Administrados ($ Bill.)	14,25	21,01	23,15	22,77	23,69	24,66	25,67

Cuadro #2: Mercado con tasas de crecimiento aumentadas

	2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
N° Adm. de Fondos	43	44	42	45	39	41	41
N° Adm. de Carteras	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**30**	**35**
N° de Fondos	516	536	566	591	614	669	729
N° de Carteras	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.573**	**1.726**
Activos Administrados ($ Bill.)	14,25	21,01	23,15	22,77	23,69	25,97	28,31

En relación al efecto fiscal en materia de tributación de Fondos, el impacto fiscal dependerá de dos aspectos: i) de los

cambios de comportamiento que se observen en los aportantes y administradoras de fondos a partir de las modificaciones normativas propuestas, tanto por efecto de las preferencias de inversionistas que se observen al elegir entre Fondos de Inversión o Fondos Mutuos, o entre estos Fondos y otros instrumentos en el mercado, como en el aprovechamiento de los incentivos de la ley; y ii) del crecimiento en el número de fondos y recursos administrados, el que podría potencialmente generar una mayor recaudación fiscal.

Evaluados ambos aspectos, resulta necesario indicar que, con la información disponible, no es posible cuantificar el impacto fiscal, puesto que, por ejemplo, el efecto del tratamiento tributario aplicado a un mayor número de fondos y de recursos invertidos en dichos instrumentos, depende de muchos elementos, tales coma rentabilidad, normativa tributaria aplicable a los contribuyentes inversionistas, momento de realización de inversiones y residencia del inversionista.

En todo caso, resulta conveniente actualizar los efectos ya anticipados en el Informe Financiero IF 110, de 14/09/2011, respecto de los inversionistas extranjeros, a quienes se exime tanto de impuestos al mayor valor obtenido en la enajenación o rescate de cuotas, como de la tributación por las cantidades repartidas que correspondan a fondos que invierten al menos un 80% de su activo en el extranjero, en el entendido que en esta condición se trate de una exportación de servicios. En este caso, el costo fiscal, actualizado, es de $530 millones, aproximadamente, según estimación realizada con datos 2010 y 2011 del SII.

Del mismo modo, resulta procedente actualizar la información correspondiente a la liberación del pago de IVA a las remuneraciones que reciban las administradoras, en aquella parte que corresponda a cuotas de propiedad de inversionistas extranjeros. En este caso, aplicando la misma metodología señalada para este caso en el Informe Financiero antes citado, se obtiene un costo fiscal aproximado de $1.890 millones, sobre la base de información del SII correspondiente al año 2011.

En relación al efecto fiscal en materia de tributación de instrumentos de renta fija, es posible afirmar que este se estima nulo.

Por una parte, las modificaciones a los artículos 20, 74 y 104 de la LIR constituyen cambios operativos que mejoran la aplicación de la regulación ya existente y no modifican el principio de que la exención de ganancias de capital recae sobre el instrumento, independiente de la residencia o domicilio del comprador. De esta forma, si bien se espera que las mejoras operativas antes señaladas incentiven una mayor participación de extranjeros en el mercado de renta fija, estas modificaciones *per se* no generan impacto fiscal. Por otra parte, la modificación propuesta en la regulación que deroga el artículo 106 de la LIR y que establece un artículo noveno transitorio para los inversionistas institucionales que no tengan domicilio ni residencia en Chile, restringe su marco de aplicación sólo a los bonos corporativos emitidos con anterioridad a la entrada en vigencia de la

presente Ley. Por último, cabe señalar que el impacto esperado, en valor presente, en la recaudación fiscal, de un instrumento de renta fija emitido a su valor par, o que se le haya aplicado un mecanismo para que la recaudación fiscal sea equivalente, como lo establece la modificación propuesta ("tasa fiscal"), durante la vida del mismo, es nulo, dado que las pérdidas y ganancias de capital del instrumento se compensan.

Por todo lo antes expuesto, esta Dirección estima que, tanto las variaciones que pudieran experimentar los ingresos fiscales, así como los eventuales mayores requerimientos de la SVS y el SII, serán incorporados en las leyes de presupuestos que corresponda e informados cuando el Congreso Nacional así lo requiera.

En consecuencia, las normas de la iniciativa legal en informe no producirán desequilibrios macroeconómicos ni incidirán negativamente en la economía del país.

- - -

TEXTO DEL PROYECTO

En mérito del acuerdo precedentemente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda tiene el honor de proponer la aprobación en general del proyecto de ley en informe, en los mismos términos en que fue despachado por la Honorable Cámara de Diputados, cuyo texto es el siguiente:

PROYECTO DE LEY

“Artículo primero.- Apruébase la siguiente ley que regula la administración de fondos de terceros y carteras individuales:

TÍTULO I
DE LA GESTIÓN DE LOS FONDOS
Capítulo I
Definiciones, alcance y fiscalización

Artículo 1°.- Definiciones. Para efectos de la presente ley, debe entenderse por:

a) Administradora: sociedad anónima que de conformidad a lo dispuesto por esta ley, es responsable por la administración de los recursos del fondo por cuenta y riesgo de los aportantes.

b) Fondo: patrimonio de afectación integrado por aportes realizados por partícipes destinados exclusivamente para su inversión en los valores y bienes que esta ley permita, cuya administración es de responsabilidad de una administradora.

c) Fondo no rescatable: aquel fondo que no permite a los aportantes el rescate total y permanente de sus cuotas, o que, permitiéndolo, paga a sus aportantes las cuotas rescatadas en un plazo igual o superior a 180 días.

d) Integrantes de una misma familia: quienes mantengan entre sí una relación de parentesco de hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad y las entidades controladas, directa o indirectamente, por cada una de esas personas.

e) Inversionista Calificado: aquel a que se refiere la letra f) del artículo 4° bis de la ley N° 18.045.

f) Inversionista Institucional: aquel a que se refiere la letra e) del artículo 4° bis de la ley N° 18.045.

g) Normas de Carácter General: Instrucciones de general aplicación dictadas por la Superintendencia para normar aquellas materias que esta ley dispone queden contenidas en esos actos administrativos o que ésta determine como tales.

h) Partícipe o aportante: personas y entidades que, mediante sus aportes al fondo, mantienen inversiones en éste.

i) Reglamento: El decreto supremo del Ministerio de Hacienda emitido para efectos de normar aquellas materias que esta ley dispone queden contenidas en el Reglamento.

j) Reglamento interno del fondo: conjunto ordenado de reglas y normas que establece los derechos, obligaciones y políticas respecto de la administradora, el fondo y los partícipes del mismo.

k) Superintendencia: Superintendencia de Valores y Seguros.

l) Personas relacionadas: aquellas definidas en el artículo 100 de la ley N° 18.045.

m) Acuerdo de actuación conjunta: aquel definido en la ley Nº 18.045.

Artículo 2°.- Normativa aplicable y fiscalización de la Superintendencia. Los fondos y sus administradoras serán fiscalizados por la Superintendencia y se regirán por las disposiciones de esta ley, las del Reglamento y, en subsidio, por las que establezcan sus respectivos reglamentos internos.

La Superintendencia tendrá para esos efectos, todas las facultades que le confiere su ley orgánica y podrá examinar sin restricción alguna todos los libros, carteras y documentos mantenidos por la administradora y solicitar todos los datos y antecedentes que le permitan imponerse del estado y solvencia de la administradora, del desarrollo de la gestión de recursos efectuada por ésta y del estado de las inversiones del

fondo, pudiendo ordenar las medidas que fueren menester, para corregir las deficiencias que encontrare.

No les serán aplicables las disposiciones de esta ley a aquellos fondos constituidos en conformidad al decreto ley N° 3.500 y las leyes Nos. 19.728, 19.882 y 18.591.

Capítulo II
De la Administradora

§ 1. De la Constitución, remuneración y patrimonio

Artículo 3°.- Sociedades administradoras. Las administradoras deberán constituirse como sociedades anónimas especiales, cuyo objeto exclusivo será la administración de recursos de terceros. Sin perjuicio de lo anterior, las administradoras podrán realizar las demás actividades que les autorice la Superintendencia.

Artículo 4°.- Reglas especiales para las administradoras. Las administradoras estarán sujetas a las siguientes reglas especiales:

a) Se forman, existen y prueban de conformidad a lo establecido en el artículo 126 de la ley N° 18.046, siéndoles aplicables los artículos 127, 128 y 129 de la misma ley.

b) Deberán incluir en su nombre la expresión “Administradora General de Fondos”.

c) Deberán mantener permanentemente un patrimonio no inferior al equivalente a 10.000 unidades de fomento, el que deberán acreditar y calcular, en la forma que determine la Superintendencia.

d) Sólo podrán iniciar sus funciones, una vez que hayan acreditado a satisfacción de la Superintendencia que cumplen los requisitos legales y que cuentan con las políticas, procedimientos y controles que ésta requiera, mediante norma de carácter general, para resguardar adecuadamente los intereses de los partícipes y recursos de los fondos.

e) Transcurrido un año desde su autorización de existencia, la administradora deberá contar con, al menos, un fondo que cumpla las condiciones relativas al patrimonio y número de partícipes establecidas en el artículo 5° siguiente, debiendo mantener permanentemente tal condición. En caso contrario, la administradora deberá disolverse, procediéndose a su liquidación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la presente ley. El directorio de la administradora deberá comunicar este hecho a la Superintendencia dentro de los cinco días hábiles siguientes de ocurrido el mismo y tomará nota de esta circunstancia al margen de la inscripción de la sociedad y publicará por una sola vez un aviso en el Diario Oficial, informando de esta ocurrencia.

Se reserva el uso de la expresión “Administradora General de Fondos”, a aquellas sociedades a que se refiere este capítulo. En consecuencia, ninguna entidad que no se hubiere constituido o transformado en una entidad de este tipo conforme a las disposiciones de esta ley como Administradora General de Fondos, podrá arrogarse la calidad de tal, o utilizar este nombre en su razón social.

Artículo 5°.- Patrimonio mínimo y número mínimo de partícipes. Transcurrido un año contado desde la fecha en que la administradora haya depositado el reglamento interno del fondo, éste deberá contar permanentemente con un patrimonio no menor al equivalente a 10.000 unidades de fomento y tener, a lo menos, 50 partícipes, salvo que entre éstos hubiere un inversionista institucional, en cuyo caso no regirá ese número mínimo de partícipes.

Cumplido el plazo señalado en el inciso anterior, si el monto del patrimonio o el número de partícipes fuere inferior al mínimo exigido, la administradora deberá comunicar este hecho a la Superintendencia al día hábil siguiente de ocurrido el mismo. La Superintendencia, mediante resolución fundada, podrá otorgar a la administradora un plazo máximo de un año para que ésta última cumpla con el patrimonio mínimo requerido o el número mínimo de partícipes indicado, según sea el caso. Si en dicho plazo no se regularizare esta situación, la Superintendencia ordenará sin más trámite que se proceda con la liquidación del fondo. Si la administradora no contare a esa fecha con la administración de otros fondos, ésta se disolverá de conformidad a lo establecido en la letra e) del artículo 4° anterior.

Artículo 6°.- Porcentaje máximo de cuotas por aportante. Después de transcurrido un año contado desde el inicio de la comercialización del fondo, ningún aportante que no sea inversionista institucional, podrá poseer, directa o indirectamente, cuotas representativas de más de un 35% del patrimonio total del fondo, ya sea en forma individual o en conjunto con sus personas relacionadas o con quienes mantenga un acuerdo de actuación conjunta. Para el cálculo de dicho porcentaje no deberán considerarse aquellas cuotas en las cuales personas relacionadas al aportante, aparezcan como titulares en el Registro de Aportantes sin ser éstas sus beneficiarios, porque actúan en calidad de mandatarios o custodios, y, al mismo tiempo, hayan recibido instrucciones específicas de los beneficiarios o mandantes para ejercer el derecho a voto de esas cuotas de manera determinada.

La administradora velará porque el citado porcentaje máximo no sea excedido por colocaciones de cuotas efectuadas por su cuenta y por los agentes indicados en el artículo 41. Si así ocurriera, la Superintendencia establecerá los plazos para que las personas que excedan dichos porcentajes procedan a la enajenación de sus cuotas, hasta por aquella parte que permita el cumplimiento del mismo, sin perjuicio de las sanciones que al efecto la Superintendencia pueda aplicar. Las administradoras no podrán aceptar solicitudes de traspasos que den lugar a excesos sobre dicho porcentaje.

Las cuotas representativas del exceso por sobre este porcentaje máximo, mientras éste se mantenga, no tendrán derecho a voto en las Asambleas de Aportantes, ni serán consideradas para los efectos de los quórum de constitución y adopción de acuerdos. En caso de que exista un acuerdo de actuación conjunta, el voto de cada una de las partes de dicho acuerdo se rebajará proporcionalmente, salvo que éstas acordaren distribuir el voto de manera distinta hasta alcanzar dicho porcentaje máximo.

Artículo 7°.- Depósito del reglamento interno y comercialización del fondo. La administradora dispondrá de un plazo máximo de 180 días contados desde el depósito del reglamento interno respectivo, para iniciar la comercialización del fondo. Si así no ocurriese, la Superintendencia podrá cancelar el reglamento en el depósito.

Artículo 8°.- Idoneidad de los directores, gerentes, administradores y ejecutivos principales de la administradora y de demás personas que se indican. Los directores, gerentes, administradores o ejecutivos principales de la administradora, así como quienes realicen para ésta funciones de relevancia en la comercialización de las cuotas de fondos, en el proceso de elección o toma de decisiones de inversión para fondos, en la realización de operaciones de fondos y gestión de riesgos en la administradora, deberán contar con la idoneidad y los conocimientos suficientes sobre gestión y,o comercialización de fondos. La Superintendencia mediante norma de carácter general, establecerá los parámetros y estándares dentro de los cuales se presumirá que se cumple con la idoneidad y conocimientos requeridos en este inciso, los que deberán distinguir las distintas funciones dentro de la administradora.

La Superintendencia podrá fiscalizar el cumplimiento de dichos requisitos de idoneidad. En caso que concluyere que existe incumplimiento, deberá consignarlo en una resolución fundada, de carácter reservado, la que propondrá las medidas que permitan cumplir con dicho requisito.

En contra de dicha resolución podrán interponerse los recursos indicados en los artículos 45 y 46 del decreto ley Nº 3.538, de 1980. Una vez vencidos los plazos para interponerlos, la administradora deberá adoptar las medidas conducentes a superar la falta de idoneidad detectada, dentro del plazo que para ello establezca la resolución y, en caso contrario, servirá de antecedente para determinar la responsabilidad que cupiere a la administradora, de comprobarse que existe relación con los perjuicios que se produzcan con posterioridad.

Artículo 9°.- Remuneración de la administradora. Por la gestión del fondo, la administradora podrá cobrar a éste aquella remuneración que establezca el reglamento interno del mismo.

La administradora podrá cobrar su remuneración directamente al fondo o a los partícipes. La remuneración que se cobre directamente a los partícipes se denominará comisión y sólo podrá cobrarse al momento de efectuar la inversión o el rescate de la misma, sobre el monto aportado o rescatado, indistintamente. La remuneración, incluida la comisión,

podrán ser diferentes para los partícipes de distintas series, en su caso, en los términos y condiciones que establezca el Reglamento. En los casos y forma que establezca el reglamento interno del fondo, la remuneración, o parte de ella, podrá ser enterada al fondo por la administradora, en cuyo caso dicha remuneración pasará a formar parte del patrimonio de aquél, sin incrementar el número de cuotas del mismo. La remuneración devuelta y restituida al fondo, no se considerará como remuneración o renta para la administradora, para todos los efectos legales y tributarios.

Todo beneficio que reciba la administradora producto de la inversión de los activos del fondo deberá ser enterado a éste.

Artículo 10.- Incumplimiento del patrimonio mínimo. Si por cualquiera causa la administradora tuviere una pérdida o variación patrimonial que afectare el cumplimiento de patrimonio mínimo requerido en esta ley, aquélla deberá informar de este hecho a la Superintendencia al día siguiente hábil de producido el mismo, y estará obligada a restablecer los déficit producidos dentro del plazo que fije la Superintendencia, el cual no podrá ser superior a 90 días, prorrogables por una sola vez, por igual plazo. Si en dicho plazo no se regularizare esta situación, la Superintendencia podrá revocar la autorización de existencia de la administradora en cuestión.

Artículo 11.- Filiales de Bancos. Las administradoras que sean filiales de bancos no podrán invertir en aquellos activos que establezca al efecto la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras de manera conjunta con la Superintendencia.

§2. De la Garantía

Artículo 12.- Garantía Mínima. Las administradoras deberán constituir una garantía en beneficio de cada fondo para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones por la administración del mismo. Dicha garantía, deberá constituirse a más tardar el mismo día en que se deposite el reglamento interno del fondo respectivo, y ser mantenida hasta la total extinción de éste. La garantía será por un monto inicial de 10.000 unidades de fomento y podrá constituirse en dinero efectivo, boleta bancaria o pólizas de seguro, siempre que el pago de estas dos últimas no esté sujeto a condición alguna distinta que la mera ocurrencia del siniestro o hecho respectivo. En caso que no se constituyere la garantía o no se mantuviere permanentemente vigente, la administradora y sus directores responderán solidariamente de los perjuicios que este incumplimiento causare a los partícipes.

Artículo 13.- Actualización anual de la garantía. El monto de la garantía deberá actualizarse anualmente, para cada fondo, de manera que dicho monto sea siempre, a lo menos, equivalente al mayor valor entre:

i) 10.000 unidades de fomento;

ii) el 1% del patrimonio promedio diario del fondo, correspondiente al trimestre calendario anterior a la fecha de su actualización, o

iii) aquél porcentaje del patrimonio diario del fondo, correspondiente al trimestre calendario anterior a la fecha de su actualización, que determine la Superintendencia en función de la calidad de la gestión de riesgos que posea la administradora en cuestión. La calidad de la gestión de riesgos será medida según una metodología estándar que considerará los riesgos de los activos y riesgos operacionales, entre otros. Dicha metodología y demás parámetros serán fijados en el Reglamento.

Con todo, el porcentaje que establezca la Superintendencia, no podrá ser superior al 5% del patrimonio promedio diario del fondo, correspondiente al trimestre calendario anterior a la fecha de su actualización.

La Superintendencia, mediante una norma de carácter general, determinará la forma de cálculo del patrimonio promedio diario del fondo.

Artículo 14.- Representante de los beneficiarios de la garantía. Las administradoras deberán designar a un banco como representante de los beneficiarios de la garantía a que se refiere este Párrafo.

Si la garantía consistiere en depósitos de dinero, la entrega del dinero se hará al representante de los beneficiarios.

Si la garantía consistiere en boleta bancaria o póliza de seguros, el representante de los beneficiarios será el tenedor de los documentos justificativos de la misma. El banco o compañía de seguros otorgante, deberá pagar el valor exigido por tal representante a su simple requerimiento y hasta su monto garantizado.

No obstante lo dispuesto en el inciso precedente, y sin que sea necesario acreditarlo a las entidades otorgantes, el representante de los beneficiarios de boletas de garantía, para hacerlas efectivas, deberá ser notificado judicialmente del hecho de haberse interpuesto demanda en contra de la administradora caucionada. El dinero proveniente de la realización de la boleta bancaria quedará en prenda de pleno derecho en sustitución de esa garantía, manteniéndose en depósitos reajustables por el representante hasta que cese la obligación de mantener la garantía.

§3. Del Deber de Cuidado

Artículo 15.- Responsabilidad de la administradora. La responsabilidad por la función de administración es indelegable, sin perjuicio que las administradoras puedan conferir poderes especiales o celebrar contratos por servicios externos para la ejecución de

determinados actos, negocios o actividades necesarias para el cumplimiento del giro.

Artículo 16.- Contratación de Servicios Externos. Cuando se trate de la contratación de servicios externos, en el reglamento interno del fondo, deberá constar la facultad de la administradora para llevar a cabo dichos contratos. Asimismo, deberá señalarse en dicho documento si los gastos derivados de las contrataciones serán de cargo de la administradora o del fondo de que se trate y, en este último caso, la forma y política de distribución de tales gastos. Sin embargo, cuando dicha contratación consista en la administración de cartera de todo o parte de los recursos del fondo, los gastos derivados de estas contrataciones serán de cargo de la administradora.

Artículo 17.- Culpa leve y pago de indemnizaciones. La administradora, sus directores, gerentes, administradores y ejecutivos principales, deberán efectuar todas las gestiones que sean necesarias, con el cuidado y la diligencia que los hombres emplean ordinariamente en sus propios negocios, para cautelar la obtención de los objetivos establecidos en el reglamento interno del fondo, en términos de la rentabilidad y seguridad de sus inversiones. La administración de cada fondo debe realizarse atendiendo exclusivamente a la mejor conveniencia de éste y a que todas y cada una de las operaciones de adquisición y enajenación de activos que efectúe por cuenta del mismo, se hagan en el mejor interés del fondo.

La administradora podrá demandar a las personas que le hubieran ocasionado perjuicios al fondo, por los daños causados a éste, en juicio sumario. El procedimiento por el cual dichas indemnizaciones serán enteradas al fondo o traspasadas a sus partícipes deberá estar establecido en el reglamento interno de cada fondo.

La administradora estará obligada a indemnizar al fondo o a los partícipes por los daños y perjuicios que ella o cualesquiera de sus dependientes o personas que le presten servicios le causaren al fondo, como consecuencia de la ejecución u omisión, según corresponda, de cualesquiera de las actuaciones prohibidas a que se refieren los artículos 22 y 23 de la presente ley. Las personas antes mencionadas que hubieran participado en tales actuaciones serán solidariamente responsables del reembolso, que incluirá el daño emergente y el lucro cesante.

Artículo 18.- Obligación de informar. La administradora deberá informar en forma veraz, suficiente y oportuna a los partícipes de los fondos y al público en general, sobre las características de los fondos que administra, y de las series de cuotas en su caso, y sobre cualquier hecho esencial o relevante relacionado con la administradora o los fondos que administra, según dicho concepto está definido en la ley N° 18.045. La información mínima que deberá ser difundida y la forma de comunicación utilizada, será determinada por la Superintendencia.

Artículo 19.- Revocación por infracciones graves. La Superintendencia podrá revocar la autorización de existencia de la

administradora en los casos de infracción grave a las normas legales que rijan a los fondos y sus administradoras o cuando de las investigaciones que se practiquen resulte que la administración se ha llevado en forma fraudulenta o manifiestamente negligente.

Artículo 20.- Obligaciones de directores de la administradora. Los directores de la administradora, sin perjuicio de las obligaciones señaladas en la ley N° 18.046, estarán obligados a velar para que:

a) la administradora cumpla con lo dispuesto en el reglamento interno de cada fondo.

b) la información para los aportantes sea veraz, suficiente y oportuna.

c) las inversiones, valorizaciones u operaciones de los fondos se realicen de acuerdo con esta ley, su Reglamento, las normas que dicte la Superintendencia y lo dispuesto en el reglamento interno.

d) los partícipes de un mismo fondo, o de una misma serie, en su caso, reciban un trato no discriminatorio.

e) las operaciones y transacciones que se efectúen, sean sólo en el mejor interés del fondo de que se trate y en beneficio exclusivo de los partícipes del mismo.

Para dar cumplimiento a lo señalado en el inciso anterior, en las sesiones ordinarias de directorio, los directores deberán velar por el debido tratamiento de las materias antes descritas, debiendo dejar constancia de los acuerdos adoptados.

Artículo 21.- Auditores externos de la administradora. Las empresas de auditoría externa de las administradoras, en su informe anual, deberán pronunciarse acerca de los mecanismos de control interno que éstas se impongan para velar por el fiel cumplimiento de la ley, así como también sobre los sistemas de información y archivo para registrar el origen, destino y oportunidad de las transacciones que se efectúen con los recursos de cada fondo.

En su informe anual, las empresas de auditoría externa del fondo, deberán pronunciarse además sobre el cumplimiento de las políticas y normas contenidas en el reglamento interno del fondo.

§4. De las Prohibiciones

Artículo 22.- Prohibiciones. Sin perjuicio de las demás prohibiciones contenidas en otras leyes, son contrarias a la presente ley las siguientes actuaciones u omisiones efectuadas por las administradoras y, según corresponda en cada caso, por las personas que participen en las decisiones de inversión del fondo o que en razón de su cargo o posición, tengan acceso a información de las inversiones del fondo:

a) las operaciones realizadas con los bienes del fondo para obtener beneficios indebidos, directos o indirectos.

b) el cobro de cualquier servicio al fondo, no autorizado por ley o los reglamentos internos, o en plazos y condiciones distintas a las que en ellos se establezca.

c) el cobro al fondo de cualquier servicio prestado por personas relacionadas con la administradora del mismo, salvo que ello esté expresamente autorizado con un límite anual por el reglamento interno del fondo y que dicho cobro se efectúe a precios de mercado, de acuerdo a lo establecido en la ley Nº 18.046.

d) la comunicación de información relevante relativa a la adquisición, enajenación o mantención de activos por cuenta del fondo, a personas distintas de aquellas que estrictamente deban participar en las operaciones respectivas.

e) la adquisición de activos que haga la administradora para sí, dentro de los 5 días siguientes a la enajenación de éstos, efectuada por ella por cuenta del fondo, si el precio de compra es inferior al existente antes de dicha enajenación. Tratándose de activos de baja liquidez, este plazo será de 60 días.

f) la enajenación de activos propios que haga la administradora dentro de los 5 días siguientes a la adquisición de éstos por cuenta del fondo, si el precio de venta es superior al existente antes de dicha adquisición. Tratándose de activos de baja liquidez, este plazo será de 60 días.

g) la adquisición o enajenación de bienes por cuenta del fondo en que actúe para sí como vendedor o comprador la administradora o un fondo privado, de los del capítulo V de esta ley, bajo su administración o de una sociedad relacionada a ella.

h) la adquisición o enajenación de bienes por cuenta del fondo a personas relacionadas con la administradora o a fondos administrados por ella o por sociedades relacionadas, salvo que se trate de las excepciones a las que se refiere el artículo siguiente.

i) las enajenaciones o adquisiciones de activos que efectúe la administradora, si resultaren ser más ventajosas para ésta que las respectivas enajenaciones o adquisiciones de éstos, efectuadas en el mismo día, por cuenta del fondo. Lo anterior salvo que se entregara al fondo, dentro de los dos días siguientes al de la operación, la diferencia de precio correspondiente.

Para los efectos de las operaciones a que se refiere este artículo, se entenderá por activos, todos aquéllos que sean de la misma especie, clase, tipo, serie y emisor.

Se entenderá por activos de baja liquidez aquellos que no se transen frecuentemente y en volúmenes significativos en los mercados secundarios formales, todo lo anterior de conformidad a lo determinado por la Superintendencia mediante norma de carácter general.

No obstante las sanciones administrativas, civiles y penales que correspondan y el derecho a reclamar perjuicios, los actos o contratos realizados en contravención a las prohibiciones anteriormente señaladas, no verán afectada su validez.

Artículo 23.- Actos prohibidos. Las administradoras, sus directores, gerentes, administradores, ejecutivos principales y demás personas relacionadas, no podrán adquirir, enajenar o gravar directamente o a través de otras personas naturales o jurídicas, instrumentos, bienes o contratos, de propiedad de los fondos que administren, ni enajenar o gravar los suyos a éstos. Tampoco podrán dar en préstamo dinero u otorgar garantías a favor de dichos fondos y viceversa. Se exceptuarán de esta prohibición y de la establecida en la letra h) del artículo 22 anterior, aquellas adquisiciones y enajenaciones que se realicen sobre los activos en la forma y condiciones determinadas por la Superintendencia mediante norma de carácter general.

Las transacciones de cuotas del fondo que efectúen las personas mencionadas en el inciso anterior, deberán informarse a la Superintendencia en la forma y plazos que ésta determine mediante norma de carácter general. No se considerará para efectos de este inciso como persona relacionada, al custodio cuando actúe por cuenta de terceros.

§5. De la Disolución de la Administradora y Liquidación de los Fondos

Artículo 24.- Disolución y liquidación de la administradora. En caso que la administradora sea disuelta, por revocación de la autorización de existencia o por cualquiera otra causa, se procederá con su liquidación, de acuerdo al procedimiento establecido en este artículo. La liquidación de la administradora será llevada a cabo por quien determine la junta de accionistas de la misma, la que para estos efectos deberá celebrarse dentro de un plazo de 60 días contado desde la disolución. En caso de no realizarse la citada junta, o en caso que la revocación de la autorización de existencia hubiere sido resuelta por la Superintendencia por las causales señaladas en el artículo 19 de esta ley, esta liquidación será encomendada a la Superintendencia, la cual podrá delegar esta función en un tercero, en las condiciones que ésta determine.

Artículo 25.- Quiebra de la administradora. Declarada la quiebra de la administradora, la Superintendencia, o quien ésta designe, actuará como síndico con todas las facultades que al efecto confiere a los síndicos el Libro IV del Código de Comercio, en cuanto fueren compatibles con las disposiciones de la presente ley.

Artículo 26.- Destino de los fondos cuya administradora quiebre o se disuelva. Respecto de los fondos administrados

por la administradora disuelta o declarada en quiebra, se procederá de acuerdo a lo siguiente:

a) En caso de fondos que de conformidad a esta ley deban tener asamblea de aportantes, la asamblea de aportantes de cada uno de esos fondos, que deberá ser convocada al efecto por el Comité de Vigilancia del fondo, dentro de los 10 días siguientes de producida la disolución o declaración de quiebra, deberá encomendar dicha administración y escoger a otra administradora, o bien encomendar su liquidación a la Superintendencia, o a un tercero. En caso de no realizarse la citada asamblea de aportantes o en caso que esa asamblea así lo determine, la liquidación del fondo será encomendada a la Superintendencia, la cual podrá delegar esta función en un tercero, en las condiciones que ésta determine.

b) En caso de fondos que de conformidad a esta ley no deban tener asamblea de aportantes, la Superintendencia será la encargada de la liquidación del fondo, la que podrá delegar esta función en un tercero, en las condiciones que ésta determine. La Superintendencia, en interés de los partícipes del fondo, podrá traspasar la administración de éste a otra administradora, en vez de proceder con su liquidación.

c) Para la liquidación de los fondos, la Superintendencia estará investida con todas las facultades necesarias para la adecuada realización de los bienes del fondo.

En caso de insolvencia de un fondo, sus acreedores podrán solicitar su quiebra. En caso de ser ésta declarada, la Superintendencia, o quien ésta designe, actuará como síndico con todas las facultades que al efecto confiere a los síndicos el Libro IV del Código de Comercio, en cuanto fueren compatibles con las disposiciones de la presente ley.

Respecto de la liquidación de los fondos en casos distintos a la disolución o quiebra de la administradora, o a la quiebra del propio fondo, ésta deberá llevarse a cabo de acuerdo a lo establecido en el reglamento interno del fondo que se está liquidando.

Artículo 27.- Costos de la liquidación. Los costos asociados a la liquidación de un fondo serán de cargo del fondo que se liquida. Si es una administradora la que se disuelve, los costos asociados a dicho proceso serán de cargo de la propia administradora.

Capítulo III
De los Fondos
§1. De la Denominación

Artículo 28.- Los Fondos Mutuos. Los fondos que permitan el rescate total y permanente de las cuotas, y que las paguen en un plazo inferior o igual a 10 días, se denominarán “Fondos Mutuos”, y deberán incluir en su nombre y publicidad, la expresión “Fondo Mutuo”.

Para estos efectos, no se considerarán las restricciones que puedan establecerse en el reglamento interno del fondo para los rescates que se realicen diariamente por montos significativos que cumplan las condiciones que establezca la Superintendencia mediante norma de carácter general.

Artículo 29.- Los Fondos de Inversión. Los fondos que no sean Fondos Mutuos de acuerdo con lo definido en el artículo anterior, se denominarán “Fondos de Inversión” y deberán incluir en su nombre y publicidad, la expresión “Fondo de Inversión”. Si además tuvieran la calidad de fondos no rescatables, deberá incluirse en su nombre y publicidad la expresión “no rescatable”.

Artículo 30.- Nombres que induzcan a error. Los nombres de los fondos no podrán contener palabras o expresiones que puedan inducir a error o equívoco del público, respecto de la naturaleza, características y rentabilidad del fondo respectivo.

§2. De los Aportes y los Rescates

Artículo 31.- Calidad de aportante. La calidad de aportante se adquiere al momento en que el aporte quede a libre disposición de la administradora, por cuenta del fondo respectivo y, específicamente:

a) Si el aporte fuere dinero efectivo o vale vista bancario, en moneda nacional o extranjera, al momento de recibirlo la administradora.

b) Si el aporte fuese pagado mediante un cheque, en moneda nacional o extranjera, al momento en que se perciba el aporte del banco librado.

c) Si se tratare de transacciones en el mercado secundario, cuando se curse el traspaso correspondiente.

d) Tratándose de otro tipo de aportes, al momento y en la forma que establezca el Reglamento.

Artículo 32.- Pago del aporte. Los aportes al fondo podrán ser efectuados en dinero efectivo, moneda extranjera, vale vista bancario, cheque o en aquellos instrumentos, bienes y contratos que permita la Superintendencia, según lo establezca el reglamento interno del fondo. Los aportes que efectúe la administradora a nombre propio y los de sus personas relacionadas, sólo podrán efectuarse en dinero efectivo o moneda extranjera.

Tratándose de aportes que no sean en dinero efectivo, deberán ser convertidos en cuotas a precios que no perjudiquen el mejor interés del fondo, de conformidad a las normas que al efecto pueda establecer la Superintendencia.

Artículo 33.- Las cuotas del fondo. Los aportes quedarán expresados en cuotas del fondo, pudiendo existir distintas series de éstas para un mismo fondo, lo que deberá establecerse en el reglamento interno respectivo y bajo las condiciones que establezca la Superintendencia.

Las cuotas de un fondo, o de la serie en su caso, deberán tener igual valor y características, y su cesión se regirá por las formalidades y procedimientos que establezca el Reglamento. Las cuotas de una serie de un fondo podrán ser canjeadas por cuotas de otra serie del mismo fondo, proceso que deberá regirse por las normas que al respecto se establezcan en el Reglamento.

Artículo 34.- El registro de aportantes. El directorio de la administradora será responsable por la custodia y mantención de un Registro de aportantes, el que cumplirá con los términos y condiciones establecidos mediante norma de carácter general de la Superintendencia. En dicho Registro, que acreditará la titularidad de las cuotas del fondo respectivo, deberá constar el número de cuotas del que cada aportante es titular y la forma y oportunidad de su ingreso y salida del fondo, o de la serie en su caso. El directorio podrá delegar esta función, de lo que deberá dejarse constancia en acta.

Artículo 35.- Precio de colocación de las cuotas. En caso de colocaciones de cuotas efectuadas fuera de los sistemas de negociación bursátil autorizados por la Superintendencia, el precio de colocación será el valor cuota, definido por el Reglamento. En caso de colocaciones en los sistemas de negociación bursátil autorizados por la Superintendencia, será aquél que libremente estipulen las partes en esos sistemas de negociación.

No obstante lo establecido en el inciso anterior, las colocaciones de cuotas de fondos no rescatables podrán efectuarse fuera de los sistemas de negociación bursátil autorizados por la Superintendencia, al precio que determine al efecto la administradora, en el caso de la primera emisión de cuotas, o la Asamblea de Aportantes, en el caso de las siguientes emisiones.

Artículo 36.- Derecho preferente de suscripción de cuotas. En caso de aumento de capital del fondo, los fondos no rescatables, deberán ofrecer las nuevas cuotas, a lo menos por una vez, preferentemente a los aportantes del fondo inscritos en el Registro de aportantes a la medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha de la colocación de las cuotas respectivas, a prorrata de las cuotas que éstos posean a ese momento, y por el plazo que la misma Asamblea de aportantes acuerde.

Este derecho es esencialmente renunciable y transferible, en los plazos y términos que establezca el Reglamento, pudiendo además, la misma Asamblea Extraordinaria de aportantes que acordó el aumento de capital, por unanimidad de las cuotas presentes, establecer que no habrá oferta preferente alguna.

Artículo 37.- Contrato de promesa de suscripción de cuotas. En la colocación de cuotas de fondos no rescatables se podrán celebrar contratos de promesa de suscripción y pago de las respectivas cuotas, para ser cumplidas en un plazo posterior al del respectivo período de oferta preferente, pero dentro del plazo máximo establecido en el reglamento interno del fondo. El contrato de promesa de suscripción y pago de cuotas que celebren la administradora y el futuro aportante, deberá regirse por las normas que al respecto se establezcan en el Reglamento.

Artículo 38.- El rescate de las cuotas. Las cuotas del fondo podrán ser rescatadas por los partícipes, siempre que así lo establezca el reglamento interno del fondo, el cual fijará los términos, condiciones y plazos para ello.

En caso de fondos no rescatables, las cuotas del fondo deberán estar registradas en una bolsa de valores nacional, o extranjera autorizada por la Superintendencia para estos efectos, y la administradora podrá establecer mecanismos que permitan asegurar a los partícipes un adecuado y permanente mercado secundario para sus cuotas, según se establezca en el reglamento interno del fondo.

El rescate podrá ser pagado en dinero efectivo, moneda extranjera, vale vista bancario o en aquellos instrumentos, bienes y contratos que permita la Superintendencia, de conformidad a lo que establezca el reglamento interno del fondo.

Los rescates que solicite la administradora a nombre propio y los de sus personas relacionadas, sólo podrán pagarse en dinero efectivo o moneda extranjera.

Tratándose de rescates que no sean pagados en dinero efectivo, deberán ser valorizados a precios que no perjudiquen el mejor interés del fondo, de conformidad a las normas que al efecto podrá establecer la Superintendencia.

La administradora y los partícipes podrán acordar que la solicitud de rescate sea cursada en una fecha posterior a la de su presentación, de conformidad a lo establecido en su reglamento interno.

Artículo 39.- Determinación del valor cuota. Para efectos de determinar el valor a pagar a los aportantes que soliciten el rescate de cuotas del fondo, se utilizará el “valor cuota”, definido por el Reglamento.

La administradora deberá poner a disposición del público dicho valor cuota, en la forma y medios que determine la Superintendencia, mediante norma de carácter general.

Artículo 40.- Suspensión de operaciones de rescate. La Superintendencia podrá, en caso de moratoria, conmoción pública, cierre bancario o de bolsa y otros hechos o anormalidades semejantes, así como en otras circunstancias que determine en el mejor

interés y protección de los partícipes, autorizar transitoriamente que el rescate de cuotas se pague de otra forma, condiciones y plazos, o bien, suspender las operaciones de rescate, las distribuciones en efectivo y la consideración de nuevas solicitudes de aporte.

Artículo 41.- Agentes para suscripción y rescate de cuotas. Las colocaciones y rescates de cuotas, podrán efectuarse directamente por la administradora o por agentes que serán mandatarios de ésta para los efectos de la suscripción y rescate de cuotas u otra clase de operaciones que por su intermedio efectúen los partícipes del fondo.

Dichos agentes deberán acreditar a satisfacción de la Superintendencia que cuentan con la idoneidad y los conocimientos suficientes sobre comercialización de fondos. Dicha acreditación se efectuará en la forma y periodicidad que establezca la Superintendencia mediante norma de carácter general.

Artículo 42.- Adquisición de cuotas de propia emisión. Los fondos podrán adquirir, a precios iguales o inferiores al valor cuota, y poseer cuotas de su propia emisión cuando dicha facultad esté contemplada en el reglamento interno del fondo, de acuerdo a los términos, condiciones y plazos que establezca dicho reglamento interno.

Las cuotas deberán adquirirse en una bolsa de valores o en los mercados que autorice la Superintendencia por norma de carácter general. Con todo, los fondos no podrán adquirir cuotas de propiedad de la administradora, sus personas relacionadas, sus directores, gerentes, administradores y ejecutivos principales, salvo que ellas se adquieran en un proceso de oferta pública de recompra de cuotas dirigida a todas las series y todos los partícipes o aportantes del fondo.

Artículo 43.- Porcentaje máximo de cuotas de propia emisión. Los fondos sólo podrán mantener en cartera cuotas de su propia emisión representativas de hasta aquel porcentaje del patrimonio total del fondo que establezca su reglamento interno, el cual no podrá ser superior al 5%.

Los excesos producidos deberán ser enajenados al cabo de 90 días contados a partir de la fecha de la adquisición que hubiere dado origen al exceso. Si así no ocurriere, el capital disminuirá de pleno derecho en aquel número de cuotas representativas del exceso por sobre este porcentaje máximo. En caso de ocurrida la disminución de pleno derecho, ésta deberá ser comunicada a los partícipes y a la Superintendencia, dentro de los 5 días hábiles siguientes.

El fondo podrá adquirir diariamente una cantidad de cuotas representativa de hasta el 1% del patrimonio del fondo, o aquel porcentaje inferior que contemple su reglamento interno, salvo que ellas se adquieran en un proceso de oferta pública de recompra de cuotas dirigida a todas las series de cuotas y a todos los partícipes o aportantes del fondo. Sólo podrán ser adquiridas por este procedimiento cuotas del fondo que estén totalmente pagadas y libres de todo gravamen o prohibición.

Las cuotas adquiridas por el fondo deberán enajenarse en una bolsa de valores o en los mercados autorizados por la Superintendencia dentro del plazo máximo de un año a contar de su adquisición y, si así no se hiciere, el capital disminuirá de pleno derecho en aquel número de cuotas adquiridas por el fondo. Para la enajenación de las cuotas deberá cumplirse con la oferta preferente de suscripción señalada en el artículo 36 de esta ley, en caso que fuere aplicable.

Artículo 44.- Reglas adicionales. La adquisición y posesión de cuotas de su propia emisión por parte del fondo quedará sujeta a las siguientes normas adicionales:

a) El valor de las cuotas propias en cartera no se considerará parte del patrimonio mínimo para todos los efectos legales, reglamentarios y normativos.

b) Mientras las cuotas sean de propiedad del fondo, no se computarán para la constitución del quórum en las Asambleas de Aportantes, en aquellos fondos que por ley las requieran, y no tendrán derecho a voto, dividendo o preferencia en la suscripción de aumentos de capital.

§3. Del Reglamento Interno

Artículo 45.- Contenido del reglamento interno. Cada fondo deberá contar con un reglamento interno en el que se establecerán los derechos, obligaciones y políticas que regirán a la administradora, al fondo y a los partícipes del mismo.

Artículo 46.- Depósito del reglamento interno. Las administradoras deberán depositar el reglamento interno, y demás documentos que determine la Superintendencia mediante norma de carácter general, de cada uno de los fondos que administren, o en su caso, las modificaciones respectivas. Para estos efectos, la Superintendencia llevará un “Depósito de Reglamentos Internos”, en adelante denominado el “Depósito”.

Artículo 47.- Comercialización de las cuotas. Las cuotas de un fondo podrán ser comercializadas a partir del día siguiente hábil del depósito que se haga del reglamento interno y demás documentos exigidos al efecto por la Superintendencia, considerándose, a partir de ese momento y para todos los efectos legales, como valores de oferta pública inscritos en el Registro de Valores que lleva la Superintendencia.

La comercialización de las cuotas del fondo, deberá ajustarse a los requisitos de información que podrá establecer la Superintendencia por norma de carácter general, la que, además, podrá requerir el depósito de los prospectos o folletos que se entreguen al público para efectos de dicha comercialización.

En la comercialización de las cuotas del fondo no podrá ofrecerse ningún beneficio al aportante o partícipe que no se encuentre asociado a la rentabilidad que se obtenga por las inversiones del mismo, a su política de inversiones u otros que determine la Superintendencia.

Artículo 48.- Políticas del reglamento interno. Los fondos deberán contemplar en sus reglamentos internos, al menos, las siguientes políticas:

a) Política de Inversión: serán las normas que deberá respetar la administradora en cuanto a los tipos de instrumentos, bienes y contratos en los que se invertirán los recursos del fondo, y en caso que corresponda, sus clasificaciones de riesgo, contrapartes y mercados de negociación, con los límites pertinentes y tratamiento de excesos.

b) Política de Liquidez: serán las normas que deberá observar la administradora, en lo que respecta a los requisitos que deberán cumplir las inversiones del fondo para efectos de contar con los recursos líquidos necesarios para cumplir con las obligaciones por las operaciones del fondo o el pago de rescate de cuotas.

c) Política de Endeudamiento: serán las normas que deberá acatar la administradora en lo que respecta a las obligaciones que asumirá el fondo con terceros, con los límites correspondientes.

d) Política de Diversificación: serán las normas que deberá obedecer la administradora, en relación con el grado de concentración máximo del fondo que se podrá mantener invertido en un instrumento, contrato o bien particular; en un tipo de instrumentos, contratos o bienes; en mercados específicos; o en cuanto a la relevancia relativa que cada uno de ellos podrá tener respecto del resto.

e) Política de Votación: serán las normas que regirán el actuar de la administradora en el ejercicio del derecho a voto que le confieran al fondo sus inversiones, con las prohibiciones o restricciones que se establezcan al efecto.

f) Política de Gastos: serán las normas que establecerán aquellos gastos y cobros que serán de cargo del fondo.

Estas políticas, deberán ser consistentes y coherentes con aquellas normas que se definan en cuanto a la rescatabilidad de la cuota, al pago de la misma y al tipo de inversionistas a los que está dirigido el fondo.

Artículo 49.- Ajuste del reglamento interno con la legislación vigente. Los contenidos mínimos tanto de los reglamentos internos como de la demás documentación que emplee la administradora en su relación con el inversionista, serán establecidos por la Superintendencia. De igual manera, se regulará la forma en que las administradoras remitirán los antecedentes objeto de depósito.

Las administradoras serán responsables de que los contenidos de los reglamentos internos y documentación que depositen se ajusten a la legislación y normativa vigente y sean redactados en forma clara, entendible y no inductiva a error.

La Superintendencia podrá, en cualquier momento, representar fundadamente a la sociedad que sus reglamentos o contratos no se ajustan a la legislación o normativa vigente. Asimismo, mediante resolución fundada, podrá suspender la comercialización de las cuotas del fondo hasta el momento en que entren en vigencia las modificaciones que subsanan las observaciones formuladas por la Superintendencia a los reglamentos o contratos, sin perjuicio de aplicar las sanciones administrativas que sean pertinentes. En caso que la administradora continuara comercializando las cuotas o no subsanara las observaciones en el plazo que indique la Superintendencia, el que no podrá ser inferior a dos días hábiles, ésta podrá, sin más trámite, proceder a la eliminación definitiva de los reglamentos o documentos del correspondiente Depósito y ordenar la liquidación del fondo.

Artículo 50.- Reglamento general de fondos. En caso que la administradora gestione más de un fondo, deberá depositar, en la forma y condiciones establecidas en esta ley para los reglamentos internos, un reglamento general de fondos, el cual deberá abordar, al menos:

a) La forma de prorrateo de los gastos de administración entre los distintos fondos gestionados.

b) Los límites de inversión que se deberán respetar por la inversión conjunta de esos fondos y la forma y proporción en que se liquidarán los excesos de inversión.

c) La forma en que se resolverán los conflictos que pudieren producirse entre fondos, sus partícipes o la administración de los mismos.

d) Los beneficios especiales de los partícipes de fondos en relación al rescate de cuotas y su inmediato aporte en otro fondo administrado por la misma administradora.

e) Cualquiera otra mención que la Superintendencia determine mediante norma de carácter general.

Artículo 51.- Modificaciones a los reglamentos. Las modificaciones que se introduzcan al reglamento interno, reglamento general de fondos, y demás documentación ya depositada, deberán ser comunicadas por la administradora a los partícipes del fondo y ser incorporadas al texto del reglamento interno, cuyo texto refundido deberá ser depositado conforme a lo dispuesto en el artículo 49. El plazo de esta comunicación, al igual que la entrada en vigencia de las modificaciones, serán establecidas en el Reglamento. La forma, formalidades y el contenido de la comunicación serán determinados por la Superintendencia por norma de carácter general.

§4. De las Operaciones de los Fondos

Artículo 52.- Operaciones del Fondo. Las operaciones del fondo serán efectuadas por la administradora por cuenta y riesgo del fondo, el cual será titular de los instrumentos representativos de las inversiones realizadas y de los bienes adquiridos, los que se registrarán y contabilizarán en forma separada de las operaciones realizadas por la administradora con sus recursos propios y de las operaciones de otros fondos que administre.

Artículo 53.- Custodia de instrumentos. La administradora deberá encargar directamente a una empresa de depósito de valores regulada por la ley N° 18.876, el depósito de aquellos instrumentos que sean susceptibles de ser custodiados por ésta. La Superintendencia establecerá mediante norma de carácter general los instrumentos no susceptibles de ser custodiados por parte de las referidas empresas y podrá autorizar, en casos calificados, que todos o un porcentaje de los instrumentos del fondo sean mantenidos en depósito en otra institución. En el caso de los instrumentos extranjeros, la Superintendencia establecerá, mediante norma de carácter general, la forma en que deberá llevarse la custodia y el depósito.

La Superintendencia, mediante norma de carácter general, podrá establecer requisitos y obligaciones adicionales a las señaladas en este artículo, para la custodia de los bienes e instrumentos del fondo.

Artículo 54.- Cuentas Corrientes. Las administradoras deberán mantener el dinero en efectivo de los fondos que administren en una o más cuentas corrientes bancarias a nombre de cada fondo o de los fondos en general. Dichas cuentas deberán ser distintas de las cuentas corrientes que tenga la administradora por cuenta propia.

Artículo 55.- Inembargabilidad. Los dineros, instrumentos y bienes que, en conformidad a este artículo, mantengan las administradoras por cuenta del o los fondos que administren serán inembargables para todos los efectos legales, salvo que se trate de obligaciones propias del fondo o garantizadas por éste.

Artículo 56.- Inversión de los recursos del fondo. Sin perjuicio de las cantidades que mantengan en dinero efectivo o moneda extranjera, la inversión de los recursos del fondo podrá efectuarse en todo tipo de instrumentos, contratos o bienes, o certificados representativos de éstos, que cumplan con los requisitos generales y formales que establezca la Superintendencia, mediante norma de carácter general.

En todo caso, las operaciones de cambios internacionales que realicen los fondos se regirán por las disposiciones contenidas en el Párrafo Octavo, del Título III, del artículo primero de la ley N° 18.840. Esta disposición se aplicará también a los Fondos Privados a que se refiere el capítulo V de esta ley.

Los fondos dirigidos a inversionistas calificados, podrán invertir sus recursos en instrumentos, bienes o contratos que no cumplan con los requisitos que establezca la Superintendencia, en la medida que contemplen esa facultad en su reglamento interno, que la inversión en ellos no esté expresamente prohibida por la Superintendencia y que su forma de valorización esté contenida en el reglamento interno, de conformidad con los términos y condiciones que determine la Superintendencia mediante norma de carácter general.

No obstante lo señalado en los incisos precedentes, la inversión de los fondos siempre deberá efectuarse en instrumentos, bienes y contratos que cumplan las políticas, requisitos, condiciones y restricciones establecidas en el reglamento interno del fondo y el reglamento general de fondos de la administradora.

Será responsabilidad de la administradora velar porque las inversiones del fondo le permitan cumplir a cabalidad las obligaciones que le imponen los reglamentos internos y el reglamento general de fondos, en especial las normas de rescatabilidad del fondo, siendo civilmente responsable por los perjuicios que ocasionare al fondo o a los partícipes por sus actuaciones u omisiones.

Artículo 57.- Inversiones y Actividades Prohibidas. Los fondos regulados en los capítulos III y V del Título I de esta ley no podrán invertir directamente en bienes raíces corporales e incorporales, pertenencias mineras, derechos de agua, derechos de propiedad industrial o intelectual y vehículos de cualquier clase; ni podrán desarrollar directamente actividades industriales, comerciales, inmobiliarias, agrícolas, de minería, exploración, explotación o extracción de bienes de cualquier tipo, de intermediación, de seguro o reaseguro o cualquier otro emprendimiento o negocio que implique el desarrollo directo de una actividad comercial, profesional, industrial o de construcción por parte del fondo y en general de cualquiera actividad desarrollada directamente por éste distinta a la de inversión.

Artículo 58.- Inversiones en personas relacionadas. Salvo las excepciones contenidas en la presente ley, el fondo no podrá invertir en cuotas de fondos administrados por su administradora o por una administradora de su grupo empresarial según dicho concepto es definido en la ley N° 18.045, en acciones emitidas por sociedades administradoras de fondos ni en instrumentos, contratos o bienes, emitidos, garantizados o de propiedad de personas relacionadas a la administradora.

En el evento que un determinado emisor en el cual el fondo mantiene inversiones, por razones ajenas a la administradora, pase a ser persona relacionada a la misma, dicha sociedad deberá informar al Comité de Vigilancia, si lo tuviere, y a la Superintendencia al día siguiente hábil de ocurrido el hecho. La regularización de la situación mencionada deberá efectuarse dentro del plazo de 24 meses, contado desde que ésta se produjo.

Para los efectos de este artículo y de las demás disposiciones relativas a inversiones en personas relacionadas o en instrumentos emitidos o garantizados por ella de la presente ley o del Reglamento, no se considerará como persona relacionada a la administradora, la que adquiera dicha condición como consecuencia de la inversión en ella de los recursos del fondo.

Artículo 59.- Límites en las inversiones. Los fondos mutuos que no estén dirigidos a inversionistas calificados, en ningún caso podrán:

a) Invertir más del 50% de su activo en valores que no tengan los requisitos de liquidez y profundidad que requiera la Superintendencia mediante norma de carácter general.

b) Poseer más del 25% del capital suscrito y pagado o del activo de un emisor, o de la deuda del Estado de Chile o de un Estado extranjero.

c) Invertir más de un 20% de su activo en instrumentos emitidos o garantizados por una misma entidad, con la excepción de: (a) cuotas de un fondo extranjero o cuando el emisor o garante sea el Estado de Chile o un Estado extranjero con clasificación de riesgo de su deuda soberana equivalente o superior a la de Chile; y (b) cuotas de un fondo nacional o en títulos de deuda de securitización correspondientes a un patrimonio de los referidos en el Título XVIII de la ley Nº 18.045, en cuyo caso el límite máximo será de un 25%.

d) Invertir más de un 30% de su activo en instrumentos emitidos o garantizados por entidades pertenecientes a un mismo grupo empresarial.

e) Controlar, directa o indirectamente, a un emisor de valores.

f) Invertir en instrumentos en que inviertan otros fondos administrados por la misma administradora del fondo u otra administradora de su mismo grupo empresarial y que a consecuencia de la inversión de éste, se superen, en conjunto, los porcentajes señalados en este artículo.

g) Contraer deudas por más del 20% del patrimonio del fondo. La Superintendencia por norma de carácter general establecerá qué se considerará como deuda para efectos de este límite.

Artículo 60.- Excesos de inversión. Los excesos que se produjeren respecto de los límites establecidos en el artículo anterior, o en el reglamento interno del fondo respectivo, cuando se deban a causas imputables a la administradora, deberán ser subsanados en un plazo que no podrá superar los 30 días de ocurrido el exceso. Cuando dichos excesos se produjeren por causas ajenas a la administración, la Superintendencia establecerá mediante norma de carácter general las condiciones y los plazos en que deberá procederse a la regularización de las inversiones, sin que el

plazo que fije pueda exceder de doce meses contados desde la fecha en que se produzca el exceso.

Artículo 61.- Requisitos para invertir en cuotas de fondos administrados por la misma administradora o personas relacionadas. Los recursos de un fondo podrán ser invertidos en cuotas de fondos gestionados por la misma administradora o por una del grupo empresarial de ésta, sólo si se cumplen las siguientes condiciones copulativas:

a) el reglamento interno del fondo así lo permita expresamente;

b) la política de inversión, liquidez, diversificación y endeudamiento, normas de rescatabilidad, participación en juntas y asambleas, y demás contenidas en el reglamento de los fondos en que se efectuará la inversión es consistente con la del respectivo fondo;

c) se establezca en el reglamento interno del fondo, un porcentaje máximo de gastos, remuneraciones y comisiones, como porcentaje del activo del mismo, que podrá ser cargado a éste por la gestión e inversión directa e indirecta de sus recursos en tales fondos;

d) Si el fondo no es dirigido a inversionistas calificados, que la inversión sea en fondos fiscalizados por la Superintendencia; y

e) No se trate de inversiones recíprocas entre ellos.

Artículo 62.- Inversiones en instrumentos emitidos o garantizados por personas relacionadas a la administradora. Los recursos de un fondo podrán ser invertidos en instrumentos emitidos o garantizados por personas relacionadas a la administradora, sólo si se cumple alguna de las siguientes condiciones:

a) Sean acciones inscritas en bolsas nacionales o extranjeras, que cumplan con los requisitos de liquidez que establezca la Superintendencia mediante norma de carácter general.

b) Sean títulos de deuda con clasificación de riesgo equivalente o superior a aquélla que determine fundadamente la Superintendencia mediante norma de carácter general.

c) Que el fondo esté dirigido a inversionistas calificados y el reglamento interno del mismo contemple expresamente esa posibilidad, con sus límites correspondientes.

Artículo 63.- Inversión de recursos mínimos para el funcionamiento del fondo. En caso que para el normal funcionamiento y cumplimiento del objetivo del fondo se requiera de la captación o mantención de una cantidad mínima de recursos, la administradora deberá velar porque la inversión de los recursos que se aporten a éste, mientras no se alcance

ese mínimo, sean invertidos en instrumentos, bienes y contratos cuyas características y condiciones resguarden debidamente los intereses de los partícipes del fondo frente a la necesidad de liquidarlo ante la imposibilidad de lograr recursos suficientes.

Artículo 64.- Constitución de sociedades. Para el cumplimiento de sus objetivos de inversión, los fondos podrán concurrir a la constitución de sociedades.

Artículo 65.- Concurrencia a Juntas de Accionistas. Cuando así lo establezca la política de votación contenida en el reglamento interno del fondo, las administradoras, deberán concurrir a las Juntas de Accionistas, Asambleas de Aportantes o Juntas de Tenedores de Bonos de las entidades emisoras de los instrumentos que hayan sido adquiridos con recursos del fondo respectivo, representadas por sus gerentes o mandatarios especiales designados por su directorio, no pudiendo los gerentes ni los mandatarios especiales actuar con poderes distintos de aquellos que la administradora les confiera.

Artículo 66.- Activos no afectos a gravámenes. Los bienes y valores que integren el activo del fondo no podrán garantizar obligaciones de terceros ni estar afectos a gravámenes, prohibiciones, limitaciones al dominio o modalidades, salvo que sean para garantizar obligaciones propias del fondo. Sólo los fondos que cuenten con Asambleas de Aportantes podrán garantizar deudas de sociedades en las que tengan participación, siempre y cuando así lo acuerde la respectiva asamblea para cada caso y se ajuste a los límites que al efecto se establezcan en el reglamento interno.

Artículo 67.- Fusión y división de fondos. En caso que la presente ley no exija la participación de los aportantes para estos efectos, las administradoras podrán llevar a cabo la fusión o división de los fondos que administren o de sus series, conforme a los requisitos y procedimientos que determine la Superintendencia mediante norma de carácter general.

§5. Del Comité de Vigilancia

Artículo 68.- Comité de Vigilancia. Los fondos no rescatables deberán contar con un Comité de Vigilancia.

Artículo 69.- Composición y funcionamiento. El Comité de Vigilancia estará compuesto por un número impar de representantes de los aportantes del fondo, los que serán elegidos en asamblea ordinaria y durarán un año en sus cargos, pudiendo ser reelegidos, y remunerados con cargo al fondo, según se determine en el reglamento interno. Dichos representantes no podrán ser personas relacionadas a la sociedad administradora del fondo.

Iniciada la operación de un fondo, la administradora procederá a designar un Comité de Vigilancia provisorio, que durará en sus funciones hasta la primera asamblea ordinaria de aportantes.

Artículo 70.- Atribuciones. Las atribuciones del Comité de Vigilancia serán:

a) Comprobar que la administradora cumpla lo dispuesto en el reglamento interno del fondo.

b) Verificar que la información para los aportantes sea veraz, suficiente y oportuna.

c) Constatar que las inversiones, variaciones de capital u operaciones del fondo se realicen de acuerdo con esta ley, al Reglamento y al reglamento interno del fondo. En caso que la mayoría de los miembros del Comité de Vigilancia determine que la administradora ha actuado en contravención a dichas normas, éste deberá solicitar, en un plazo no mayor a 15 días contado desde la fecha del acuerdo, se cite a una asamblea extraordinaria de aportantes, en la cual se informará de esta situación.

d) Contratar los servicios necesarios para el cumplimiento de sus funciones.

e) Proponer a la asamblea extraordinaria de aportantes la sustitución de la administradora del fondo.

f) Requerir de la administradora la información respecto de la gestión de emisores en los cuales el fondo tiene el control.

g) Las demás que establezca el reglamento interno.

Artículo 71.- Deber de reserva. Los miembros del Comité de Vigilancia están obligados a guardar reserva respecto de los negocios y de la información del fondo a que tengan acceso en razón de su cargo y que no haya sido divulgada por la administradora.

§6. De la Asamblea de Aportantes

Artículo 72.- Asambleas de aportantes. Los fondos no rescatables, deberán someter a asambleas ordinarias o extraordinarias, las materias señaladas en este Párrafo.

Las asambleas ordinarias se celebrarán una vez al año, dentro de los primeros cinco meses siguientes a la fecha de cierre de cada ejercicio, para decidir respecto de las materias propias de su conocimiento, sin que sea necesario señalarlas en la respectiva citación.

Las asambleas extraordinarias podrán celebrarse en cualquier tiempo, cuando así lo exijan las necesidades del fondo, para

pronunciarse respecto de cualquiera materia que la ley o el reglamento interno del fondo entreguen al conocimiento de las asambleas de aportantes y siempre que tales materias se señalen en la citación.

Los acuerdos adoptados en asambleas de aportantes, así como los asistentes a éstas, deberán constar en actas. El contenido mínimo, formalidades y medios en que se llevarán las actas, serán definidos por el Reglamento.

Artículo 73.- Materias de las Asambleas Ordinarias. Son materias de la asamblea ordinaria de aportantes, las siguientes:

a) Aprobar la cuenta anual del fondo que deberá presentar la sociedad administradora, relativa a la gestión y administración del fondo, y a los estados financieros correspondientes.

b) Elegir anualmente a los miembros del Comité de Vigilancia.

c) Aprobar el presupuesto de ingresos y gastos del Comité de Vigilancia.

d) Fijar las remuneraciones del Comité de Vigilancia, si correspondiere.

e) Designar anualmente, de entre una terna propuesta por el Comité de Vigilancia, a las empresas de auditoría externa de aquellas inscritas en el Registro que al efecto lleva la Superintendencia, para que dictaminen sobre el fondo.

f) Designar al o los peritos o valorizadores independientes que de acuerdo con la reglamentación se requieran para valorizar las inversiones del Fondo.

g) En general, cualquier asunto de interés común de los aportantes que no sea propio de una asamblea extraordinaria.

Artículo 74.- Materias de las Asambleas Extraordinarias. Son materias de la asamblea extraordinaria de aportantes, las siguientes:

a) Aprobar las modificaciones que proponga la administradora al reglamento interno del fondo.

b) Acordar la sustitución de la administradora.

c) Tomar conocimiento de cualquiera situación que pueda afectar los intereses de los aportantes.

d) Acordar los aumentos y disminuciones de capital, en aquellos casos en que el reglamento interno requiera que esta

materia deba ser aprobada por asamblea y salvo en aquellos casos en que esta ley contemple que ellos se producen automáticamente y de pleno derecho. En todo caso, las disminuciones de capital deberán realizarse a prorrata, según la participación que cada aportante tenga en el fondo. En caso que la disminución sea mediante una disminución del número de cuotas, una vez determinado el número de cuotas a disminuir, los aportantes podrán pactar entre sí un sistema de distribución distinto de la proporción que a cada uno le corresponda en tales cuotas, el que no podrá alterar el monto total a disminuir y deberá sujetarse a la forma que determine el Reglamento.

e) Acordar la división y fusión con otros fondos o series.

f) Acordar la disolución anticipada del fondo y designar al liquidador, fijándole sus atribuciones, deberes y remuneraciones, y aprobar la cuenta final al término de la liquidación.

g) Aprobar la creación de series de cuotas así como las modificaciones a las características de las ya existentes.

h) Los demás asuntos que, por el Reglamento o por el reglamento interno del fondo, corresponden a su conocimiento.

En los casos señalados en las letras b) y f) anteriores y cuando el reemplazo o liquidación no hayan provenido de causas imputables a la administradora, el reglamento interno podrá establecer el pago de una indemnización a la administradora por los perjuicios irrogados a ésta, por un monto o porcentaje preestablecido.

Artículo 75.- Convocatoria. Las asambleas extraordinarias serán convocadas por la administradora cuando lo estime conveniente o cuando así lo solicite el Comité de Vigilancia o los aportantes que representen, a lo menos, el 10% de las cuotas emitidas con derecho a voto.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, la Superintendencia podrá convocar directamente, o a través de la administradora, a asambleas ordinarias o extraordinarias de aportantes, según sea el caso.

Las asambleas convocadas en virtud de la solicitud de aportantes, del Comité de Vigilancia o de la Superintendencia, deberán celebrarse dentro del plazo de 30 días contado desde la fecha de la respectiva solicitud.

En todo caso, podrán auto convocarse y celebrarse válidamente aquellas asambleas de aportantes a las que concurran la totalidad de las cuotas suscritas con derecho a voto, aun cuando no se hubieran cumplido las formalidades requeridas para su citación.

Artículo 76.- Quórum de constitución y acuerdo. Las asambleas se constituirán, en primera citación, salvo que la ley o el reglamento interno establezcan mayorías superiores, con la mayoría absoluta de las cuotas emitidas con derecho a voto y, en segunda citación, con las que se encuentren presentes o representadas, cualquiera sea su número.

Los acuerdos relativos a las materias de las asambleas ordinarias o extraordinarias de aportantes requerirán del voto conforme de la mayoría absoluta de las cuotas presentes o representadas con derecho a voto, salvo en aquellas materias indicadas en las letras b), e) y f) del artículo 74, las que requerirán el voto conforme de las dos terceras partes de las cuotas emitidas con derecho a voto.

No podrán someterse a votación materias que no hayan sido expresamente señaladas en la citación a asamblea extraordinaria de aportantes, salvo que así lo acordare la unanimidad de las cuotas emitidas con derecho a voto.

Artículo 77.- Aportantes que pueden participar en las Asambleas. En las asambleas podrán participar los aportantes que figuren inscritos en el Registro de Aportantes en la medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha en que haya de celebrarse la respectiva asamblea. Cada cuota dará derecho a voto en forma proporcional a los derechos sobre el patrimonio del fondo que cada una representa. No podrán existir series de cuotas preferentes sin derecho a voto o con derecho a voto limitado.

Artículo 78.- Citación a Asambleas. La citación a asamblea de aportantes se efectuará en la forma, oportunidad y por los medios que al efecto establezca la Superintendencia, mediante norma de carácter general.

El incumplimiento de las obligaciones a que se refiere el inciso anterior no afectará la validez de la citación, pero los directores de la sociedad administradora responderán de los perjuicios que causaren a los aportantes, no obstante las sanciones administrativas que la Superintendencia pueda aplicarles.

Artículo 79.- Representación y votación en Asambleas. Los aportantes podrán hacerse representar en las asambleas por medio de otra persona, aunque ésta no sea aportante. El Reglamento establecerá las formalidades que cumplirá el poder para la representación de cuotas en las asambleas y las normas para la calificación.

Las administradoras de fondos autorizadas por ley, para concurrir por los fondos que administren a las asambleas de aportantes, deberán estar representadas por sus gerentes o mandatarios especiales designados por su directorio, no pudiendo los gerentes o mandatarios actuar con poderes distintos a los conferidos por su respectiva entidad.

La Superintendencia podrá autorizar que las administradoras de fondos adopten, para fines de votación en las asambleas de aportantes, mecanismos de votación a distancia que permitan comprobar la identidad de la persona que participa en la asamblea.

Capítulo IV
De los Dividendos, Beneficios y de la Tributación

Artículo 80.- Dividendos. Los fondos de inversión distribuirán anualmente como dividendos a los aportantes, a lo menos, un 30% de los beneficios netos percibidos durante el ejercicio, debiendo quedar establecidas en el reglamento interno las demás características de sus políticas al respecto. Cualquiera disposición del reglamento interno o acuerdo de la Asamblea de Aportantes que sean contrarios a lo dispuesto en este inciso, no producirán efecto alguno, debiendo la sociedad administradora cumplir en todo caso con el referido deber de distribución. Cuando el reglamento interno establezca el deber de distribuir dividendos por un porcentaje superior al fijado en este artículo, la sociedad administradora deberá distribuirlos de acuerdo a dicho porcentaje superior.

Para estos efectos, se entenderá por beneficios netos percibidos la cantidad que resulte de restar a la suma de utilidades, intereses, dividendos y ganancias de capital efectivamente percibidos, el total de pérdidas y gastos devengados en el período.

El reparto de beneficios deberá efectuarse dentro de los 180 días siguientes al cierre del respectivo ejercicio anual, ello sin perjuicio que el fondo haya distribuido dividendos provisorios con cargo a tales resultados, cuando ello se encuentre autorizado por el reglamento interno. En este último caso, el reglamento interno podrá autorizar que en caso que el monto de los dividendos provisorios exceda el monto de los beneficios netos susceptibles de ser distribuidos de ese ejercicio, puedan imputarse a los beneficios netos percibidos de ejercicios anteriores o a utilidades que puedan no ser consideradas dentro de la definición de beneficios netos percibidos.

Los dividendos devengados que la sociedad administradora no hubiere pagado o puesto a disposición de los aportantes, dentro del plazo antes indicado, se reajustarán de acuerdo a la variación que experimente la unidad de fomento entre la fecha en que éstos se hicieron exigibles y la de su pago efectivo y devengarán intereses corrientes para operaciones reajustables por el mismo período. Dichos reajustes e intereses serán de cargo de la sociedad administradora que haya incumplido la obligación de distribución y, cuando dicho incumplimiento se haya producido por causas imputables a ella, no podrá deducirlos como gastos conforme a lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, sin que se aplique en este caso lo establecido en el artículo 21 de dicha ley.

Los dividendos serán pagados a quienes se encuentren inscritos a la medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha en que se deba efectuar el pago en el Registro de Aportantes que deberá llevar la administradora. Los dividendos deberán pagarse en dinero, salvo

que el reglamento interno establezca la opción a los aportantes de recibirlos total o parcialmente en cuotas liberadas del mismo fondo, ello representativo de una capitalización equivalente. En este último caso, se aplicará respecto de tales cuotas lo dispuesto en los artículos 17 N° 6 y 18 inciso final, de la Ley sobre Impuesto a la Renta.

Artículo 81.- Tratamiento tributario para Fondos.

1.- Fondos de inversión:

a) Los fondos de inversión y sus administradoras, estarán sujetos únicamente al régimen tributario establecido en esta ley, respecto de los beneficios, rentas y cantidades obtenidas por las inversiones del fondo.

b) La administradora estará obligada, respecto de cada fondo de inversión que administre, a llevar el registro del Fondo de Utilidades Tributables y del Fondo de Utilidades no Tributables, para los efectos señalados en la letra f) siguiente.

c) La administradora será responsable de practicar y enterar las retenciones de impuestos que correspondan por las operaciones del fondo de inversión, en conformidad a los artículos 74 y 79 de la Ley sobre Impuesto a la Renta. Asimismo, la administradora deberá informar anualmente al Servicio de Impuestos Internos, en la forma y oportunidad que éste establezca mediante resolución, los siguientes antecedentes: (i) individualización de los aportantes, con indicación de su nombre o razón social y Rol Único Tributario, el monto de sus aportes, el número de cuotas y porcentaje de participación que les corresponden en el patrimonio del fondo de inversión, los rescates y enajenaciones de cuotas que efectúen en el ejercicio respectivo, y (ii) las distribuciones que efectúen, y los créditos asociados a éstas, así como las retenciones de impuesto que practique, por cada uno de los fondos de inversión que administre. El retardo o la omisión en la entrega de la información señalada, será sancionado de acuerdo a lo prescrito en el artículo 97° Nº1 del Código Tributario.

d) Será aplicable al fondo de inversión el tratamiento tributario previsto en el inciso primero del artículo 21 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, únicamente sobre los siguientes desembolsos, operaciones o cantidades representativas de éstos:

(i) aquellos que no sean necesarios para el desarrollo de las actividades e inversiones que la ley permite efectuar al fondo de inversión.

(ii) los préstamos que los fondos de inversión efectúen a sus aportantes contribuyentes del impuesto global complementario o adicional.

(iii) el uso o goce, a cualquier título, o sin título alguno, que beneficie a uno o más aportantes, contribuyentes del impuesto

global complementario o adicional, su cónyuge o hijos no emancipados legalmente de éstos, de los bienes del activo del fondo de inversión.

(iv) la entrega de bienes del fondo de inversión en garantía de obligaciones, directas o indirectas, de los aportantes contribuyentes del impuesto global complementario o adicional.

(v) las diferencias de valor que se determinen por aplicación de la facultad de tasación ejercida conforme a la letra e) literal (i) de este artículo.

Tratándose de los desembolsos referidos en los numerales i) y v) anteriores, el pago del impuesto establecido en el inciso anterior será de responsabilidad de la administradora, sin perjuicio de su derecho a repetir contra el fondo de inversión respectivo.

Por su parte, cuando los desembolsos u operaciones señaladas en los literales (ii), (iii) y (iv) anteriores, hayan beneficiado a uno o más aportantes contribuyentes del impuesto global complementario o adicional, se aplicará sólo lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 21 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, siendo tales aportantes los responsables del pago del impuesto y no la administradora. Se entenderá que han beneficiado a un aportante, cuando hayan beneficiado a su cónyuge, a sus hijos no emancipados legalmente o a cualquiera otra persona o entidad relacionada con aquél. Cuando dichas cantidades beneficien a dos o más aportantes en forma simultánea y no sea posible determinar el monto del beneficio que corresponde a cada uno de ellos, se afectarán con la tributación indicada, en proporción al valor de las cuotas que poseen cada uno de ellos. Tratándose de las cantidades señaladas en el literal (i) y (iv), éstas se rebajarán del Fondo de Utilidades Tributables respectivo en el ejercicio en que ocurra el desembolso, o bien, la ejecución de la garantía, según corresponda.

e) El Servicio de Impuestos Internos podrá fundadamente ejercer la facultad de tasación establecida en los artículos 17, número 8, inciso 5° de la Ley sobre Impuesto a la Renta y 64 del Código Tributario, respecto de los valores asignados en las siguientes operaciones cuando resulten notoriamente superiores o inferiores, según corresponda, al valor corriente en plaza o de los que se cobren normalmente en convenciones de similar naturaleza, considerando las circunstancias en que se realiza la operación: (i) enajenación de activos del fondo de inversión efectuada a sus aportantes o a terceros y distribución de cantidades a sus aportantes efectuada en especie, con ocasión del rescate de las cuotas de un fondo de inversión, la disminución de su capital o en pago de dividendos, y (ii) aportes en especie efectuados a fondos de inversión o enajenación de bienes o activos a dichos fondos, en cuyo caso las diferencias de valor determinadas al aportante o enajenante se afectarán con los impuestos de la Ley sobre Impuesto a la Renta que resulten aplicables a la operación respectiva.

No procederá la facultad de tasar en los casos de división o fusión de fondos de inversión y se mantendrá para efectos

tributarios el valor de los activos y pasivos existentes en forma previa a dichas operaciones en los fondos de inversión fusionados o divididos. En los casos de fusión o transformación de fondos de inversión, los beneficios netos y las cantidades registradas en el Fondo de Utilidades Tributables y No Tributables se entenderán reinvertidas en el fondo absorbente, que nace con motivo de la fusión o el resultante, debiéndose mantener tal registro, aun cuando éste sea un fondo mutuo. El posterior reparto de dichas cantidades, comenzando por las más antiguas anotadas en los registros contables respectivos y considerándose para estos efectos que las recibidas con ocasión de la fusión se perciben en el momento de la fusión, se afectarán con la tributación aplicable a los aportantes de los fondos de inversión como si la fusión o transformación no se hubiere efectuado. Tratándose de la división de fondos de inversión, dichas cantidades y los créditos respectivos, se asignarán conforme se distribuya el patrimonio del fondo de inversión dividido, debiéndose mantener el registro en cada fondo.

f) En el Fondo de Utilidades Tributables referido en la letra b) anterior, se anotarán todas las rentas o cantidades recibidas de terceros por el fondo de inversión producto de las inversiones que este haya realizado, ya sea a título de participaciones sociales, dividendos u otras cantidades que se perciban, con indicación del Impuesto de Primera Categoría que haya afectado a dichas sumas, para los efectos de asignar posteriormente el crédito que corresponda. Las anotaciones se efectuarán conforme al orden cronológico de percepción de dichas cantidades.

Separadamente, en el Fondo de Utilidades No Tributables también referido en la letra b) anterior, se anotarán las cantidades recibidas de terceros que, conforme a las definiciones de la Ley sobre Impuesto a la Renta, correspondan a ingresos no constitutivos de renta o rentas exentas del Impuesto Global Complementario.

2.- Fondos mutuos:

a) Los fondos mutuos y sus administradoras, estarán sujetos únicamente al régimen tributario establecido en esta ley, respecto de los beneficios, rentas y cantidades obtenidos por las inversiones del fondo.

b) La administradora estará obligada, respecto de cada fondo mutuo que administre, a mantener un registro de los dividendos recibidos por éstos de sociedades anónimas abiertas chilenas, afectos a los Impuestos Global Complementario, y del crédito establecido en el artículo 56 N° 3 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, por el Impuesto de Primera Categoría que haya afectado a los citados dividendos. Las anotaciones se efectuarán conforme al orden cronológico de percepción de dichas cantidades.

c) La administradora será responsable de practicar y enterar las retenciones de impuestos que correspondan por las operaciones del fondo mutuo, en conformidad a los artículos 74 y 79 de la Ley sobre Impuesto a la Renta. Asimismo, la administradora deberá informar anualmente al Servicio de Impuestos Internos, en la forma y oportunidad que

éste establezca mediante resolución, los siguientes antecedentes: (i) individualización de los aportantes, con indicación de su nombre o razón social y Rol Único Tributario, el monto de sus aportes, el número de cuotas y porcentaje de participación que les corresponden en el patrimonio del fondo mutuo, los rescates y las enajenaciones de cuotas que efectúen en el ejercicio respectivo, y (ii) las distribuciones que efectúen, y los créditos asociados a éstas, así como las retenciones de impuesto que practique, por cada uno de los fondos mutuos que administre. El retardo o la omisión en la entrega de la información señalada, será sancionado de acuerdo a lo prescrito en el artículo 97° Nº1 del Código Tributario.

En los casos de fusión o transformación de fondos mutuos, los beneficios netos y las cantidades registradas conforme a la letra b) anterior se entenderán reinvertidas en el fondo absorbente, que nace con motivo de la fusión o resultante de la transformación, aun cuando éste sea un fondo de inversión, debiéndose mantener tal registro. El posterior reparto de dichas cantidades, comenzando por las más antiguas anotadas en los registros contables respectivos y considerándose para estos efectos que las recibidas con ocasión de la fusión se perciben en el momento de la fusión, se afectarán con la tributación aplicable a los aportantes de los fondos de mutuos como si la fusión o transformación no se hubiere efectuado. Tratándose de la división de fondos mutuos, dichas cantidades y los créditos respectivos, se asignarán conforme se distribuya el patrimonio del fondo mutuo dividido, debiéndose mantener el registro en cada fondo.

En lo no previsto en este artículo se aplicarán todas las disposiciones de la Ley sobre Impuesto a la Renta y del Código Tributario que se relacionan con la determinación, declaración y pago del impuesto, así como con las sanciones por la no declaración o pago oportuno de los impuestos que corresponden o por la no presentación de las declaraciones juradas o informes que se deban presentar, aplicándose al efecto el procedimiento de reclamación contemplado en el artículo 165 del Código Tributario.

Artículo 82.- Tratamiento tributario para los aportantes. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 57, 57 bis, 107, 108 y 109 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, los aportantes de fondos regidos por esta ley se sujetarán únicamente al tratamiento tributario indicado a continuación:

1.- De un fondo de inversión:

A) Contribuyentes con domicilio o residencia en Chile

i) Dividendos distribuidos por el fondo de inversión. El reparto de toda cantidad proveniente de las inversiones de un fondo de inversión, se considerará como un dividendo de acciones de sociedades anónimas constituidas en el país, afecto al impuesto global complementario o adicional, según corresponda, observándose para efectos de su imputación, lo dispuesto en el artículo 14 A), número 3, letra d) de la Ley sobre Impuestos a la Renta; con derecho al crédito por Impuesto de Primera

Categoría a que se refieren los artículos 56, número 3) o 63, de la misma ley, únicamente respecto de las rentas recibidas de terceros por el fondo de inversión y con tal que ellas se hayan afectado con el referido tributo. No constituirá renta, la parte de los dividendos que provenga de ingresos recibidos de terceros por el fondo de inversión y que tengan dicha calidad conforme a las definiciones de la Ley sobre Impuesto a la Renta. Asimismo, las rentas recibidas de terceros por el fondo de inversión que constituyan rentas exentas del impuesto global complementario conforme a las definiciones de la Ley sobre Impuesto a la Renta, conservarán en su distribución dicho carácter y se aplicará lo dispuesto en el número 3, del artículo 54 de la Ley sobre Impuesto a la Renta. Tratándose de la devolución total o parcial del capital aportado al fondo de inversión y sus reajustes, o su rescate con ocasión de la liquidación del fondo de inversión, no se afectarán con la referida tributación y dichas operaciones se sujetarán al orden de imputación establecido en el artículo 17 número 7 de la Ley sobre Impuesto a la Renta.

Para estos efectos se considerarán como utilidades financieras los beneficios netos que se determinen de conformidad a lo señalado en el inciso segundo del artículo 80 de esta ley.

En los casos del inciso anterior, será obligación de la administradora determinar si los beneficios distribuidos corresponden a cantidades tributables, no tributables o exentas según corresponda y asimismo tratándose de la devolución de capital o rescate en su caso, así como el crédito por impuesto de Primera Categoría a que se tenga derecho conforme a las reglas anteriores, poniendo a disposición de los aportantes los certificados que correspondan dentro de los plazos que permitan por parte de éstos el cumplimiento oportuno de sus obligaciones tributarias.

ii) Enajenación o rescate de cuotas del fondo de inversión. Las cuotas de participación de los fondos de inversión y su enajenación o rescate, cuando éste no ocurra con ocasión de la liquidación del fondo de inversión, e incluyendo el rescate en que parte de las cuotas son adquiridas por el mismo fondo con ocasión de una disminución de capital, tendrán el mismo tratamiento tributario que contempla la Ley sobre Impuesto a la Renta para la enajenación de acciones de sociedades anónimas constituidas en el país. El mayor valor que se obtenga en la enajenación o rescate señalado de las cuotas del fondo de inversión, corresponde a la diferencia entre el valor de adquisición de la cuota y el valor de enajenación o rescate de la misma, determinado conforme a lo establecido en los artículos 108 y 109 de la Ley Sobre Impuesto a la Renta, según corresponda. Los contribuyentes que no se encuentren obligados a declarar sus rentas efectivas según contabilidad, se encontrarán exentos del Impuesto de Primera Categoría de la Ley sobre Impuesto a la Renta, sobre el mayor valor que obtengan en la enajenación o rescate de las cuotas del fondo de inversión. Para los efectos de este literal, se aplicará lo dispuesto en el inciso final del artículo 80 de esta ley.

B) Contribuyentes sin domicilio ni residencia en Chile.

i) La remesa, distribución, pago, abono en cuenta o puesta disposición de toda cantidad proveniente de las inversiones de un fondo de inversión a estos contribuyentes, estará afecta a un impuesto único a la renta del 10%, sin derecho al crédito por Impuesto de Primera Categoría, el cual, sin embargo, igualmente se rebajará del registro respectivo. No obstante lo anterior, tratándose de la distribución de dividendos, cuando éstos correspondan a ingresos no constitutivos de renta o rentas exentas del impuesto adicional recibidos de terceros por el fondo de inversión y sujetos al orden de imputación establecido en el artículo 14 letra A) número 3 letra d) de la Ley sobre Impuesto a la Renta, quedarán liberados de la referida tributación. Tratándose de la devolución total o parcial del capital aportado al fondo de inversión y sus reajustes, o su rescate con ocasión de la liquidación del fondo de inversión, no se afectarán con la referida tributación y dichas operaciones se sujetarán al orden de imputación establecido en el artículo 17 número 7 de la Ley sobre Impuesto a la Renta.

Para estos efectos se considerarán como utilidades financieras los beneficios netos que se determinen de conformidad a lo señalado en el inciso segundo del artículo 80 de esta ley.

ii) Tratándose de la enajenación de las cuotas del fondo de inversión o su rescate, cuando éste no ocurra con ocasión de la liquidación del fondo de inversión, el mayor valor obtenido estará también afecto al impuesto único del literal i) anterior y dicho mayor valor corresponderá a la diferencia entre el valor de adquisición de la cuota y el valor de enajenación o rescate de la misma, determinado conforme a lo establecido en los artículos 108 y 109 de la Ley Sobre Impuesto a la Renta, según corresponda. Para los efectos de este literal, se aplicará lo dispuesto en el inciso final del artículo 80 de esta ley.

Tratándose de cantidades distribuidas por el fondo de inversión o del mayor valor en el rescate de las cuotas del mismo, el impuesto único señalado precedentemente será retenido por la sociedad administradora cuando dichas cantidades sean remesadas al exterior, se distribuyan, se paguen, se abonen en cuenta o se pongan a disposición. Cuando se trate de la enajenación de las cuotas del fondo, el adquirente deberá retener este impuesto en la misma oportunidad señalada, retención que se practicará con una tasa provisional de 5% sobre el precio de enajenación sin deducción alguna, salvo que pueda determinarse el mayor valor afecto al impuesto único de esta letra, en cuyo caso, dicha retención se practicará con la tasa del 10%.

Las retenciones practicadas conforme a esta letra se enterarán en arcas fiscales en el plazo establecido en la primera parte del artículo 79 de la Ley sobre Impuesto a la Renta. Procederá además lo dispuesto en el artículo 83 y en lo que fuere aplicable el artículo 74 N° 4 de la misma ley.

iii) Sin perjuicio de su registro en el Fondo de Utilidades Tributables según se indica en el inciso siguiente, no se gravará con el impuesto único de esta letra la distribución de los beneficios netos que se determinen durante el año comercial en que el fondo de inversión cumple

con las siguientes condiciones copulativas a los contribuyentes sin domicilio ni residencia en Chile:

a) que en el año comercial respectivo, al menos durante 300 días, continuos o discontinuos, el 80% de la cartera del fondo de inversión esté conformada por la inversión en:

1.- instrumentos, títulos o valores emitidos en el extranjero por personas sin domicilio ni residencia en Chile o en certificados que sean representativos de tales instrumentos, títulos o valores.

2.- bienes situados en el extranjero o en instrumentos, títulos, valores o certificados que sean representativos de tales bienes.

3.- contratos de derivados y otros de similar naturaleza que cumplan los requisitos que establezca la Superintendencia mediante norma de carácter general.

Tratándose de los instrumentos, títulos, valores, certificados o contratos a que se refieren los números 1 y 3 anteriores, ellos no podrán tener como activos subyacentes o referirse a bienes situados o a actividades desarrolladas en Chile, ni ser representativos de títulos o valores emitidos en el país, y

b) que la política de inversión fijada en su reglamento interno sea coherente con la letra a) de este literal.

Los beneficios netos que se determinen durante el año comercial en que el fondo de inversión cumpla con las condiciones copulativas señaladas, se anotarán separadamente en el Fondo de Utilidades Tributables y se sujetarán al orden de imputación establecido en el literal i) anterior, pero el crédito establecido en el artículo 63 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, en la parte que corresponda a la distribución de beneficios no gravados conforme a este literal a contribuyentes sin domicilio ni residencia en Chile, no dará derecho a su imputación contra impuesto alguno, ni a su devolución, debiendo rebajarse, en dicha proporción, del registro establecido en el artículo 14 del referido texto legal.

Para los efectos de este literal, se entenderá que se efectúa una distribución de beneficios netos, en los mismos casos y bajo las mismas condiciones descritas en el literal i) anterior.

Cuando el fondo no diera cumplimiento durante el año comercial respectivo a las condiciones copulativas señaladas, la distribución de los beneficios netos determinados en dicho año al fondo de inversión, sea que se distribuyan en tal período o en otros posteriores, quedará sujeto a la tributación establecida en el literal i) anterior cuando sea distribuida a contribuyentes sin domicilio ni residencia en Chile.

Tampoco se gravará con el impuesto único de esta letra, el mayor valor obtenido por contribuyentes sin domicilio ni

residencia en Chile en la enajenación de cuotas o su rescate, salvo que éstas se efectuaren con ocasión de la liquidación del fondo de inversión, siempre y cuando éstos cumplan los requisitos copulativos señalados, en el año comercial en que ocurre la enajenación y en los 2 años comerciales inmediatamente anteriores a éste. En caso que el fondo tuviera una existencia inferior a dicho plazo, deberá cumplir con los requisitos copulativos durante cada año comercial en que haya existido, salvo que corresponda al mayor valor de cuotas de un fondo nacido con ocasión de la división de otro fondo o que provengan de la fusión de dos o más de ellos, en cuyo caso será necesario además que el fondo dividido o el o los fondos fusionados en su caso, cumplan con los requisitos copulativos señalados, de forma tal que en el año de la enajenación y en los dos años comerciales inmediatamente anteriores se cumpla con las condiciones copulativas señaladas, siempre que los fondos divididos o fusionados hayan tenido existencia durante esos dos años. Cuando el fondo no diera cumplimiento durante los años comerciales respectivos a las condiciones copulativas señaladas, el mayor valor se sujetará a la tributación establecida en el literal i) anterior.

Tratándose de contribuyentes sin residencia ni domicilio en el país que no fueren personas naturales, no podrán gozar del tratamiento tributario establecido en esta letra, en caso que dichos contribuyentes tengan, en forma directa o indirecta, como socio, accionista, titular o beneficiario de su capital o de sus utilidades, a algún residente o domiciliado en Chile con un 5% o más de participación o beneficio en el capital o en las utilidades del mismo. En este caso, dichos contribuyentes se gravarán con el Impuesto Adicional de la Ley sobre Impuesto a la Renta con derecho a deducir el crédito establecido en el artículo 63 de la referida ley, conforme a las reglas contenidas en la letra A) anterior, literales i) y ii) y por las rentas allí indicadas, aplicándose las normas sobre retención, declaración y pago de dicho impuesto contenidas en los artículos 74 número 4, 79 y 83 de la Ley sobre Impuesto a la Renta. La administradora deberá presentar anualmente una declaración al Servicio de Impuestos Internos, en la forma y plazo que éste establezca mediante resolución, en la cual deberá individualizar a los contribuyentes sin domicilio ni residencia en el país, declarando que no cuentan con socios, accionistas, titulares o beneficiarios en Chile, con el porcentaje señalado precedentemente, declaración sin la cual se presumirá que no cumplen con el requisito señalado, no pudiendo, por tanto, gozar de la liberación referida.

Las administradoras de fondos de inversión deberán anualmente informar al Servicio de Impuestos Internos, sobre el cumplimiento de los requisitos establecidos en este artículo, en la forma y plazo que fije dicho Servicio mediante resolución. El retardo o la omisión en la entrega de la información señalada, será sancionado de acuerdo a lo prescrito en el artículo 97°, Nº 1 del Código Tributario.

En lo no previsto en este artículo, se aplicarán todas las disposiciones de la Ley sobre Impuesto a la Renta y del Código Tributario, que se relacionan con la determinación, declaración y pago del impuesto, así como con las sanciones por la no declaración o pago oportuno de los impuestos que corresponden o por la no presentación de las declaraciones juradas o informes que deban presentar, aplicándose al efecto

el procedimiento de reclamación contemplado en el artículo 165 del Código Tributario.

2.- De un fondo mutuo:

A) Contribuyentes con domicilio o residencia en Chile.

i) Dividendos distribuidos por el fondo mutuo. El reparto de toda cantidad proveniente de las inversiones de un fondo mutuo se considerará como un dividendo de acciones de sociedades anónimas constituidas en el país, afecto al impuesto global complementario o adicional, según corresponda, el cual se imputará en primer término a los dividendos recibidos de sociedades anónimas abiertas anotados en el registro establecido en la letra b), del N° 2, del artículo 81 de esta ley, según su antigüedad y comenzando por las más antiguas, otorgándose el crédito establecido en los artículos 56 N° 3 o 63 de la Ley sobre Impuesto a la Renta que haya afectado a los citados dividendos. Tratándose de la devolución total o parcial del capital aportado al fondo mutuo y sus reajustes, no se afectarán con la referida tributación, pero éste se entenderá repartido sólo una vez que se haya distribuido el total de beneficios netos del fondo mutuo, según se define en el artículo 80 de esta ley.

Será obligación de la administradora informar el crédito a que tengan derecho, poniendo a disposición de los aportantes los certificados que correspondan dentro de los plazos que permitan por parte de éstos el cumplimiento oportuno de sus obligaciones tributarias.

ii) Enajenación o rescate de cuotas del fondo mutuo. Conforme a lo señalado en el inciso primero de este artículo, las cuotas de participación de los fondos mutuos y su enajenación o rescate, se sujetarán al tratamiento tributario establecido en los artículos 57, 57 bis, 107, 108 y 109 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, según corresponda. El mayor valor que se obtenga en la enajenación o rescate señalado de las cuotas del fondo mutuo, corresponde a la diferencia entre el valor de adquisición de la cuota y el valor de enajenación o rescate de la misma, determinado conforme a lo establecido en los artículos 108 y 109 de la Ley Sobre Impuesto a la Renta, según corresponda, considerándose como una renta del N° 2, del artículo 20 de la referida ley. Para los efectos de este literal, se aplicará lo dispuesto en el inciso final del artículo 80 de esta ley.

B) Contribuyentes sin domicilio ni residencia en Chile.

i) Dividendos distribuidos por el fondo mutuo. La remesa, distribución, pago, abono en cuenta, o puesta a disposición de toda cantidad proveniente de las inversiones del fondo mutuo a estos contribuyentes, estará afecta a un impuesto único a la renta del 10%, sin derecho a crédito por Impuesto de Primera Categoría, el cual, sin embargo, igualmente se rebajará del registro establecido en la letra b), del N° 2, del artículo 81 de esta ley. Se imputarán en primer término al registro establecido, según la antigüedad en que tales cantidades hayan sido

percibidas, comenzando por las más antiguas. Tratándose de la devolución total o parcial del capital aportado al fondo mutuo y sus reajustes, no se afectará con la referida tributación y dicho capital se entenderá repartido sólo una vez que se haya distribuido el total de beneficios netos del fondo mutuo, según se define en el artículo 80 de esta ley.

Para estos efectos se considerarán como utilidades financieras los beneficios netos que se determinen de conformidad a lo señalado en el inciso segundo del artículo 80 de esta ley.

ii) Enajenación o rescate de cuotas del fondo mutuo. Tratándose de la enajenación de las cuotas de participación de fondos mutuos o su rescate, el mayor valor obtenido estará también afecto al impuesto único señalado en el literal i) anterior, siendo aplicables las normas de determinación de dicho mayor valor contenidas en el literal ii) de la letra B) del número 1.- de este artículo y, asimismo, las normas del inciso segundo y tercero de dicho literal, respecto de la responsabilidad de retención del impuesto único por la administradora. Se aplicará también para los efectos de este literal, lo dispuesto en el inciso final del artículo 80 de esta ley.

iii) Será también aplicable a los contribuyentes sin domicilio y residencia en Chile aportantes en fondos mutuos, la liberación a los dividendos y mayor valor del impuesto único, establecida en el literal iii), letra B) del número 1.- de este artículo, siendo aplicable los mismos requisitos y reglas allí establecidos para los fondos de inversión, esto es, incisos primero a tercero e inciso quinto de dicho literal iii). Asimismo, son aplicables las reglas de tributación contenidas en el inciso cuarto de dicho literal referidas al caso en que se dejen de cumplir por el fondo los requisitos copulativos señalados y también, los incisos sexto y séptimos, referidos a la prohibición de gozar de la liberación del impuesto único, aplicable a los aportantes sin domicilio ni residencia en Chile, que no sean personas naturales, en los cuales participan directa o indirectamente en un 5% o más algún residente o domiciliado en Chile.

En lo no previsto en este artículo, se aplicarán todas las disposiciones de la Ley sobre Impuesto a la Renta y del Código Tributario, que se relacionan con la determinación, declaración y pago del impuesto, así como con las sanciones por la no declaración o pago oportuno de los impuestos que corresponden o por la no presentación de las declaraciones juradas o informes que deban presentar, aplicándose al efecto el procedimiento de reclamación contemplado en el artículo 165 del Código Tributario.

Artículo 83.- Remuneraciones de la administradora. Las remuneraciones que las sociedades administradoras cobren por la gestión de los recursos aportados al amparo de la ley Nº 19.281, estarán exentas del Impuesto al Valor Agregado contenido en el decreto ley Nº 825, de 1974.

Por su parte, las remuneraciones por los servicios de administración que las sociedades administradoras cobren por la gestión del respectivo fondo, en aquella parte que corresponda a cuotas de

propiedad de inversionistas sin domicilio ni residencia en Chile sea o no que pertenezcan a una serie que las identifique como tales, estarán exentas del Impuesto al Valor Agregado establecido en el decreto ley Nº 825, de 1974. No obstante, en este caso, la administradora conservará su derecho al uso como crédito fiscal del referido impuesto soportado o pagado en las adquisiciones de bienes o servicios utilizados para llevar a cabo dicha gestión, sin que resulten aplicables las disposiciones de esa ley o de su reglamento que obligan a la determinación de un crédito fiscal proporcional cuando existan operaciones exentas o no gravadas.

Para aquellos períodos mensuales en que aportantes con y sin domicilio o residencia en Chile posean cuotas de una misma serie, la administradora cobrará su remuneración para esa serie afectándola con Impuesto al Valor Agregado con respecto a la totalidad de los activos administrados en ésta. Aquella parte del Impuesto al Valor Agregado enterado respecto a la remuneración exenta de dicho impuesto conforme a lo señalado en el inciso anterior, constituirá para la administradora crédito fiscal de dicho impuesto correspondiente al periodo en que hubiere efectivamente restituido dicha suma a los aportantes sin domicilio ni residencia en Chile. Para determinar el monto exento del Impuesto al Valor Agregado, la remuneración total cobrada por la administradora en el período respectivo, deberá expresarse en su valor equivalente a la remuneración diaria y multiplicarse por el número de días en que los aportantes sin domicilio ni residencia en Chile poseyeron las cuotas del fondo que se enajenan, en la proporción que tales cuotas tienen en el total del patrimonio administrado durante dicho periodo.

El período dentro del cual la administradora deberá restituir el Impuesto al Valor Agregado recargado a los aportantes sin domicilio ni residencia en Chile, será hasta el mes de enero del año siguiente al cual corresponda la remuneración en que dicho impuesto fue recargado. En caso de no restituir dentro del plazo señalado, perderá la administradora el derecho al crédito fiscal establecido en el inciso anterior.

La administradora deberá presentar, en la forma y plazo que establezca el Servicio de Impuestos Internos mediante resolución, una declaración anual informando el monto y cálculo de la remuneración exenta, la individualización del beneficiario del servicio, y el período que comprende el cobro de la remuneración respecto de los servicios exentos de conformidad a este artículo. El retardo o la omisión en la entrega de la información señalada, será sancionado de acuerdo a lo prescrito en el artículo 97°, Nº1 del Código Tributario, aplicándose al efecto el procedimiento de reclamación contemplado en el artículo 165 del mismo Código.

Capítulo V
De los Fondos de Inversión Privados

Artículo 84.- Definición. Los fondos de inversión que tengan menos de 50 partícipes que no sean integrantes de una misma familia, no quedarán sometidos a la fiscalización de la Superintendencia y se entenderán para los efectos de esta ley como fondos privados.

Artículo 85.- Normativa aplicable. Salvo disposición expresa en contrario, los fondos privados se regirán exclusivamente por las disposiciones contenidas en sus reglamentos internos y por las normas de este capítulo, no quedando sujetos a las normas de los capítulos precedentes, con excepción de lo dispuesto en los artículos 57 y 80. Asimismo, estos fondos privados no podrán invertir en aquellos activos que el Reglamento haya expresamente prohibido para la inversión de los recursos de este tipo de fondos.

Artículo 86.- Tratamiento tributario.

A) Tratamiento tributario para fondos de inversión privados. Se les aplicarán las disposiciones contenidas en el artículo 81 de esta ley para fondos de inversión, debiendo, además, la administradora solicitar la incorporación en el Rol Único Tributario a cada fondo que administre, acompañando el reglamento interno de cada uno de ellos.

Los intereses percibidos o devengados por el fondo, originados en préstamos efectuados con todo o parte de sus recursos a personas relacionadas con alguno de sus aportantes, en la parte que excedan de lo pactado en convenciones de similar naturaleza considerando las circunstancias en que se realiza la operación, se gravarán, sin deducción alguna, con la tasa del Impuesto de Primera Categoría establecida en el artículo 20 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, impuesto que será de cargo de la administradora del fondo, sin perjuicio de su derecho a repetir contra éste. El Servicio de Impuestos Internos deberá determinar en forma fundada la parte excesiva del interés pactado, no pudiendo ejercer dicha facultad si la tasa de interés convenida es igual o inferior a la tasa de interés corriente vigente en el período y al tipo de operación de que se trate, aumentada un 10%.

B) Tratamiento tributario para los aportantes. Sean éstos domiciliados o residentes en el país o en el extranjero, tributarán conforme a las reglas contenidas en la letra A), N° 1.- del artículo 82 de esta ley, respecto de las rentas allí señaladas. Tratándose de los aportantes sin domicilio ni residencia en el país, se gravarán con el impuesto adicional de la Ley sobre Impuesto a la Renta, considerándose como contribuyentes del N° 2, del artículo 58 de la citada ley, aplicándose las normas sobre retención, declaración y pago del impuesto referido contenidas en los artículos 74 número 4, 79 y 83 de la misma, aplicando al efecto el crédito por impuesto de primera categoría establecido en el artículo 63 de ésta, cuando corresponda.

Artículo 87.- Auditoría. Los fondos serán auditados anualmente por empresas de auditoría externa de aquellas inscritas en el registro que al efecto lleva la Superintendencia.

Artículo 88.- Operaciones con otros fondos. Los fondos a que se refiere este Título, no podrán realizar transacciones u operaciones con aquellos regulados por los Títulos anteriores, salvo que sean administrados por sociedades que no sean relacionadas entre sí.

Artículo 89.- Aplicabilidad de normas, adecuación del reglamento y estatutos. Cuando dejen de cumplir la condición establecida en el artículo 84 anterior, los fondos privados y sus administradoras quedarán sujetos a todas las disposiciones contenidas en la presente ley aplicables a los fondos y administradoras fiscalizadas por la Superintendencia, debiendo comunicar este hecho a dicha entidad al día siguiente hábil de ocurrido éste.

El reglamento interno del fondo deberá adecuarse dentro de los 60 días contados desde ocurrida dicha circunstancia. En el mismo plazo indicado y cuando el fondo fuese administrado por una sociedad anónima cerrada, ésta deberá ajustar sus estatutos para efectos de transformarse en una sociedad anónima especial y solicitar a la Superintendencia la autorización de existencia señalada en los artículos 3° y 4° del artículo primero de la presente ley.

Artículo 90.- La administradora. Los fondos privados podrán ser administrados por las administradoras de fondos fiscalizados por la Superintendencia a que se refiere esta ley, o por sociedades anónimas cerradas.

En el nombre de esas sociedades anónimas cerradas y en cualquier documentación que emitan, no podrán utilizar la expresión “administradora general de fondos”.

Artículo 91.- Máximo de cuotas en manos de la administradora. Después de transcurrido un año contado desde la creación del fondo privado, ni la administradora ni sus personas relacionadas podrán poseer, en conjunto, cuotas que representen más de un 25% del patrimonio del fondo privado por ella administrado.

Artículo 92.- Mínimo de aportantes. Después de transcurrido un año contado desde la creación del fondo, éste deberá tener al menos dos aportantes no relacionados entre sí, no pudiendo ninguno de ellos tener menos de un 10% de las cuotas suscritas del fondo privado. Esta última restricción del 10% no aplicará en caso que el fondo privado tenga 5 o más aportantes no relacionados entre sí.

En caso que el Servicio de Impuestos Internos detectare que un fondo de inversión privado infringe lo dispuesto en el artículo 91 y lo señalado en el inciso precedente, notificará del hecho a la administradora del fondo en cuestión, en cuyo caso ésta dispondrá de un plazo de 6 meses contado desde la respectiva notificación para regularizar su situación. Si ello no ocurriere, el fondo se considerará sociedad anónima y sus aportantes como accionistas de la misma para los efectos de la Ley sobre Impuesto a la Renta, respecto de los beneficios y utilidades que obtengan a contar del 1 de enero del año siguiente a aquel en que venza el plazo de seis meses señalado, tributando el respectivo fondo de inversión privado, en consecuencia, en la misma forma y oportunidad que establece la ley respecto de esas sociedades.

Artículo 93.- No Oferta Pública. No podrá hacerse oferta pública de las cuotas de fondos privados ni se podrá hacer publicidad

o promocionar públicamente el servicio de administración de fondos privados. Tampoco se podrá promocionar públicamente, información respecto de la rentabilidad o inversiones que se obtengan o realicen este tipo de fondos,

En cualquier tipo de comunicación o información que emitan administradoras de fondos privados, deberá necesariamente señalarse que se trata de fondos no regulados y no fiscalizados por la Superintendencia de Valores y Seguros.

Artículo 94.- Información a la Superintendencia. La administradora deberá presentar a la Superintendencia, en la forma y plazos que ésta determine, la siguiente información referida a los fondos de inversión privados que administre:

a) Identificación del fondo y de los partícipes de éste.

b) Monto de los aportes.

c) Valor de los activos.

La Superintendencia podrá requerir toda la demás información que sea necesaria para determinar si los fondos privados cumplen las condiciones que los hacen regirse por las normas de los fondos fiscalizados, si dan cumplimiento a las obligaciones del artículo 93 o para supervisar las operaciones que éstos hacen con aquellos, esto último, en caso de fondos administrados por la misma administradora o los relacionados a ésta.

TÍTULO II
DE LA GESTIÓN INDIVIDUAL DE RECURSOS

Artículo 95.- La administración de cartera. La administración de recursos de personas y entidades para su inversión en contratos, instrumentos o productos financieros, que se realice de manera habitual para 50 o más entidades que no sean integrantes de una misma familia, en adelante “administración de cartera”, se regirá por lo dispuesto en este Título y por las cláusulas contenidas en el contrato de administración, en adelante “el mandato”, que deberán suscribir el administrador de los recursos, en adelante “el mandatario”, y el propietario de los recursos que serán gestionados, en adelante “el mandante”.

Artículo 96.- Normativa aplicable. En aquellas materias no contenidas expresamente en esta ley o delegadas por ésta a la Superintendencia, serán aplicables a la administración de carteras las reglas generales que rigen el mandato comercial.

Artículo 97.- Mandatarios sujetos a fiscalización. Quedarán sometidas a la fiscalización de la Superintendencia, las personas o entidades que se dediquen habitualmente a la administración de carteras de terceros, en la medida que se cumpla alguno de los siguientes requisitos:

a) el número de mandantes cuyas carteras están siendo administradas sean más de 500.

b) el mandatario que administre 50 o más carteras de terceros que no sean integrantes de una misma familia, por un monto total superior a 10.000 unidades de fomento.

Para efectos de la fiscalización de mandatarios y de las carteras administradas, la Superintendencia dispondrá de todas las facultades que le confiere su ley orgánica.

La Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras fiscalizará el cumplimiento de las disposiciones legales y normativas contenidas en el presente título, respecto de los bancos e instituciones financieras cuando actúen como mandatarios, adoptando las normas que al efecto emita la Superintendencia.

Artículo 98.- Administradoras de Carteras, su registro y requisitos mínimos. Sólo podrán administrar carteras de terceros, de aquellas sometidas a la fiscalización de la Superintendencia, las administradoras generales de fondos a que se refiere el Título I de esta ley, y las personas y entidades que se inscriban en el Registro de Administradoras de Carteras que mantendrá la Superintendencia, en adelante, “el Registro”. Con excepción de la obligación de inscripción en el Registro, las administradoras generales de fondos deberán cumplir las demás disposiciones requeridas por el presente Título para administrar carteras individuales.

Sus socios, directores, gerentes, administradores y ejecutivos principales deberán contar con la idoneidad y los conocimientos suficientes sobre gestión individual de recursos. La Superintendencia mediante norma de carácter general, establecerá los parámetros y estándares dentro de los cuales se presumirá que se cumple con tal requisito de idoneidad y conocimientos, los que deberán distinguir las distintas funciones dentro del mandatario.

La Superintendencia podrá fiscalizar el cumplimiento de dichos requisitos de idoneidad. En caso que concluyere que existe incumplimiento, deberá consignarlo en una resolución fundada, de carácter reservado, la que propondrá las medidas que permitan cumplir con dicho requisito.

En contra de dicha resolución podrán interponerse los recursos indicados en los artículos 45 y 46 del decreto ley Nº 3.538, de 1980. Una vez vencidos los plazos para interponerlos, el mandatario deberá adoptar las medidas conducentes a superar la falta de idoneidad detectada, dentro del plazo que para ello establezca la resolución, y en caso contrario, servirá de antecedente para determinar la responsabilidad que le cupiere, de comprobarse que existe relación con los perjuicios que se produzcan con posterioridad.

Para poder actuar como administradores de cartera, las personas y entidades inscritas en el Registro deberán acreditar a satisfacción de la Superintendencia, de acuerdo a lo que ésta establezca por norma de carácter general, que permanentemente cuentan con un patrimonio de al menos 10.000 unidades de fomento y con garantías, constituidas en la forma que establezca la Superintendencia, en favor de los mandantes.

Artículo 99.- Garantía. El monto de la garantía que deban constituir los mandatarios será determinado de conformidad con lo establecido en el artículo 13.

Artículo 100.- Registro y contabilización de activos. Los recursos de terceros mantenidos por el mandatario en dinero y moneda extranjera, y los instrumentos, bienes y contratos de propiedad de terceros que estén a nombre del mandatario, se registrarán y contabilizarán en forma separada de las operaciones realizadas por éste con sus recursos propios y de las operaciones de otros mandantes, con la individualización completa de el o los mandantes correspondientes. Ese registro acreditará la propiedad de esos recursos, instrumentos, bienes y contratos, y no podrán decretarse embargos y medidas precautorias sobre todo o parte de aquellos de propiedad de terceros, salvo por obligaciones personales del mandante respectivo y sólo sobre los de la propiedad de éste.

Para efectos del ejercicio del derecho a voto por los instrumentos de terceros mantenidos a nombre propio por el mandatario, se estará a lo establecido en el artículo 179 de la ley N° 18.045.

Artículo 101.- El Mandato. El mandato de administración de cartera, deberá constar por escrito y en soporte papel y ser debidamente suscrito por las partes, o en documento electrónico que cumpla con formalidades equivalentes, de acuerdo a lo que establezca la Superintendencia mediante norma de carácter general.

Cuando se trate de administración de cartera sujeta a la fiscalización de la Superintendencia, será ésta la que determine el contenido mínimo del contrato de administración.

Artículo 102.- Responsabilidad del mandatario. El mandatario deberá efectuar todas las gestiones que sean necesarias, con el cuidado y la diligencia que los hombres emplean ordinariamente en sus propios negocios, para cautelar la obtención de una adecuada combinación de rentabilidad y seguridad de las inversiones de cada mandante, de acuerdo a las instrucciones específicas entregadas en el mandato, el cual podrá permitir un manejo discrecional de la cartera entregada en administración. La administración de cartera, debe realizarse atendiendo exclusivamente a la mejor conveniencia de cada mandante y a que todas y cada una de las operaciones de adquisición y enajenación que efectúe por cuenta del mismo, se haga en el mejor interés de éste.

Será deber del mandatario, explicitar, en el momento que ocurran, los conflictos de interés que surjan en el ejercicio del mandato y de resolverlos siempre en el mejor beneficio de cada mandante.

El mandatario será siempre responsable de los perjuicios que ocasione a los mandantes por sus actuaciones u omisiones negligentes o dolosas.

Artículo 103.- Infracciones a esta ley. Son contrarias a la presente ley, las siguientes actuaciones u omisiones de parte del mandatario:

a) el cobro de cualquier costo no señalado expresamente en el mandato.

b) el cobro de cualquier servicio prestado por personas relacionadas al mandatario, sin el consentimiento expreso del mandante.

c) la compra de instrumentos, bienes y contratos de mandantes para la cuenta del mandatario, a menos que así lo autorice expresamente el mandante.

d) la venta de instrumentos, bienes y contratos de propiedad del mandatario para la cuenta de mandantes, a menos que así lo autorice expresamente el mandante.

Artículo segundo.- Introdúcense en la ley N° 19.281, que establece normas sobre arrendamiento de viviendas con promesa de compraventa, las siguientes modificaciones:

a) Reemplázase el inciso final del artículo 1°, por el siguiente:

“Estas cuentas se denominarán Cuentas de Ahorro para Arrendamiento de Viviendas con Promesa de Compraventa, en adelante “las cuentas”, y los recursos depositados en ellas deberán ser mantenidos de manera separada e independiente del patrimonio de las instituciones, e invertidos en cuotas de fondos fiscalizados por la Superintendencia de Valores y Seguros que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 54 de esta ley. En el evento que los fondos en que se invirtió dejen de cumplir tales requisitos, la institución deberá enajenar o rescatar las cuotas respectivas y reinvertir los recursos en otros fondos que cumplan esos requisitos en un plazo no superior a 30 días de sucedido tal evento. Dichas cuotas tendrán el carácter de inembargables, salvo para lo señalado en el artículo 10 con relación al cese de la inembargabilidad.”.

b) Reemplázase el artículo 3°, por el siguiente:

“Artículo 3°.- Con cargo a los recursos aportados mensualmente en la cuenta, las instituciones pagarán la renta de arrendamiento al arrendador promitente vendedor y descontarán la comisión a que se refiere el artículo 5°. El saldo de dicho aporte formará parte de los recursos disponibles para el pago del precio de la compraventa prometida celebrar.

Las instituciones deberán llevar un registro en el cual se indicará el número de cuotas de participación en los fondos mencionados en el inciso anterior, que le corresponde a cada uno de los titulares de las cuentas, en los términos que disponga el reglamento de esta ley.

En caso de disolución de la institución que mantenga las cuentas, sea por revocación de su autorización de existencia o por cualquiera otra causa, el liquidador deberá traspasar las cuentas a otra institución de las mencionadas en el artículo 1°. El traspaso comprenderá los recursos aportados y los contratos de ahorro metódico.”.

c) Reemplázase el inciso segundo del artículo 5°, por el siguiente:

“La comisión será establecida libremente por cada institución. Estas comisiones estarán exentas del Impuesto al Valor Agregado y deberán ser informadas al público y al organismo fiscalizador que tenga la institución, en la forma que señale el reglamento. Las modificaciones de esta comisión podrán efectuarse dos veces en el año y regirán 90 días después de comunicadas al respectivo organismo fiscalizador, plazo dentro del cual el titular de la cuenta podrá cambiarse de institución o requerir el cambio del o los fondos en que está invertido el aporte, cambios que no se computarán para los efectos de lo dispuesto en el artículo 2º.”.

d) Reemplázase el artículo 30, por el siguiente:

“Artículo 30.- La sociedad inmobiliaria sólo podrá enajenar la vivienda arrendada con promesa de compraventa, siempre que ceda conjuntamente el contrato de arrendamiento con promesa de compraventa, a otra sociedad del mismo tipo, a un fondo fiscalizado por la Superintendencia de Valores y Seguros, a una sociedad securitizadora del Título XVIII de la ley Nº 18.045, o a las personas que esa Superintendencia haya declarado por norma de carácter general que pueden adquirirlos. El adquirente a cualquier título de la vivienda, como cesionario del contrato de arrendamiento con promesa de compraventa, tendrá iguales obligaciones, derechos y facultades que el cedente y estará obligado a cumplir el contrato de arrendamiento con promesa de compraventa en la forma pactada. Las partes podrán convenir que la administración del contrato de arrendamiento con promesa de compraventa la mantenga el cedente.

Los fondos fiscalizados por la Superintendencia y las sociedades securitizadoras, para los efectos de lo previsto en el inciso segundo del artículo 17 de esta ley, estarán facultados para adquirir los activos a que se refiere este artículo. La Superintendencia de Valores y Seguros reglamentará, mediante circulares, las condiciones que deberán cumplirse en estas ventas y cesiones.

La cesión de los contratos de arrendamiento con promesa de compraventa, por parte del arrendador promitente vendedor, como, asimismo, la cesión, por el arrendatario promitente comprador, de sus derechos derivados del contrato de arrendamiento con promesa de compraventa, se efectuarán mediante endoso. Este se colocará a continuación, al margen o al dorso del título, con indicación del nombre del cedente y del cesionario, debiendo las firmas de las partes estar autorizadas por notario y anotarse la respectiva cesión al margen de la inscripción del contrato de arrendamiento con promesa de compraventa.”.

e) Sustitúyese el inciso segundo del artículo 44, por el siguiente:

“Los recursos de este fondo se depositarán en la cuenta a que se refiere el artículo 1º y se invertirán en los fondos fiscalizados por la Superintendencia de Valores y Seguros a que se refiere el artículo 1º, e integrarán los recursos disponibles a que alude el inciso primero del artículo 3º.”.

f) Sustitúyese el Título VI y su articulado, por el siguiente:

“TITULO VI
De los Requisitos de los Fondos

Artículo 54.- Los recursos aportados y disponibles señalados en el inciso final del artículo 1° e inciso primero del artículo 3°, respectivamente, y el fondo de garantía del artículo 44, podrán ser invertidos en cuotas de fondos mutuos y en cuotas de fondos de inversión, en este último caso, en la medida que los fondos estén aprobados por la Comisión Clasificadora de Riesgo del Título XI del decreto ley N° 3.500, de 1980, y que permita el rescate total y permanente de sus cuotas, y que éstas sean pagadas en un plazo inferior o igual a 30 días.”.

Artículo tercero.- Introdúcense en la Ley sobre Impuesto a la Renta, contenida en el artículo 1°, del decreto ley N° 824, de 1974, las siguientes modificaciones:

1) Elimínase del inciso tercero del artículo 11 la expresión: “, las cuotas de fondos de inversión, regidos por la ley Nº 18.815, y” y la palabra “ambos”.

2) Elimínase en el inciso sexto, del número 8, del artículo 17, la frase “Se entenderá que tienen presencia bursátil aquellas acciones que cumplan con las normas para ser objeto de inversión de los fondos mutuos, de acuerdo a lo establecido en el Nº 1 del artículo 13 del decreto ley Nº 1.328, de 1976.”.

3) En el artículo 20 introdúcense las siguientes modificaciones:

a) En el número 2, reemplácese el inciso tercero, por el siguiente: "Los intereses a que se refiere la letra g), se considerarán devengados en cada ejercicio, a partir de la fecha que corresponda a su colocación y así sucesivamente hasta su pago. El impuesto se aplicará a los titulares de los referidos instrumentos, y gravará los intereses que hayan devengado en el año calendario o comercial respectivo, desde la fecha de su colocación o adquisición hasta el día de su enajenación o rescate, ambas inclusive. El interés devengado se determinará de la siguiente forma: (i) multiplicando la tasa de interés fiscal anual del instrumento determinada conforme al artículo 104, por el capital del mismo, a su valor nominal o par; (ii) el resultado obtenido conforme al literal anterior se divide por 365, y (iii) finalmente, se multiplicará tal resultado por el número de días del año calendario o comercial en que el título haya estado en poder del contribuyente titular.".

b) Elimínase en el número 3° del artículo 20 la palabra “mutuos”.

4) En el artículo 21 inciso segundo, elimínase la expresión “el impuesto del número 3, del artículo 104,”.

5) Reemplázase en el artículo 59, inciso cuarto, número 1, letra b), la expresión “el artículo 18 bis de esta ley y su reglamento”, por la expresión “la letra B), del artículo 9° transitorio, de la Ley que Regula la Administración de Fondos de Terceros y Carteras Individuales”.

6) En el artículo 74, inciso primero, reemplázase el número 7, por el siguiente:

“7.- Los representantes, custodios, intermediarios, depósitos de valores u otras personas domiciliadas o constituidas en el país que hayan sido designadas o contratadas por contribuyentes sin domicilio ni residencia en Chile, para los efectos de cumplir con las obligaciones tributarias provenientes de la tenencia o enajenación de los instrumentos de deuda de oferta pública a que se refiere el artículo 104, con una tasa de 4% sobre los intereses devengados durante el ejercicio respectivo, conforme a lo dispuesto en el artículo 20, número 2°, letra g). Esta retención reemplazará a la que establece el número 4º de este artículo respecto de los mismos intereses, pagados o abonados en cuenta a los contribuyentes sin domicilio ni residencia en Chile. Las personas señaladas precedentemente deberán informar al Servicio, en la forma y plazo que éste determine mediante resolución, sobre los antecedentes de las retenciones que hayan debido efectuar conforme a este número. La no presentación de esta declaración o su presentación extemporánea, incompleta o errónea, será sancionada con la multa establecida en el número 6º, del artículo 97, del Código Tributario, la que se aplicará conforme al procedimiento del artículo 165 del mismo texto legal.”.

7) Reemplázase el artículo 104, por el siguiente:

“Artículo 104.- No obstante lo dispuesto en el artículo 17°, número 8°, no constituirá renta el mayor valor obtenido en la enajenación de los instrumentos de deuda de oferta pública a que se refiere este artículo, siempre que se cumpla con los requisitos indicados en los siguientes números 1 y 2:

1.- Instrumentos beneficiados.

Podrán acogerse a las disposiciones de este artículo, los instrumentos que cumplan con los siguientes requisitos copulativos:

a) Que se trate de instrumentos de deuda de oferta pública previamente inscritos en el Registro de Valores conforme a la ley N° 18.045.

b) Que hayan sido emitidos en Chile.

c) Que se establezca, en la respectiva escritura de emisión, que los instrumentos se acogerán a lo dispuesto en este artículo y que, además de la tasa de cupón o de carátula, se determine, para cada colocación y después de cada una de ellas, una tasa de interés fiscal para efectos del cálculo de los intereses devengados conforme al inciso tercero, del número 2, del artículo 20.

c.1) Tasa de interés fiscal.

La tasa de interés fiscal aludida en el literal anterior, corresponderá a la tasa de colocación anual del instrumento, la que se expresa en porcentaje y que en la fórmula que se describe a continuación, se identifica como “TF”. Esta tasa corresponderá al número positivo que permita cumplir la siguiente igualdad:

La fórmula precedente es una identidad que indica que el precio del instrumento colocado corresponde a la suma del valor presente de cada flujo de caja “F” que el emisor del instrumento se compromete a pagar en cada fecha “t” y hasta el vencimiento del instrumento en la fecha “N”.

El valor presente de cada flujo de caja F que el instrumento se compromete a pagar en una determinada fecha t corresponde al flujo de caja F, multiplicado por un factor de descuento que corresponde al inverso de la suma de 1 más la tasa anual de colocación del instrumento “TF” elevada al número que resulte de dividir los días transcurridos entre la fecha en que ocurre el flujo respectivo y la fecha de colocación “fc” (t-fc), por 365.

De acuerdo a lo anterior, las variables intervinientes en la ecuación indicada anteriormente se definen de la siguiente manera:

TF = Tasa fiscal por determinar y corresponde a la tasa de colocación del instrumento. Esta tasa se expresa en porcentaje.

= Sumatoria desde la fecha de colocación del instrumento, fecha que definimos como “fc”, hasta el vencimiento del instrumento en la fecha “N”.

Ft = Flujo de caja (que incluye cupón y,o amortización de capital) que promete pagar el instrumento al tenedor de éste en una fecha “t”, según la tabla de desarrollo del instrumento, expresados como porcentaje del valor nominal.

t = Fecha de ocurrencia de un flujo de caja.

Precio de transacción = Relación expresada en porcentaje, entre la suma de dinero desembolsada por el o los inversionistas para adquirir el monto colocado por el emisor respecto a su valor nominal.

No obstante lo anterior, una o varias colocaciones de la misma emisión, posteriores a la primera, tendrán la misma tasa de interés fiscal que aquella, sólo si su respectiva tasa de colocación es menor o igual a la tasa de interés fiscal de la primera colocación, en cuyo caso se aplicará la tasa de interés fiscal correspondiente a la colocación inicial, siempre que, previo a la respectiva colocación, el emisor haya informado a la Superintendencia de Valores y Seguros, en la forma que ésta determine mediante norma de carácter general, que acogerá dicha colocación a lo dispuesto en este inciso. En todo caso, dicha norma de carácter general deberá incluir la forma de identificar las colocaciones que tengan tasa fiscal distinta de una misma emisión.

En caso de aumentar el monto emitido de una misma serie de títulos que cumplan copulativamente los requisitos señalados en las letras a), b) y c) precedentes, a través de una reapertura, de la cual se deje constancia en la escritura de emisión, el nuevo monto emitido y sus respectivas colocaciones, tendrán la misma tasa de interés fiscal de la primera colocación, sólo si la tasa de colocación de cada una de ellas es menor o igual a la tasa de interés fiscal de la primera colocación de la emisión de la serie original, y siempre que el emisor haya informado a la Superintendencia de Valores o Seguros, en la forma que esta determine mediante norma de carácter general, que acogerá dicha emisión a lo dispuesto en este inciso. En este caso podrá aplicarse lo dispuesto en el inciso precedente, cumpliéndose los requisitos que allí se establecen, respecto de las sucesivas colocaciones de la misma reapertura.

La tasa de interés fiscal será informada después de cada colocación, dentro del mismo día, por el emisor de los títulos a la Superintendencia de Valores y Seguros, quien mantendrá un registro público de dichas tasas.

2.- Contribuyentes beneficiados.

Podrán acogerse a las disposiciones de este artículo, los contribuyentes que enajenen los instrumentos a que éste se refiere, cumpliendo con lo señalado en las letras a) o b) siguientes:

a) Que entre la fecha de adquisición y enajenación de los instrumentos haya transcurrido a lo menos un año, o bien, el plazo inferior que se fije mediante uno o varios decretos expedidos bajo la fórmula “Por orden del Presidente de la República” por el Ministerio de Hacienda, requisito éste último que regirá durante el tiempo que cada uno de dichos decretos determine. En el caso de la primera dictación, de la modificación o reemplazo del señalado decreto, el plazo de permanencia que regirá para aquellos tenedores de bonos que hayan adquirido los títulos con anterioridad a su entrada en vigencia, será el mínimo plazo entre el que falte por completar para cumplir con el que establece la ley o, en su caso, el que señala el decreto vigente al momento de la compra, y el plazo que señale el nuevo decreto que se dicte.

b) Que hayan adquirido y enajenado los instrumentos en una Bolsa local, en un procedimiento de subasta continua, que contemple un plazo de cierre de las transacciones que permita la activa participación de todos los intereses de compra y de venta, el que, para efectos de este artículo, deberá ser previamente autorizado por la Superintendencia de Valores y Seguros y el Servicio de Impuestos Internos mediante resolución conjunta. Además, que hayan adquirido y enajenado los instrumentos por intermedio de un corredor de bolsa o agente de valores registrado en la Superintendencia de Valores y Seguros, excepto en el caso de los bancos, en cuanto actúen de acuerdo a sus facultades legales.

Tratándose de contribuyentes sin domicilio ni residencia en el país, deberán contratar o designar un representante, custodio, intermediario, depósito de valores u otra persona domiciliada o constituida en el país, que sea responsable de cumplir con las obligaciones tributarias que pudiesen afectarlos.

3.- Disposiciones especiales relativas a los pagos anticipados.

En el caso del pago anticipado o rescate por el emisor del todo o parte de los instrumentos de deuda a que se refiere este artículo, se considerarán intereses todas aquellas sumas pagadas por sobre el saldo del capital adeudado, además de los intereses referidos en el artículo 20, número 2, inciso tercero. Para los efectos de esta ley, los intereses a que se refiere este número se entenderán devengados en el ejercicio en que se produzca el pago anticipado o rescate.

4.- Los instrumentos emitidos por el Banco Central de Chile o por la Tesorería General de la República podrán acogerse a lo dispuesto en este artículo aunque no cumplan con uno o más de los requisitos señalados en el número 1 y 2 anteriores, siempre que los respectivos títulos se encuentren incluidos en la nómina de instrumentos elegibles que, para estos efectos, establecerá el Ministro de Hacienda

mediante decreto supremo expedido bajo la fórmula "Por orden del Presidente de la República", y que cumplan con las características y condiciones que en el mismo se definan, incluyendo la tasa de interés fiscal. Tratándose de los instrumentos emitidos por el Banco Central de Chile, su inclusión en dicha nómina de instrumentos elegibles deberá ser previamente solicitada por dicho organismo.

Respecto de los instrumentos a que se refiere este número, el requisito dispuesto en la letra b) del número 2 se entenderá cumplido cuando la adquisición o enajenación tenga lugar en alguno de los sistemas establecidos por el Banco Central de Chile o por el Ministerio de Hacienda, según corresponda, para operar con las instituciones o agentes que forman parte del mercado primario de dichos instrumentos de deuda. Asimismo, tales requisitos se entenderán cumplidos cuando se trate de adquisiciones o enajenaciones de instrumentos elegibles que correspondan a operaciones de compra de títulos con pacto de retroventa que efectúe el Banco Central de Chile con las empresas bancarias.

5.- Disposiciones relativas a deberes de información, sanciones y normas complementarias.

El emisor de los instrumentos a que se refiere este artículo, los depósitos de valores donde tales instrumentos estén depositados, las bolsas de valores del país que los acepten a cotización, los representantes de los tenedores de tales instrumentos, los custodios, intermediarios u otras personas responsables de cumplir con las obligaciones tributarias que pudiesen afectar a los contribuyentes tenedores, u otras personas que hayan participado en estas operaciones, deberán declarar al Servicio, en la forma y plazo que éste determine mediante resolución, las características de dichas operaciones, individualizando a las partes e intermediarios que hayan intervenido, los valores de emisión y colocación de los instrumentos y las demás materias que establezca dicho Servicio. La no presentación de esta declaración o su presentación tardía, incompleta o errónea, será sancionada con la multa establecida en el número 6º, del artículo 97, del Código Tributario, conforme al procedimiento del artículo 165, número 2°, del mismo texto legal.

La emisión o utilización de declaraciones maliciosamente falsas, se sancionarán en la forma prevista en el inciso primero, del número 4°, del artículo 97 del Código Tributario.

En caso que la información que se suministre conforme al presente número resultare ser falsa, o cuando la enajenación no se hubiere adecuado a las condiciones de mercado al tiempo de su realización, el inversionista o su administrador quedarán afectos a una multa de hasta el 20% del monto de las inversiones realizadas en el país, no pudiendo, en todo caso, dicha multa ser inferior al equivalente a 20 unidades tributarias anuales, la que podrá hacerse efectiva sobre el patrimonio del inversionista, sin perjuicio del derecho de éste contra el administrador. Las personas que hayan sido contratadas para los efectos de cumplir con las obligaciones tributarias provenientes de la tenencia o enajenación de los instrumentos de deuda de oferta pública a que se refiere este artículo serán

solidariamente responsables de esta multa, salvo que, cuando se haya aplicado con motivo de la entrega de información falsa, acrediten que las declaraciones de que se trate se fundaron en documentos proporcionados por el inversionista, o su administrador correspondiente, o que no tuvo incidencia en la inadecuación de la operación a las condiciones de mercado, y que el representante o intermediario no estuvo en condiciones de verificar en el giro ordinario de sus negocios. La multa de este inciso se aplicará conforme al procedimiento del artículo 165, número 2° del Código Tributario.

El Servicio podrá aplicar, respecto de las operaciones que establece este artículo, lo dispuesto en el artículo 17 N° 8 inciso quinto de la Ley sobre Impuesto a la Renta y en el artículo 64 del Código Tributario, en cuyo caso, la diferencia que se determine entre el precio o valor de la operación y el de la tasación se gravará conforme al inciso primero del artículo 21 de esta ley.

6.- Tratamiento de las pérdidas en la enajenación de los instrumentos a que se refiere este artículo.

Las pérdidas obtenidas en la enajenación de los instrumentos a que se refiere este artículo, solamente serán deducibles de los ingresos no constitutivos de renta del contribuyente.”.

8) Derógase el artículo 106.

9) Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 107:

a) Elimínase en el inciso segundo del número 1 la expresión “y 106,”.

b) Agrégase en la parte final, del inciso primero, del número 2), antes del punto aparte, la siguiente expresión: “y dicho fondo, al menos una vez al año, distribuya a sus aportantes la totalidad de los dividendos percibidos de las sociedades cuyas acciones tienen presencia bursátil.”; y reemplázase su inciso segundo por el siguiente “Se tendrá por incumplido el requisito establecido en la segunda parte del inciso anterior, si las inversiones del fondo respectivo en tales instrumentos resultasen inferiores a dicho porcentaje por un período continuo o discontinuo de 30 o más días en un año calendario. Las administradoras de los fondos deberán certificar anualmente al Servicio de Impuestos Internos, en la forma y plazo que éste lo requiera mediante resolución, el cumplimiento de este requisito. La emisión de certificados maliciosamente falsos se sancionará conforme a lo dispuesto en el inciso tercero del número 4° del artículo 97 del Código Tributario.”.

c) Elimínase el inciso primero del número 4).

10) En el inciso primero del artículo 108, reemplázase la expresión “los artículos 106 y” por “el artículo”.

11) Sustitúyese el artículo 109 por el siguiente:

“Artículo 109.- El mayor o menor valor en el aporte y rescate de valores en fondos cuyo reglamento interno contemple ese tipo de aportes y rescates, se determinará para efectos tributarios, conforme a las siguientes reglas:

1) Adquisición de cuotas mediante el aporte de valores.

a) El valor de adquisición de las cuotas del fondo para aquellos inversionistas que efectúen aportes en valores, se determinará conforme al valor cuota, definido por el Reglamento de la ley que regule la Administración de Fondos de Terceros y Carteras Individuales.

b) El precio de enajenación de los valores que se aportan corresponderá al valor al que esos títulos o instrumentos fueron valorizados por la administradora del fondo correspondiente al convertir el aporte en cuotas de ese fondo, el cual deberá estar contenido en un certificado que al efecto emitirá la administradora del fondo.

2) Rescate de cuotas mediante la adquisición de valores.

a) El valor de rescate de las cuotas del fondo para aquellos inversionistas que lo efectúen mediante la adquisición de valores que formen parte de la cartera del fondo, se determinará en la misma forma señalada en la letra a) del número precedente, el cual deberá ser contenido en un certificado que al efecto emitirá la administradora del fondo.

b) El valor de adquisición de los títulos o instrumentos mediante los cuales se efectúa el rescate a que se refiere el literal anterior, será aquél empleado por la administradora del fondo respectivo para pagar el rescate en esos valores. Del mismo modo, el valor de tales títulos o instrumentos deberá constar en el certificado que al efecto emitirá la administradora.”.

Artículo cuarto.- Deróganse los siguientes cuerpos legales:

a) Los Títulos XX y XXVII de la ley N°18.045.

b) El decreto ley N° 1.328, de 1976, cuyo texto refundido fue fijado por el decreto supremo de Hacienda N° 1.019, de 1979.

c) La ley N° 18.657.

d) La ley N° 18.815.

Para todos los efectos legales, debe entenderse que cualquiera referencia que en el ordenamiento jurídico se haga a los cuerpos legales derogados por el inciso anterior, debe entenderse efectuada a la presente ley.

Artículo quinto.- Sustitúyase el artículo primero transitorio de la ley N° 20.190 por el siguiente:

“Artículo primero.- Establécense las siguientes normas para incentivar la inversión en capital de riesgo:

1.- Norma para los fondos de inversión.

Para los efectos de lo dispuesto en la Ley sobre Impuesto a la Renta contenida en el artículo 1° del decreto ley N° 824, de 1974, se considerarán ingresos no constitutivos de renta los ingresos percibidos por los aportantes de fondos de inversión que cumplan con los requisitos de este número, originados en el mayor valor obtenido por el fondo de inversión respectivo en la enajenación de las acciones que se indican, en aquella parte que exceda del producto de multiplicar el valor de adquisición reajustado de las respectivas acciones, por el factor resultante de elevar 1,0003 a una potencia igual al número de días transcurridos entre la fecha de adquisición de las acciones y la de su enajenación.

Sólo podrán acogerse a lo dispuesto en este artículo el mayor valor obtenido en la enajenación de acciones emitidas por sociedades anónimas cerradas o sociedades por acciones que cumplan con los siguientes requisitos:

(i) Su enajenación se verifique después de transcurridos a lo menos veinticuatro meses de haberlas adquirido.

(ii) al momento de efectuar la enajenación, el monto invertido por el fondo de inversión en la sociedad cuyas acciones se enajenan no supere el 40% del total de aportes pagados por los aportantes al fondo.

(iii) el adquirente de las acciones y sus socios o accionistas, en el caso de ser sociedades, o sus partícipes, en el caso de ser un fondo, no se encuentren relacionados, en los términos del artículo 100 de la ley N°18.045, con el fondo de inversión enajenante, sus aportantes o su sociedad administradora, ni con los accionistas de ésta.

Para calificar a esta franquicia, los fondos de inversión deberán incorporar en su reglamento interno, los requerimientos y obligaciones establecidas en este número.

La totalidad de los activos del fondo de inversión, sin considerar las reservas de liquidez de corto plazo que se inviertan en los instrumentos que autorice la Superintendencia de Valores y Seguros mediante norma de carácter general, se destinarán exclusivamente a la inversión en sociedades que, al momento de la inversión por parte del fondo:

(i) sean sociedades anónimas cerradas o sociedades por acciones que no coticen sus acciones en Bolsa.

(ii) no hayan alcanzado un volumen anual de ingresos por ventas o servicios, excluido el Impuesto al Valor Agregado que hubiere afectado dichas operaciones, que supere en cualquier ejercicio comercial las 400.000 unidades de fomento, según su valor al término del año respectivo.

(iii) no tengan utilidades tributables retenidas que, debidamente reajustadas, excedan del equivalente a 20% del monto de su capital pagado, también reajustado.

(iv) no formen parte de ningún grupo empresarial incluido en la nómina publicada por la Superintendencia de Valores y Seguros en conformidad a lo dispuesto en el Título XV de la ley N°18.045.

En todo momento las sociedades en que estén invertidos los fondos no podrán tener como giro principal: (a) inmobiliarias o de casinos; (b) de concesiones de obras públicas o servicios sujetos a tarificación; (c) de importación de bienes o servicios; (d) de inversión, sea en capitales mobiliarios o en otras empresas; (e) de servicios financieros o de corretaje, ni (f) de servicios profesionales.

Además de dar cumplimiento a su reglamento interno, para la procedencia de esta franquicia los fondos de inversión deberán cumplir los siguientes requisitos:

(i) el monto de la inversión máxima a realizar por el fondo de inversión en una misma sociedad no podrá superar, al momento de efectuar cada inversión, el cuarenta por ciento del total de aportes pagados por los aportantes al fondo, debiéndose regularizar cualquier exceso de inversión que se produzca, sea por la vía de aumentar el capital pagado o de reducir el monto invertido, dentro del plazo máximo de 24 meses, salvo el caso de la primera inversión que realice el fondo de inversión, que podrá regularizarse hasta en 36 meses.

(ii) transcurrido un año de la primera inversión realizada por el fondo, ningún partícipe podrá poseer más de un 20% del total de cuotas del fondo, ya sea en forma individual o en conjunto con otras personas con las cuales mantenga un acuerdo de actuación conjunta, según dicho concepto está definido en la ley Nº18.045, salvo que se trate de un aportante que califique como inversionista institucional de acuerdo a lo establecido en la letra f) del artículo 4ºbis de la ley Nº18.045.

(iii) ser un fondo fiscalizado por la Superintendencia.

El resultado obtenido por el fondo de inversión en aquellas inversiones distintas a las permitidas en este artículo, no podrá acogerse a la franquicia prevista en este número, pero podrán considerarse en el cálculo de los límites de inversión requeridos para que el resultado obtenido por el fondo de inversión en sus restantes inversiones, pueda beneficiarse del tratamiento tributario previsto en este artículo.

2.- Norma para los demás inversionistas.

Para los efectos de lo dispuesto en la Ley sobre Impuesto a la Renta, los accionistas de aquellas sociedades susceptibles de ser objeto de las inversiones a que se refiere el numeral anterior y en que los fondos de inversión descritos en dicho numeral hayan adquirido a lo menos un 25% del capital accionario, calculado al momento de la respectiva inversión por parte de los fondos, podrán considerar como costo de adquisición de sus acciones, para efectos de determinar el mayor valor gravado por impuesto a la renta resultante de una enajenación de tales acciones, el más alto valor de adquisición pagado por uno de tales fondos de inversión en la más reciente colocación de acciones de primera emisión de la respectiva sociedad, de la misma serie, y en que las acciones adquiridas por el fondo representen a lo menos un 10% del capital accionario, ocurrida con anterioridad a la enajenación de las acciones.

Para que proceda lo dispuesto en este número será necesario que:

(i) las acciones que se transfieren hayan sido adquiridas y pagadas con a lo menos cien días de anticipación a la fecha de incorporación del primer fondo a la sociedad respectiva, cualquiera sea su participación;

(ii) la enajenación de las acciones se verifique después de transcurridos a lo menos doce meses de haberlas adquirido, y

(iii) el adquirente de las acciones y sus socios o accionistas, en el caso de ser sociedad, o sus partícipes, en el caso de ser un fondo, no se encuentren relacionados con el enajenante, o su controlador, en los términos del artículo 100 de la ley N°18.045.

3.- Vigencia.

Lo dispuesto en el N° 1 de este artículo se aplicará respecto del mayor valor generado en la enajenación de acciones que se adquieran por los fondos de inversión que cumplan los requisitos de ese numeral, a contar de la fecha de publicación de la presente ley y hasta el 31 de diciembre de 2022.

Lo dispuesto en el N° 2 de este artículo se aplicará respecto de las acciones adquiridas en cualquier momento previo al vencimiento del plazo antes indicado.

Artículo sexto.- Increméntase en 5 la dotación máxima de la Superintendencia de Valores y Seguros a partir del año de entrada en vigencia de la presente ley.

Disposiciones transitorias

Artículo 1° transitorio.- Salvo lo dispuesto en el artículo quinto, que regirá a partir de su publicación en el Diario Oficial, la presente ley comenzará a regir el primer día del mes subsiguiente al de la

dictación del decreto supremo del Ministerio de Hacienda que reemplace a los actuales decretos supremos N° 1.179, de 2010 y N° 864, de 1989, ambos del Ministerio de Hacienda, el que deberá ser emitido a más tardar seis meses después de la publicación de esta ley. A contar de la fecha de publicación de ese decreto supremo, se traspasarán automáticamente, y por el solo ministerio de esta ley, los reglamentos internos de fondos mutuos registrados en el antiguo “Registro Público de Depósito de Reglamentos Internos y Contratos de Suscripción de Cuotas de Fondos Mutuos”, al nuevo “Depósito de Reglamentos Internos”.

En igual plazo deberá dictarse el decreto supremo del Ministerio de Hacienda que modifique el actual decreto supremo N° 1.334, de 1995, del Ministerio de Hacienda.

Artículo 2° transitorio.- Las sociedades administradoras de fondos mutuos, de fondos de inversión, de fondos para la vivienda y generales de fondos deberán adecuar sus estatutos a las disposiciones establecidas en esta ley, así como cumplir las exigencias contempladas en este cuerpo legal, en el plazo de un año contado desde la publicación del decreto supremo a que hace referencia el artículo sexto.

Artículo 3° transitorio.- Las administradoras tendrán el plazo de un año, contado desde la fecha de publicación del decreto supremo a que hace referencia el inciso primero del artículo 1° transitorio, para depositar los reglamentos internos y demás documentación requerida por la Superintendencia de los fondos de inversión que administran, que hayan sido aprobados por la Superintendencia con anterioridad a esa fecha. Las cuotas de esos fondos podrán ser comercializadas sin que sea necesario el depósito respectivo, en tanto sus reglamentos internos o la referida documentación no sean modificados. Las modificaciones de esos reglamentos internos deberán cumplir las disposiciones introducidas por la presente ley y, en caso de tratarse de adecuaciones necesarias para el cumplimiento de esta ley, éstas deberán ser efectuadas dentro del mismo plazo.

En tanto los reglamentos internos de fondos mutuos no hayan sido depositados, seguirán rigiendo aquellas exigencias contenidas en los artículos 7°, 11 y 12 A del decreto ley N° 1.328, de 1976, y 226 y 227 de la ley N° 18.045, cuyo plazo para su cumplimiento comenzó a regir desde la fecha en que la administradora estuvo en condiciones de comercializar las cuotas del fondo respectivo, o a partir del funcionamiento de ese fondo según corresponda, y hasta que se cumplan los plazos establecidos en esta ley para el cumplimiento de las nuevas obligaciones que están condicionadas al depósito del reglamento interno en el “Depósito de Reglamentos Internos”.

Mientras los reglamentos internos de fondos de inversión no hayan sido depositados, seguirán rigiendo aquellas exigencias contenidas en los artículos 1°, 3°A y 18 de la ley N° 18.815, y 226 y 227 de la ley N° 18.045, cuyo plazo para su cumplimiento comenzó a regir desde la fecha en que la Superintendencia aprobó el reglamento interno del fondo respectivo, o a partir del funcionamiento de ese fondo según corresponda, y

hasta que se cumplan los plazos establecidos en esta ley para el cumplimiento de las nuevas obligaciones que están condicionadas al depósito del reglamento interno en el “Depósito de Reglamentos Internos”.

Artículo 4° transitorio.- Las sociedades que administren fondos para la vivienda tendrán el plazo de un año, contado desde la fecha de publicación del decreto supremo a que hace referencia el inciso segundo del artículo 1° transitorio, para depositar los reglamentos internos de los fondos que administran ajustados a las disposiciones establecidas en esta ley, cuyos contratos de administración hubieren sido inscritos por la Superintendencia en el registro que lleva para esos efectos, con anterioridad a esa fecha. Las cuotas de esos fondos podrán ser comercializadas a personas distintas de la institución con quien tenía suscrito tal contrato una vez efectuado el depósito respectivo.

Artículo 5° transitorio.- Los fondos de inversión constituidos al amparo de la ley N°18.657, derogada en el artículo cuarto de la presente ley, podrán continuar con sus operaciones en el país, conservando la garantía de invariabilidad establecida en el inciso tercero del artículo 15 de la ley N° 18.657 respecto de las inversiones que se hayan efectuado o que estén previamente autorizadas en este tipo de fondos de inversión, todo en conformidad a un contrato de inversión extranjera suscrito de acuerdo al decreto ley N° 600, de 1974. Conservarán, asimismo, el régimen de tributación establecido en dicha ley, incluyendo la posibilidad de distribuir rentas del artículo 106 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, que también es derogado por la presente ley. Estos fondos de inversión no podrán transformarse en o fusionarse con algunos de los fondos creados por la presente ley.

Artículo 6° transitorio.- Las administradoras de fondos de inversión de los referidos en los N° 1 y 3 del actual artículo primero transitorio de la ley N° 20.190, tendrán el plazo de un año, contado desde la fecha de publicación de la presente ley, para adecuar los reglamentos internos de dichos fondos a lo establecido en el N° 1 del nuevo artículo primero transitorio de la citada ley, introducido a través del artículo quinto. En cualquier caso, las inversiones que tales fondos hayan efectuado con anterioridad a la entrada de vigencia de la presente ley mantendrán el régimen tributario establecido en el actual artículo primero transitorio de la ley N° 20.190, en la medida que se dé cumplimiento a los demás requisitos allí establecidos.

Artículo 7° transitorio.- Lo dispuesto en los artículos 81, 82, 83 y 86 del artículo primero de la presente ley y las modificaciones introducidas a la Ley sobre Impuesto a la Renta mediante el artículo tercero de la presente ley, regirán a contar de la fecha de vigencia general de la presente ley establecida en el artículo 1° transitorio, respecto de los hechos acaecidos a contar de dicha fecha.

a) Los fondos de inversión constituidos al amparo de la ley N° 18.815, que la presente ley deroga, deberán, al 30 de abril del año siguiente a la fecha de vigencia establecida en el inciso anterior,

presentar una declaración ante el Servicio de Impuestos Internos en la forma y plazo que éste determine mediante resolución, en la que declare:

i) el saldo de beneficios acumulados en el respectivo fondo, así como el saldo que registre el Fondo de Utilidades Tributables y del crédito establecido en el artículo 56 N° 3 y 63 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, por el Impuesto de Primera Categoría que haya afectado a las cantidades allí registradas, así como el saldo del Fondo de Utilidades No Tributables por los ingresos no constitutivos de renta y rentas exentas que el fondo haya percibido de terceros. Los saldos y monto del crédito referidos deberán informarse según sus montos a la fecha de vigencia general de la presente ley. Dichas cantidades, se afectarán en su posterior reparto o distribución, con el régimen tributario establecido en la ley N° 18.815, imputándose en el Fondo de Utilidades Tributable o no Tributables, según corresponda, con preferencia a los nuevos beneficios o dividendos que se perciban y comenzando por las cantidades registradas en el Fondo de Utilidades Tributables, luego en el Fondo de Utilidades No Tributables y, finalmente, los demás beneficios netos que se repartan. En caso de que dichos fondos hayan dado cumplimiento a las disposiciones del artículo 11 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, los beneficios netos referidos, podrán ser distribuidos conforme al tratamiento tributario establecido en dicha disposición a los partícipes sin residencia ni domicilio en Chile existentes en dichos fondos con anterioridad a la vigencia general de la presente ley.

ii) el valor del patrimonio del fondo, y el número de cuotas en poder de cada participe, con individualización de cada uno de ellos, a la fecha de vigencia general de esta ley. La parte del mayor valor obtenido en la enajenación o el rescate de cuotas de los referidos fondos de inversión que fueron adquiridas con anterioridad a la fecha de vigencia general de la presente ley y que se efectúe con posterioridad a dicha fecha, y que se determine hasta el valor proporcional que representan las cuotas enajenadas sobre el total del patrimonio del fondo, según su valor a la fecha de vigencia señalada, quedará sujeto al régimen tributario contenido en la ley N° 18.815, mientras que la parte restante de dicho mayor valor, se sujetará al nuevo régimen tributario establecido en la presente ley.

b) El remanente de crédito fiscal por Impuesto al Valor Agregado que los fondos de inversión mantengan a la fecha de vigencia establecida en el inciso primero, podrá ser utilizado como tal por la administradora e imputarse al débito fiscal de dicho impuesto generado en su operación propia, sin perjuicio del derecho a repetición. Los fondos referidos y sus administradoras deberán, para estos efectos, cumplir con lo establecido por el artículo 2° transitorio y presentar una declaración ante el Servicio de Impuestos Internos, en la forma y plazo que éste determine mediante resolución, en la que declare el remanente de Impuesto al Valor Agregado existente a la referida fecha.

c) Los fondos de inversión, los fondos mutuos y las administradoras de ambos tipos de fondos, conforme a lo dispuesto en el artículo 2° transitorio de esta ley adecuen los estatutos de los fondos que administran a las disposiciones de la presente ley, deberán dentro del mismo

plazo establecido en dicha disposición, cumplir con las obligaciones administrativas tributarias establecidas en los artículos 81 y 86, según corresponda, ambos del artículo primero de la presente ley.

d) Los fondos mutuos constituidos al amparo del decreto ley N° 1.328, de 1976, que la presente ley deroga, deberán, al 30 de abril del año siguiente a la fecha de vigencia establecida en el inciso primero, presentar una declaración ante el Servicio de Impuestos Internos en la forma y plazo que determine mediante resolución, en la que declare:

i) el saldo inicial del registro establecido en la letra b), del N° 2, del artículo 81 establecido por el artículo primero de la presente ley, conformado por el saldo de beneficios netos pendientes de reparto y los dividendos recibidos de sociedades anónimas abiertas chilenas, afectos al Impuesto Global Complementario, y del crédito establecido en el artículo 56 N° 3 y 63 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, por el Impuesto de Primera Categoría que haya afectado a los citados dividendos, hasta antes de la fecha de vigencia general de esta ley. Dichas cantidades, se afectarán en su posterior reparto o distribución, con el régimen tributario vigente con anterioridad al establecido en la presente ley, imputándose con preferencia a los nuevos beneficios o dividendos que se perciban.

ii) el valor del patrimonio del fondo mutuo, y el número de cuotas en poder de cada participe, con individualización de cada uno de ellos, a la fecha de entrada en vigencia general de esta ley. La parte del mayor valor, obtenido en la enajenación o el rescate de cuotas de fondos mutuos adquiridos con anterioridad a la fecha de vigencia general de la presente ley y que se efectúe con posterioridad a dicha fecha, determinado hasta el valor proporcional que representan las cuotas enajenadas sobre el patrimonio total del fondo, según su valor a la fecha de vigencia de esta ley, quedará sujeto al régimen tributario vigente con anterioridad a la misma, mientras que la parte restante de dicho mayor valor, se sujetará al nuevo régimen tributario establecido en la presente ley.

iii) El Servicio de Impuestos Internos fiscalizará la correcta determinación del saldo de utilidades señalado, sin perjuicio de que será de cargo de la administradora acreditar fehacientemente, conforme a lo dispuesto en el artículo 21 del Código Tributario, dichas cantidades.

Artículo 8° transitorio.- Los instrumentos acogidos al artículo 104 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, que por el artículo tercero de la presente ley es reemplazado, que hayan sido adquiridos con anterioridad a la fecha de vigencia general de la presente ley, podrán en sus enajenaciones posteriores a dicha fecha, gozar de la liberación tributaria contenida en el nuevo artículo 104 con tal que el enajenante cumpla con lo dispuesto en alguna de las letras a) y b) del N° 2 del nuevo artículo 104. En todo caso, tratándose de la primera enajenación que se efectúe en forma posterior a la fecha de vigencia señalada de instrumentos acogidos al artículo 104 reemplazado y adquiridos con anterioridad a dicha fecha, respecto de la letra a) referida, no será necesario cumplir con el requisito de antigüedad allí señalado.

Las posteriores enajenaciones de instrumentos acogidos al artículo 104 reemplazado, se sujetarán en todo a lo dispuesto en el nuevo texto del artículo 74 N° 7 de la Ley sobre Impuesto a la Renta que por esta ley se establece.

Artículo 9° transitorio.- A) El mayor valor realizado por los inversionistas institucionales extranjeros con posterioridad a la entrada en vigencia de esta ley en la enajenación de títulos de oferta pública representativos de deudas, emitidos por empresas constituidas en el país, con anterioridad a la fecha de vigencia referida y que en su emisión no se hayan acogido al artículo 104 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, estará exento de los impuestos a la renta, con tal que cumplan con los siguientes requisitos durante el tiempo que operen en el país:

1.- Estar constituido en el extranjero y no estar domiciliado en Chile.

2.- Ser un inversionista institucional extranjero que cumpla las características que defina el reglamento, dictado mediante decreto supremo del Ministerio de Hacienda, para cada categoría de inversionista, previo informe de la Superintendencia de Valores y Seguros y del Servicio de Impuestos Internos.

3.- No participar directa ni indirectamente del control de las entidades emisoras de los valores en los que se invierte ni poseer o participar directa o indirectamente en el 10% o más del capital o de las utilidades de dichos emisores.

4.- Contar con un representante o agente constituido en Chile que se haga responsable del cumplimiento de las obligaciones tributarias.

5.- Los representantes o agentes a que se refiere el número anterior deberán declarar al Servicio de Impuestos Internos, en la forma y plazo que éste determine mediante resolución, las características de dichas operaciones, indicando a lo menos la individualización de las partes o intermediarios que hayan intervenido, así como los valores de emisión, colocación, compra y venta de los instrumentos, y demás que establezca dicho Servicio. La no presentación de esta declaración o su presentación tardía, incompleta o errónea, será sancionada con la multa establecida en el número 6º, del artículo 97, del Código Tributario, conforme al procedimiento del artículo 165, número 2°, del mismo texto legal.

Sin perjuicio de lo anterior, en el caso que el banco en el cual se liquidaron las divisas destinadas a la inversión, no fue designado como agente intermediario, deberá informar al Servicio de Impuestos Internos, cuando éste lo requiera, el origen y monto de las divisas liquidadas.

En caso que la información que se suministre conforme al presente número resultare ser falsa, o cuando la enajenación no se hubiere adecuado a las condiciones de mercado al tiempo de su

realización, el inversionista, o su administrador en su caso, quedará afecto a una multa de hasta el 20% del monto de las inversiones realizadas en el país, no pudiendo, en todo caso, dicha multa ser inferior al equivalente a 20 unidades tributarias anuales, la que podrá hacerse efectiva sobre el patrimonio del inversionista, sin perjuicio del derecho de éste contra el administrador. Las personas que hayan sido contratadas para los efectos de cumplir con las obligaciones tributarias provenientes de la tenencia o enajenación de los instrumentos de deuda de oferta pública a que se refiere este artículo, serán solidariamente responsables de esta multa, salvo que, cuando se haya aplicado con motivo de la entrega de información falsa, acrediten que las declaraciones de que se trate se fundaron en documentos proporcionados por el inversionista o su administrador correspondiente o que no tuvo incidencia en la inadecuación de la operación a las condiciones de mercado, y que el representante o intermediario no estuvo en condiciones de verificar en el giro ordinario de sus negocios.

El Servicio podrá aplicar, respecto de las operaciones que establece este artículo, lo dispuesto en el artículo 64 del Código Tributario, en cuyo caso, la diferencia que fundadamente se determine entre el precio o valor de la operación y el de la tasación se gravará conforme al artículo 21 de la Ley sobre Impuesto a la Renta.

B) Los inversionistas institucionales que cumpliendo con los requisitos del artículo 106 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, derogado por la presente ley, hayan adquirido valores a que se refiere el artículo 107 de la referida ley con anterioridad a la fecha de vigencia del artículo tercero de la presente ley que deroga el citado artículo 106, podrán, en la posterior enajenación de dichos valores gozar de la exención establecida en dicho artículo 106 con tal que durante su operación en el país y al momento de la enajenación cumplan con los requisitos establecidos en dicha disposición.”.

- - -

Acordado en sesiones celebradas los días 10 y 17 de julio y 7 de agosto de 2013, con asistencia de Honorables Senadores señores Andrés Zaldívar Larraín (Presidente), Camilo Escalona Medina, Carlos Ignacio Kuschel Silva (Baldo Prokurica Prokurica), Ricardo Lagos Weber y Jovino Novoa Vásquez.

Sala de la Comisión, a 12 de agosto de 2013.

ROBERTO BUSTOS LATORRE
Secretario de la Comisión

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY, EN SEGUNDO TRÁMITE CONSTITUCIONAL, SOBRE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DE TERCEROS Y CARTERAS INDIVIDUALES, Y DEROGA LOS CUERPOS LEGALES QUE INDICA.

BOLETÍN Nº 7.966-05

I. PRINCIPALES OBJETIVOS DEL PROYECTO PROPUESTO POR LA COMISIÓN:

- Sistematizar el marco regulatorio de la industria de fondos, otorgando una normativa común a todas aquellas materias que así lo requieren.

- Simplificar el marco regulatorio general de la industria, combinando liquidez, gobierno corporativo y perfil de los inversionistas, velando porque los distintos vehículos de inversión sean objeto de una regulación diferente sólo en la medida que se justifique.

- Profesionalizar la actividad de gestión y comercialización de fondos (estándares de idoneidad y conocimiento), que deben ser exigibles de las administradores de fondos y de los agentes colocadores de cuotas.

- Promover la competitividad e internacionalización de la industria.

- Perfeccionar el marco regulatorio de los Fondos de Inversión Privados.

- Generar de un marco regulatorio para la gestión individual de carteras.

- Atraer nuevos actores extranjeros y generar mayor competencia y diversidad de demanda en el mercado de renta fija local.

- Eliminar la obligación de contratar los servicios de una administradora de fondos para la vivienda y de tener que conformar un fondo especial para la inversión de tales recursos, con el objeto de disminuir los costos ligados a la gestión de ahorros para la vivienda y permitir una mejor diversificación de los recursos originados en ese ahorro.

II. ACUERDOS: aprobado en general (Unanimidad 4x0).

III. ESTRUCTURA DEL PROYECTO APROBADO POR LA COMISIÓN: la iniciativa está conformada por seis artículos permanentes (el primero de ellos compuesto por 103 artículos) y por 9 disposiciones transitorias.

IV. NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL: de aprobarse, los artículos 6°, 11, 22 letras e), g), h), e i), 23, 42, 43, 57, 58, 59, 85, 91 del artículo primero; letras b), c) y d) del artículo cuarto, y literales (i) y (ii) del inciso sexto del numeral 1 del artículo primero transitorio de la ley N° 20.190, sustituido en el artículo quinto del proyecto de ley, deben serlo por la mayoría absoluta de los Senadores en ejercicio, en virtud de lo dispuesto en el artículo 19, N° 23, de la Constitución Política de la República, en relación con el inciso tercero del artículo 66 de la misma Carta Fundamental.

V. URGENCIA: suma.

VI. ORIGEN INICIATIVA: Mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República.

VII. TRÁMITE CONSTITUCIONAL: segundo trámite.

VIII. APROBACIÓN EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS: aprobada en general por 93 votos a favor, 2 en contra y 3 abstenciones.

IX. INICIO TRAMITACIÓN EN EL SENADO: 8 de mayo de 2013.

X. TRÁMITE REGLAMENTARIO: informe de la Comisión de Hacienda.

XI. LEYES QUE SE MODIFICAN O QUE SE RELACIONAN CON LA MATERIA:

- Ley N° 18.046, sobre sociedades anónimas.

- Ley N° 18.045, sobre mercado de valores.

- Ley N° 19.728, que establece un seguro de desempleo.

- Ley N° 19.281, que establece normas sobre arrendamiento de viviendas con promesa de compraventa.

- Ley N° 19.882, que regula nueva política de personal a los funcionarios públicos que indica.

- Ley N° 20.190, que introduce adecuaciones tributarias e institucionales para el fomento de la industria de capital de riesgo y continua el proceso de modernización del mercado de capitales.

- Ley N° 18.591, contiene normas complementarias de administración financiera, de incidencia presupuestaria y de personal.

- Ley N° 18.657, que autoriza creación de fondo de inversión de capital extranjero.

- Ley N° 18.815, regula fondos de inversión; modifica decretos con fuerza de ley números 251 y 252, ambos del Ministerio de Hacienda, de 1931 y 1960, respectivamente, y la ley N° 18.045.

- Ley N° 18.840, orgánica constitucional del Banco Central de Chile.

- Decreto ley N° 600, de 1974, que establece el estatuto de la inversión extranjera.

- Ley N° 18.876, que establece el marco legal para la constitución y operación de entidades privadas de depósito y custodia de valores.

- Decreto ley N° 825, de 1974, que establece la ley sobre impuestos a las ventas y servicios.

- Código Tributario.

- Decreto ley N°824, de 1974, que establece la ley sobre impuesto a la renta.

- Decreto ley N° 1.328, que fija normas para la administración de fondos mutuos.

- Decreto ley N° 3.500, que establece un nuevo sistema de pensiones.

- Decreto ley N° 3.538, de 1980, que crea la Superintendencia de Valores y Seguros.

Valparaíso, 12 de agosto de 2013.

ROBERTO BUSTOS LATORRE
Secretario de la Comisión